



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO EN ESTUDIOS
LATINOAMERICANOS**
*Área ‘Estado y sociedad: instituciones, procesos políticos y
movimientos sociales en América Latina’*

***“Reconfiguración del Estado en Chile y Brasil: Alianzas
neoliberales entre grupos económicos y poder político bajo
gobiernos progresistas”***

Investigación realizada gracias al Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la UNAM IN 302018 “Construcciones sociales alternativas ante los límites planetarios a la acumulación capitalista”. Agradecimientos a la DGAPA-UNAM por la beca recibida

T E S I S

**QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE:
Maestro en Estudios Latinoamericanos**

P R E S E N T A:

PABLO CARLOS ROJAS GÓMEZ

Director de tesis :
LUCIO FERNANDO OLIVER COSTILLA
Centro de Estudios Latinoamericanos/FCPyS

Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 2019



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

A mis compañeras y compañeros del Frente Amplio en Chile, quienes me hicieron refrescar esa utopía que dice que se puede anhelar sin sumisión más allá de lo que está dado. De ellos aprendí a hacer que las cosas sucedan...

A mis compañeras y compañeros del Partido Socialismo y Libertad en Brasil, quienes me hicieron recordar un poco de lo que nos puede pasar en el futuro. De ellos aprendí a disfrutar la amistad y la libertad. Sé que mañana será otro día y que pronto vencerán al fascismo que retorna amenazante...

A mis compañeras y compañeros de Relevo XXI en México, quienes cobijaron algunas de mis más remotas ideas y me hicieron reconciliar con los tiempos de nueva esperanza popular que se vive en México. A ellos les digo que los momentos de miseria y crisis no son para siempre y que nuestro lugar será estar del lado de toda esa gente que anhela un cambio real, a ellos se debe este esfuerzo por derrumbar la herencia neoliberal. Vamos a recuperar la alegría...

A mis padres y mi hermano, que sin duda alguna son mi mayor sostén, mis mejores aliados, que en los momentos de la derrota siempre me abrazaron, me dieron calor y aliento para volver al ruedo. Sepan que esto es parte de lo que me enseñaron...

A Marcela, Carolina, Yoslane y César, mis cómplices de los primeros andares de esta nueva vida...

“Servimos en el marxismo a la realidad, es decir, al mundo objetivo, a las clases sociales y su conjunto material, a la escala de su desarrollo y al momento de su desarrollo. El estudio de las condiciones objetivas del momento presente es, por cierto, algo que caracteriza a una correcta política marxista. Es verdad, sin embargo que no sirve de un modo adecuado a la realidad, sino cuando se la transforma. No hay otro modo de conocerla. Es la realidad misma, por lo demás, la que nos convoca y nos habilita para ese acto de reconstrucción. Ella produce la conciencia en los hombres cuando su voluntad interna quiere que los hombres vuelvan sobre ella y la cambien...”

René Zavaleta, ‘El poder dual en América Latina’

ÍNDICE

Introducción.....	7
<i>Capítulo 1</i> Estado y neoliberalismo	14
I. El Estado continúa al centro del debate	14
II. Reconfiguraciones del neoliberalismo en América Latina	17
III. Estado capitalista neoliberal y lucha de clases	22
IV. El Estado como relación social	25
V. Estado, bloque de poder y fracciones de clase	31
VI. Las alianzas neoliberales y la representación política	35
VII. Estado neoliberal, dependencia y patrón exportador de producción especializada	41
<i>Capítulo 2</i> El caso chileno: El Neoliberalismo del Partido Socialista y el pacto concertacionista	49
I. Genealogía y conformación de la burguesía asociada en Chile.....	54
<i>Cambios en la estructura socio-económica chilena y sustitución del patrón de reproducción industrial</i>	54
<i>Constitución de los grupos económicos durante la dictadura: Primera generación empresarial</i>	59
<i>La emergencia de la burguesía de segunda generación</i>	64
<i>Desempeño histórico de los grupos económicos de segunda generación en la consolidación de los gobiernos concertacionistas</i>	73
II. Alianzas entre los gobiernos del Partido Socialista y la burguesía de segunda generación	76

<i>Los Grupos Empresariales durante el gobierno de Ricardo Lagos 2000-2005</i>	76
<i>Los Grupos Empresariales durante el gobierno Michelle Bachelet 2006-2010</i>	77
<i>Alianzas políticas entre Estado y grupos económicos bajo gobiernos socialistas</i>	79
<i>La política desde la burguesía: financiamiento empresarial hacia el mundo de lo político</i>	82
<i>Financiamiento de las campañas y los casos de corrupción</i>	84
<i>El caso Caval</i>	86
III. Las mutaciones del proyecto del Partido Socialista de Chile	87
<i>Breve recuento histórico de las mutaciones del Partido Socialista</i>	88
<i>Del proyecto socialista al proyecto neoliberal</i>	90
IV. Estado neoliberal y bloque de poder: el Partido Socialista de Chile, la Concertación de los Partidos por la Democracia y la Burguesía Asociada	92
<i>Crisis del bloque de poder, crisis de hegemonía y ruptura de la relación Estado-Sociedad en Chile</i>	99
Capítulo 3 El caso brasileño: adaptaciones del neoliberalismo durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores.....	103
<i>El neoliberalismo sostenido a través de conciliación de clases</i>	103
I. Breve balance histórico de los gobiernos del PT en Brasil	105
<i>Primer período: El PT de izquierda y de los movimientos sociales (1989-2001)</i> ..	105
<i>Segundo período: Primer gobierno Lula (2002-2006)</i>	108
<i>Tercer período: Segundo gobierno Lula (2007-2010)</i>	109
<i>Cuarto período: Primer gobierno Dilma (2011-2014)</i>	111
<i>Quinto período: Segundo gobierno Dilma M(2015-2016)</i>	113
II. Neoliberalismo y neodesarrollismo: dos patas de un mismo patrón de reproducción de capital	115

<i>El neodesarrollismo como sostenedor del patrón de exportación de producción especializada</i>	119
III. El PT y la conciliación de clases: la apuesta por la clase dominante	126
<i>La conciliación del PT con los grandes grupos económicos</i>	128
<i>Las principales empresas beneficiadas por el PT</i>	145
<i>El rol del BNDES y el fortalecimiento de la burguesía productiva interna</i>	158
IV. Las contradicciones de la conciliación de clases y del frente neodesarrollista: las imposibilidades de la alianza entre la burguesía interna y el PT y la adopción del neoliberalismo	160
<i>Contradicciones del frente neodesarrollista y reconfiguraciones dentro del bloque de poder</i>	168
<i>La ruptura del frente neodesarrollista y sus imposibilidades como proyecto alternativo al neoliberalismo</i>	172
Conclusiones	181
Bibliografía	191

Introducción

Hasta hace poco en América Latina el concepto de posneoliberalismo se había puesto en boga, pues se venía hablando de que el arribo de gobiernos progresistas había significado una superación del neoliberalismo (Sader, 2013) en paralelo a la instalación de nuevos modelos de desarrollo y de cambios sustanciales en la relación economía-sociedad que dieron pie a nuevas teorizaciones sobre propuestas de modelos sociales como el neodesarrollismo (Bresser-Pereira, 2017)(Mercadante, 2013).

Tanto posneoliberalismo como neodesarrollismo son dos conceptos insuficientes para explicar los fenómenos recientes en América Latina, pues incluso se han puesto en entredicho frente al actual giro de recomposición neoliberal, ya que se plantea la problemática de que si ya existía un nuevo modelo de desarrollo distinto y de superación del neoliberalismo en marcha, como aseguraron algunos intelectuales ¿por qué razón grupos políticos neoliberales se han hecho de nuevo del control del gobierno?

Para entrar en materia y en reflexiones más profundas es necesario especificar la actual disputa en que se encuentra el Estado latinoamericano. Frente a la oleada neoliberal de finales de la década de los 70 y buena parte de los 80 que generó una política de exclusión, aumento de la explotación y de los índices de desigualdad, emergieron distintos movimientos sociales que impugnaron el proyecto hegemónico durante los años 90 (Thwaites, 2016) (Oliver, 2016). De esos movimientos de resistencia cuajaron gobiernos que intentaron revertir los efectos del embate neoliberal, generando políticas sociales de disminución de la pobreza y de la desigualdad, limitando la lógica represiva-policial y rebelándose ante ciertos mandatos imperialistas de Estados Unidos y de las exigencias establecidas por ese país durante las décadas anteriores que se ejercían a través del modelo de ajuste, de endeudamiento y de recortes sociales.

No todos los gobiernos progresistas tuvieron los mismos matices y características, puesto que no en todos los casos se establecieron igual las distintas relaciones sociales de poder. Ciertos países como Venezuela, Bolivia y en cierta medida Ecuador, generaron alianzas más importantes con sectores empresariales nativos

y con clases populares. En esos países, los gobiernos, contaron con fuerte enclave en los movimientos de resistencia, por lo que se convirtieron entonces, también en gobiernos de resistencia, como forma de defensa ante la ofensiva de clase.

Otros gobiernos como los de Argentina, Brasil o Uruguay se posicionaron en pos de la administración y la gestión progresista del capitalismo, así como de su desarrollo, lo que les condujo a la adopción de un carácter socialdemócrata progresista, pero sin trastocar estructuras capitalistas. En ese sentido, aunque la mayoría de los partidos que consiguieron ganar elecciones y conformar gobiernos progresistas provenían de las luchas sociales de izquierda del siglo XX, eso no significó que todos por igual pugnarán por la transformación de las relaciones sociales constitutivas del Estado o que asumieran la lucha de clases como un elemento clave en sus posiciones políticas. Los gobiernos progresistas más bien se establecieron como rutas de escape frente al acoso neoliberal y también frente al reflujo dejado por la caída del Muro de Berlín y de la Unión Soviética. Aunque el neoliberalismo fue parcialmente desplazado del eje de los órganos de gobierno en varios países latinoamericanos, se mantuvo vivo como visión de mundo en núcleos de poder que trasladaron su espectro de influencia a otros nichos, tales como los parlamentos, los mercados en manos del poder empresarial financiero-exportador transnacional y extractivista, los gobiernos municipales, provinciales o regionales.

En ese sentido la condición de dependencia latinoamericana no solo no fue superada o disminuida, sino que sencillamente fue actualizada pues los gobiernos progresistas continuaron sosteniendo el patrón de reproducción de capital exportador de producción especializada.

Además durante ese período se fortaleció el patrón exportador de producción especializada inaugurado años atrás por los gobiernos neoliberales, con importantes apoyos a la burguesía en todo momento, incentivando el intercambio desigual y subordinado frente a países centrales, lo que les llevó a fortalecer y legitimar el carácter dependiente de sus países, apostando a realizar cambios desde arriba, y en el caso de Brasil sin trastocar estructuras, sin llevar a cabo reformas hacendarias, en telecomunicaciones, políticas o jurídicas, en suma, sin realizar cambios sustanciales en las relaciones sociales, negándose a encabezar cambios culturales profundos.

En el caso de Brasil, la perspectiva de arribo al gobierno sin trastocar las formas orgánicas del Estado se realizó a partir de una política de conciliación de clases que consistía en generar programas sociales para las clases más empobrecidas al mismo tiempo que generaba una serie de incentivos y apoyos a las distintas fracciones de la burguesía. La política de los gobiernos del Partido de los Trabajadores procuró corregir problemas y obstáculos en la reproducción del capital, de fomento a la burguesía productiva interna tendientes a la expansión a mercados regionales multinacionales. Esa política se llevó a cabo apostando a realizar cambios desde arriba, sin trastocar estructuras ni generar alianzas a largo plazo con los movimientos y organizaciones sociales activos. En suma, el neoliberalismo se mantuvo vivo en estructuras de Estado y en las relaciones sociales entre gobierno y burguesía. Además, es importante señalar que no se lograron constituir nuevos bloques de poder que soportaran un desarrollo económico nacional distinto al neoliberal, lo que colocó a los gobiernos del PT en una situación de servidumbre frente al poder político y económico de las grandes empresas, lo que significó una atadura que llevó al PT a asumir abiertamente la agenda neoliberal de ajuste durante el segundo gobierno de Dilma Rousseff, afianzando alianzas con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, al colocar como Ministro de Hacienda a un personero de estos organismos internacionales.

El caso de Chile resulta todavía más emblemático durante los gobiernos del Partido Socialista (PS), los cuales, encabezados primero por Ricardo Lagos y después por Michelle Bachelet, se convirtieron abiertamente en legitimadores del orden neoliberal desde un discurso en pos de igualdad y justicia social. Los gobiernos del PS en conjunto con la Democracia Cristiana se dedicaron a ser meros administradores del bloque de poder heredado por la dictadura y de las relaciones sociales neoliberales establecidas. Sin cambiar de fondo, estos gobiernos simplemente abrazaron el proyecto neoliberal y se dedicaron a corregirlo con un discurso social que pretendía apropiarse de demandas de los movimientos sociales como lo fue la exigencia de educación pública y gratuita o la conformación de una nueva constitución. Sin embargo su discurso resultó ser una mera ilusión que no llevó a cabo nuevos proyectos de sociedad.

Para desarrollar la presente tesis se eligió considerar los casos de Brasil y Chile para contrastar las diferencias y limitaciones de proyectos de partidos otrora de izquierda como lo fueron el Partido de los Trabajadores y el Partido Socialista, los cuales fueron sufriendo conversiones en su constitución político-ideológica hasta adoptar distintos grados de políticas neoliberales durante sus gobiernos. En este trabajo partimos de entender un matiz existente entre ambos casos, pues adoptaron en diferente medida el neoliberalismo como política.

En el caso de Chile, el progresismo resultó sumamente limitado, a pesar de que el Partido Socialista aún mantenía las mismas siglas de la institución que había llevado al gobierno a Salvador Allende décadas atrás. Con una historia de persecución y una refundación radical durante la dictadura, los gobiernos democráticos heredaron un modelo consolidado de Estado y sociedad neoliberal, con un proyecto hegemónico de la burguesía conformada al alero del dictador. Ese elemento es central para entender la conversión del Partido Socialista y apuntar al centro del espectro político en Chile. Sin embargo, después de las protestas y de la nueva oleada de movimientos sociales que se suscitaron entre 2006 y 2011, el gobierno del Partido Socialista se presentó a las elecciones de 2014 abanderando consignas y demandas de esos movimientos sociales, tales como las reivindicaciones por educación gratuita, salud pública y una nueva constitución. En ese tenor, el Partido Comunista se sumó a la alianza previa que existía entre la Democracia Cristiana y el Partido Socialista. El PC es una organización política con un fuerte arraigo en las luchas sociales hasta ahora, pero que al momento de sumarse a la alianza no consiguió mayor peso político ni poner sobre la mesa su agenda. En ese sentido, autores como Manuel Antonio Garretón han venido hablando de un “neoliberalismo corregido y un progresismo limitado” (Garretón, 2012), en las que el propio Partido Socialista asumió las condiciones dejadas por la dictadura y optó por administrar y gestionar el Estado, que no sobra decir, continúa siendo un Estado completamente neoliberal. Los gobiernos del Partido Socialista limitaron su propio progresismo, aunque vigente aun en discurso, y optaron por una posición de centro político, asumiendo el chantaje de que apostar por la izquierda es apostar por la desestabilización en un país profundamente conservador, por lo que habría que

evitar la polarización político-ideológica y no reeditar el problema de confrontación del gobierno allendista.

A lo largo de la presente tesis, se demostrará que en los hechos el progresismo en Chile es realmente nulo y la conversión del Partido Socialista fue más bien un abrazo al Estado neoliberal, apostando por su gestión y maquillaje con un neoliberalismo de cara amable. Esa posición abiertamente neoliberal y de centro político se enclavó en un bloque de poder prestablecido durante la dictadura conformado con la hegemonía plena de la burguesía trasnacional en alianza con grupos tecnócratas formados en el extranjero. Ese mismo bloque fue abrazado y reproducido por los gobiernos del PS renunciando incluso a su carácter reformista.

En el caso de Brasil, el matiz es trascendente: sin una dictadura con los alcances refundacionales del caso chileno y sí en cambio con una burguesía frágil, carente de proyecto de nación y de sociedad, el neoliberalismo no alcanzó los niveles de consolidación que sí alcanzó Chile.

Ahora bien, el tema de Brasil fue retomado para el presente trabajo para analizar otro tipo de caso, en el que es importante entender por qué el progresismo de los gobiernos del PT no logró superar y transformar estructuras sociales de un Estado capitalista neoliberal, decantando con eso, en una adopción del neoliberalismo, como sucedió ya de manera abierta durante el último mandato de la expresidenta Dilma Rousseff, con un claro programa de política de ajuste. Además, es importante analizar el fracaso progresista del PT en Brasil a la luz de los últimos resultados electorales y el nuevo empuje de la ultraderecha personificada en Jair Bolsonaro y su abierto programa de renovación ultraconservadora que consiguió la presidencia con el apoyo de las clases dominantes y de un sector importante del ejército, además de haber ganado la simpatía de las clases medias, hecho que le dejó con el 55.13% de votos, frente al 44.87% del petista Fernando Haddad.

Ese fenómeno no puede entenderse sin antes realizar un análisis exhaustivo de los problemas, limitantes y fracasos de la política progresista del PT, sobretudo en términos de su relación con los sectores populares, puesto que impera un sesgo de desencanto, hartazgo y reproche contra el mismo petismo, que aunque sin duda ha sido potenciado exponencialmente por la derecha y por los distintos órganos

parlamentarios, judiciales, mediáticos, etc, lo cierto es que el desencanto con el PT sí permeó en las capas subalternas que no salieron a defender masivamente a Dilma Rousseff durante el golpe de estado de 2015.

. En ese sentido, el frente neodesarrollista conformado por una alianza entre la burguesía productiva interna expansiva y el Partido de los Trabajadores permitió al gobierno sostener un progresismo con mayor alcance que el de Chile, aunque con menos conquistas que los gobiernos de Venezuela o Bolivia. Es por eso que la fuerza de los programas sociales del gobierno petista brasileño no tienen punto de comparación con los programas sociales focalizados y reducidos de los gobiernos del PS en Chile. La alianza del PT con la burguesía productiva interna es un matiz importante que no sostuvo el PS en Chile, pues la hegemonía plena de la burguesía trasnacional impidió eso en el país andino, bloqueando también la posibilidad de conformar un verdadero proyecto progresista. Sin embargo la puesta en marcha del frente neodesarrollista resultó ser solo un ensayo (Singer, 2015) mal logrado que se desboronó una vez que lo alcanzó la crisis económica de 2008 con la caída de los precios de las materias primas en el mercado mundial, lo que encontró como consecuencia que la burguesía interna terminara replegándose a defender sus intereses de clase bajo el cobijo ultraneoliberal, dejando solo al gobierno en momentos de alta conflictividad. Las propias contradicciones del ensayo neodesarrollista en un contexto de dependencia fueron las limitaciones que le impidieron consolidarse

A lo largo de la tesis se busca desarrollar una explicación del por qué gobiernos como el del Partido de los Trabajadores en Brasil y del Partido Socialista en Chile adoptaron el proyecto neoliberal de manera franca. Para conseguirlo se utilizará una perspectiva que se distancia de las tendencias y corrientes teóricas hegemónicas de la Ciencia Política, tales como el neoinstitucionalismo o la opción racional. En esta tesis se partirá más bien desde el enfoque del Estado relacional (Poulantzas, 1979) (Jessop, 2014), que opta por pensar al Estado como una síntesis y condensación de relaciones sociales de poder.

En contraste con las actuales tendencias de la teoría política no se partirá del estudio parcializado de las instituciones y del sistema de partidos, por el contrario, se buscará abordar la problemática desde el estudio del Estado como totalidad

concreta epistémica (Kosík, 1967). A raíz de eso, se entenderá al Estado como condensación de relaciones sociales (Ibídem), lo que lleva a estudiar las alianzas y confrontaciones de las clases y grupos de poder al interior del Estado, pero también a analizar la conformación de los bloques de poder y frentes político-económicos en Brasil y Chile para poder plantear qué tanto se separaron el PT y el PS de las lógicas y dinámicas relacionales neoliberales.

Es por eso que el método de análisis consiste en abordar las alianzas, los procesos de representación de intereses y la constitución de proyectos económico-políticos en ambos países, abordando y rastreando los espacios de donde provinieron los ministros de estado, estudiando los grupos económicos a los que estos respondían, indagando en la constitución histórica de los bloques de poder y siguiendo las conversiones político-ideológicas del PT y del PS que les llevaron a una adopción franca del programa neoliberal. Este trabajo se plantea por todo ello ser una contribución a la discusión sobre el análisis del Estado latinoamericano y sus transformaciones actuales.

Capítulo 1 Estado y neoliberalismo

I. El Estado continúa al centro del debate

Durante los últimos años se ha venido vaticinando la extinción del Estado-Nación a través de un proceso de subordinación del poder político, que es supuestamente distribuido o difuminado en distintos centros de poder transnacional, impidiendo que las decisiones políticas se tomen de manera interna (Castel, 2010) (Beck, 1998) (Bauman, 2008) (Castells, 1997)

También otro tipo de posturas, de cuño neoliberal, han apostado por sostener que el Estado siempre fue una máquina pesada y burocrática, que debía ser desmontada y achicada, para poder asegurar un mejor funcionamiento de la dinámica social a través de la libertad del mercado (Hayek, 2008)

Sin duda alguna, el papel del Estado ha cambiado en los años recientes, sin embargo, una cosa es hablar de cambios y reconfiguraciones y otra muy distinta de extinción. Lejos de desaparecer, el Estado se mantiene vigente, siendo un elemento fundamental en la vida social, como orden político, económico, cultural e ideológico (Oliver, 2011). El Estado continúa siendo eje rector en la organización de la sociedad, en la dirección y estructuración de esta. En breve, el Estado sigue siendo un elemento central de la organización social del capitalismo como orden (Hirsch, 1996)

Ahora bien, es necesario mencionar que las reconfiguraciones del Estado durante el período neoliberal y de mundialización han sido muchas y muy significativas, tomando en cuenta la sumisión de los gobiernos locales frente a los poderes transnacionales reduciendo su margen de soberanía nacional, sin embargo, lejos de atender a una extinción, más bien asistimos a una serie de reconfiguraciones del Estado-Nación (Oliver, 2011) en donde lejos de desaparecer junto con el poder político que lo sustenta, este se centraliza en mayor medida (Osorio, 2004), con tal de permitir que la liberalización de la economía pueda realizarse desde el Estado, a través de privatizaciones y del sometimiento nacional ante la deuda externa (Saxe-

Fernández & Delgado, 2004), a través de la liberalización de las tasas de impuestos, aduanas, y del desmonte del rol público del Estado.

El Estado neoliberal profundiza la subordinación total de los países hacia los poderes económicos mundiales, incentivando la apertura irrestricta al capital trasnacional, otorgándole subsidios, permitiendo la absorción subordinada de las burguesías internas en los corporativos de las burguesías trasnacionales. Es así como el Estado neoliberal recrudece la situación de dependencia mundial y también de subordinación de la esfera de lo social hacia el gran poder económico capitalista. Mientras los grupos políticos dirigentes se posicionan en un estado de permanente servilismo, se ven beneficiados por los negocios que establecen con las empresas trasnacionales, suscitando casos de corrupción en todos los países. Cada político tiene que llevarse su tajada a cambio de permitir el saqueo de los recursos naturales de sus países, trasladando lo que otrora era del interés público a las manos de los grandes propietarios privados, siempre privilegiando la primacía de la burguesía trasnacional por encima de la interna.

Como parte de las contradicciones del Estado neoliberal, tenemos que a la par de que se disminuye la soberanía nacional de manera más radical, colocándose en posiciones de subordinación y sumisión frente a los organismos político-económicos internacionales (BM,FMI) y los grandes monopolios trasnacionales, los estados neoliberales periféricos latinoamericanos mantienen la centralización interna de la toma de decisiones, generando una situación de agudización de la exclusión del grueso de la población en la discusión y toma de decisiones trascendentales (Oliver, 2005), orillando a la democracia a centrarse en un mero juego institucional, acentuando la fetichización y descomposición del poder político, alejándolo cada vez más de la sociedad, hecho que a pesar de ser característico del capitalismo, se profundiza.

El neoliberalismo conformó un camino para sostener el patrón de reproducción de capital mundial a través de una serie de medidas que consistieron en el endeudamiento público de los países periféricos, la reducción drástica de la inversión social, la desestatalización de la producción y comercialización, la

liberalización del mercado interno y mundial, pero sobretodo, el neoliberalismo buscó privilegiar el dominio social de una burguesía transnacionalizada¹

El Estado neoliberal promovió no solo el enriquecimiento económico sumamente concentrado en unas cuantas manos, sino también les permitió a los poderes económicos decidir el rumbo político y social de las naciones, primando sus intereses de clase por encima de los intereses de las mayorías, generando un Estado centralizado y autoritario en sumisión permanente al poder económico.

Esta característica demuestra que realmente la dicotomía que tanto pregonó el neoliberalismo Estado Vs. Mercado, realmente es inexistente, y al contrario, impera un clivaje de Democracia Vs. Mercado (Borón, 2012), pues en tanto priman los intereses privados de los empresarios y de la clase capitalista dominante, se restringen en sobremanera los intereses de las clases populares dominadas, siendo excluidas sin tapujos de la toma de decisiones que les conciernen a ellos mismos como parte de la formación social (Oliver, 2005). El reforzamiento del poder centralizado del Estado capitalista neoliberal solo puede implicar una mayor exclusión social y el desgaste de la aspiración de democracia representativa.

Eso, además de que es desde el Estado que se ha podido sostener el neoliberalismo como proyecto dominante, pues a partir del apoyo decidido de los gobiernos y del personal del Estado es que se han fomentado los innumerables y cuantiosos rescates financieros de las bancas y el sostenimiento del pago de la línea de créditos a EUA, además de las privatizaciones de los sectores productivos estratégicos de las naciones y el fomento de la extrema concentración de riqueza. El Estado no ha sido un elemento contrapuesto al neoliberalismo, todo lo contrario, en su interior se ha potenciado el carácter neoliberal, privatizando, controlando las políticas económicas y protegiendo a las grandes burguesías. Es desde el Estado que se insertó el neoliberalismo como proyecto a través de las tecnocracias gubernamentales que argumentando “apoliticidad” y “experticie” lograron imponer los programas de liberalización, privatización y subordinación.

¹ Por eso, suele hacerse referencia al neoliberalismo como una fase avanzada del capitalismo, es decir, una fase del capital sin regulación, con predominio de la propiedad privada a través de su comercio en el mercado. Se entiende sin regulación ya que en algún momento el mercado y la actividad comercial tuvieron mayor regulación por parte del Estado en comparación a como sucedió durante la etapa neoliberal.

Fue el Estado, como campo de disputa, como espacio de condensación de relaciones sociales, crucial para la hegemonización del proyecto neoliberal, que sin embargo, poco a poco se fue encontrando con mayor cantidad de impugnaciones y cuestionamientos por parte de los movimientos sociales y las fuerzas progresistas.

II. Reconfiguraciones del neoliberalismo en América Latina

Durante las últimas décadas el Estado latinoamericano ha sido un elemento clave en la disputa entre clases por la conducción de la vida social. Fue el Estado el garante de la aplicación del proyecto neoliberal en toda América Latina, pero fue también el Estado, el campo de lucha en el que se intentaron cristalizar las disputas en contra del neoliberalismo.

El Estado como campo de lucha y síntesis de relaciones sociales se configura y reconfigura a partir de las disputas de las distintas clases y grupos políticos que empujan determinados proyectos sociales, por lo cual para observar los avances y limitaciones de los proyectos que se han llegado a plantear el fin del neoliberalismo, es necesario analizar el entramado de alianzas y estructuras de poder del Estado. El neoliberalismo apareció por primera vez en América Latina con el Golpe de Estado en Chile en el año de 1973 y se fue esparciendo por todo el continente como un proyecto de las clases dominantes en el contexto de una agudización de la lucha de clases y de una crisis económica que requería de nuevos mecanismos para la reproducción óptima del capital mundial. Fue así como el neoliberalismo se conformó como un proyecto de ajuste que redobló la dependencia latinoamericana hacia los centros mundiales a través de una serie de medidas aplicadas por los gobiernos nacionales en subordinación hacia los intereses imperialistas. Esas medidas iban desde el sometimiento de los países latinoamericanos a las líneas de crédito de Estados Unidos a través del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (Saxe-Fernández & Delgado, 2004), hasta la aplicación de estrictas políticas de austeridad, que implicaban privatizaciones de empresas estatales que fueron vendidas a empresas transnacionales y también la liberalización de los mercados internos para permitir el libre flujo de capital transnacional.

El neoliberalismo permitió una reorientación radical de las políticas económicas de todo el continente generando una transición de un patrón industrial que apuntaba al desarrollo nacional interno hacia un patrón exportador de producción especializada (Osorio, 2016), que satisfacía la demanda de materias primas de los países centrales. Sin embargo, debido a su carácter excluyente, centralizante y antidemocrático el neoliberalismo pronto comenzó a recibir duras críticas desde los movimientos sociales, los cuales se opusieron al saqueo y a la centralización de las decisiones, conformando iniciativas de impugnación en todo el continente (Thwaites, 2016).

En México empezó el cuestionamiento con la organización de un frente nacionalista que se presentó a las elecciones presidenciales de 1988 y que encabezó Cuauhtémoc Cárdenas². A pesar de que en ese proceso electoral se impuso el neoliberalismo a través del fraude, los movimientos de impugnación en México no se detuvieron y en ese marco en el año de 1994 sucedió la irrupción en la escena nacional del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el cual se oponía al saqueo y a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EUA y Canadá.

En Venezuela por su parte la impugnación se llevó a cabo con el triunfo presidencial de Hugo Chávez en Venezuela en el año de 1998, se construyó una Asamblea Constituyente y un nuevo pacto social que trajo una serie de medidas de recuperación del control nacional sobre los recursos naturales que fueron utilizados para generar altos niveles de inversión en programas sociales y de disminución de la desigualdad.

La llegada de Chávez marcó el inicio de una serie de procesos de luchas, contraposiciones y movimientos sociales en contra del neoliberalismo, lo que llevó a una emergencia de gobiernos progresistas, que pusieron en cuestionamiento la hegemonía del proyecto neoliberal, hasta convertir esa impugnación en una especie de contraofensiva de la izquierda latinoamericana y de los movimientos sociales (López Segrera, 2016).

² Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general y expresidente mexicano Lázaro Cárdenas, se presentó a las elecciones de ese año con un proyecto nacionalista que agrupó a distintos partidos y fuerzas progresistas, pero que durante un proceso amañado vio revertido su triunfo a manos del partido gobernante (Partido Revolucionario Institucional) y su candidato Carlos Salinas de Gortari.

En Bolivia, por ejemplo, los movimientos de trabajadores cocaleros, mineros, indígenas y en contra de la privatización del agua se cristalizaron en una contundente victoria presidencial de Evo Morales, impulsado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) que aún lo mantiene gobernando esa nación andina.

Al mismo tiempo se hicieron presentes movimientos sociales en Ecuador que permitieron el arribo a la presidencia de Rafael Correa; en Argentina, el movimiento de piqueteros y desempleados frente a la crisis de 2001 y el desfalco bancario generó un ambiente de protesta que permitió la presidencia de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. En el Brasil de finales de los 70, el movimiento obrero y sindical del ABC Paulista en contra de la dictadura fue caldo de cultivo para la conformación de la Central Única de Trabajadores (CUT) y del Partido de los Trabajadores (PT) que llevarían al gobierno a Luíz Inácio Lula Da Silva y más tarde a Dilma Rouseff. Por su parte en Uruguay la victoria de Tabaré Vázquez y del exguerrillero José Mujica se consiguió gracias a la lucha del Frente Amplio y de distintas organizaciones de izquierda que habían participado de la lucha contra la dictadura. Ese mapeo se completaba con la continuidad del gobierno revolucionario en Cuba y con la existencia de gobiernos más moderados como el de Manuel Zelaya en Honduras y Fernando Lugo en Paraguay.

A partir de estos procesos de movimientos sociales y gobiernos opositores al neoliberalismo, el Estado se colocó en el centro de la disputa política, dando pie a la posibilidad de configurarse de manera distinta, para desolidificarse y pasar a construir una nueva forma de institucionalidad política³.

Sin embargo, distintas fueron las formas y los modos en como esto sucedió, lo que implicó que fueran contadas las experiencias en las que se consiguió trastocar las estructuras neoliberales. En ese sentido, hubieron países en los que se asumió una posición de polarización y aumento de participación social como los casos de Venezuela o Bolivia (Safatle, 2017), y en menor medida Ecuador, lo que permitió que se generaran procesos de mayor avance en las conquistas de las luchas

³ Según Álvaro García Linera, existen momentos de auge de procesos sociales transformadores, equivalentes a movimientos de las capas tectónicas o de lava volcánica que desolidifica estructuras sociales, reconstituyéndose a raíz de la emergencia de los movimientos sociales (García Linera, 2011), lo que en perspectiva de Enrique Dussel podría entenderse como un momento de “hiperpotencia” de lo social que vuelve a dominar por encima de la institucionalidad de la “potestas” fetichizada y corrompida (Dussel, 2006)

sociales. Sin embargo, en otros países, los proyectos se limitaron a ser programas de gobierno con menor alcance transformador, como sucedió con los casos de Argentina, Uruguay y Brasil. Además como caso aparte se encuentra la experiencia chilena donde simplemente existió una adopción franca del neoliberalismo por parte del Partido Socialista y su aliada la Democracia Cristiana, sosteniendo un discurso encubierto de supuesto bienestar social.

Toda esa situación de impugnación al neoliberalismo levantó importantes esperanzas en todo el continente, lo que permitió a distintos analistas hablar del inicio de un período “posneoliberal” (Sader, 2008) (López Segrera, 2016), en el que se habría llevado a cabo una transformación social profunda desde los gobiernos progresistas que habría permitido bajo ese supuesto una superación del neoliberalismo y la instauración de un nuevo orden social. Sin embargo, este análisis triunfalista ha conllevado distintas problemáticas y limitantes, entre las que destaca el pensar un proceso abierto de disputa como un falso momento de decreto, pues, desde la perspectiva defensora del “posneoliberalismo” el arribo de fuerzas de izquierda al gobierno y la aplicación de una serie de medidas políticas –algunas más ambiciosas y radicales que otras-, significaría que el neoliberalismo podría terminarse por mera acción del gobierno. Nada más lejos de la realidad, ya que el arribo al gobierno no implica la toma del poder del Estado. El Estado es instituciones y gobierno, pero es más que instituciones y gobierno, pues es realmente una condensación de relaciones sociales (Poulantzas, 1979) que no pueden transformarse por mera acción gubernamental sino a través del cambio de las distintas correlaciones de fuerza entre clases y fracciones de clase. El Estado al constituirse a partir de la política viva, es mucho más que gobierno, el Estado es relaciones sociales, por lo que, a pesar de haber existido gobiernos progresistas no se impidió que sobrevivieran grupos y núcleos neoliberales en el seno mismo de los Estados, los cuales sostuvieron su proyecto y lo empujaron para consolidarlo como hegemónico de nueva cuenta.

Otra limitante de la perspectiva del “posneoliberalismo” es que, frente a los hechos más recientes, esta se encuentra sin brújula, desorientada y sin suficiente capacidad explicativa del por qué el retorno del neoliberalismo por distintas vías –unas democráticas y otras autoritarias- si es que ya América Latina se encontraba en un

estadio de superación del neoliberalismo. Es así como el golpe de Estado en Honduras contra el presidente Manuel Zelaya; el golpe de estado parlamentario contra el presidente Lugo en Paraguay; la victoria de Mauricio Macri vía elecciones en Argentina; el golpe de estado parlamentario vía Impeachment que entronizó en la presidencia a Michel Temer y apartó de su cargo a la presidenta legítima Dilma Rousseff en Brasil, a la par del reciente triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro; la victoria de Sebastián Piñera y del neopinochetismo en Chile; y la conversión de Lenín Moreno, no pueden explicarse desde la perspectiva del “posneoliberalismo”. Por esas razones es que urge realizar un balance de los límites y desaciertos de los gobiernos progresistas en América Latina, mismos que impidieron una real superación del neoliberalismo, y que incluso, en algunos casos, permitieron la supervivencia de este sin oponerle confrontación real, dejando al proyecto neoliberal mantenerse enquistado como proyecto de grupos político-económicos que se sostuvieron dominantes en las relaciones sociales que sustentan al Estado actual, pero no solo eso, sino que hasta ese mismo proyecto fue reforzado y reproducido por gobiernos que venían de tradiciones de lucha social y de posicionamientos emancipatorios, progresistas o de izquierda, tales son los casos de Chile y el Partido Socialista y el de Brasil con el Partido de los Trabajadores, aunque con distintos alcances y matices que permiten mantener ciertas diferencias importantes.

Para realizar el balance acerca de las limitaciones de esos gobiernos, este trabajo plantea la necesidad de realizar un estudio a nivel de la configuración del Estado, desde una perspectiva relacional. Abordar la cuestión del Estado como relación social es fundamental en el balance del neoliberalismo en América Latina durante los gobiernos progresistas (1999-2015), ya que atendiendo al estudio del Estado puede explicarse el nivel y avance de disputa de aquellos proyectos opositores al neoliberalismo, de mismo modo que permite analizar sus límites e imposibilidades de manera dinámica, contemplando la disputa o alianza de los proyectos opositores al neoliberalismo. Analizar las alianzas de los gobiernos progresistas y los poderes económicos y políticos constituidos permitiría entonces, observar el nivel de avances o límites que lograron estos gobiernos en términos del desmonte del

Estado neoliberal y en la constitución de nuevas relaciones sociales que dieran lugar a un nuevo Estado alternativo.

III. Estado capitalista neoliberal y lucha de clases

Para proceder a caracterizar de manera adecuada al Estado neoliberal, es importante plantear que este tiene que ser entendido como una forma del Estado capitalista, dominante en todo el mundo. Hoy día, a pesar de que se han agudizado, refinado y complejizado las mediaciones políticas e ideológicas que recubren al Estado, este sigue teniendo un carácter de clase y un rol indispensable para la reproducción de las relaciones económicas capitalistas. Esas relaciones de producción continúan siendo el elemento central para la reproducción del capitalismo como orden económico, político, cultural y social, por tanto, el Estado capitalista sigue cumpliendo su función como elemento central en las relaciones sociales del trabajo, de la producción económica, del orden cultural, de la administración burocrática y jurídica y de la organización política del poder.

El Estado capitalista también sigue siendo la expresión de la lucha de poder, de la lucha política y de las relaciones de fuerza en disputa que componen a las sociedades, por lo tanto, aún mantiene el carácter que permite dar una apariencia de separación entre lo político y lo económico a partir de su condición particular: ser representante de las contradicciones y relaciones sociales, que hacen que se siga sosteniendo como un ente capaz de dar la impresión de representar a la totalidad de la sociedad a pesar de tener la función irrenunciable de proteger y reforzar las relaciones políticas capitalistas (Gramsci, 1999, cuaderno 13, nota 23).

Sin embargo, el Estado capitalista tiene ahora una nueva forma distinta a aquella propia del estado de bienestar de la primera mitad del Siglo XX. Al adoptar una forma neoliberal, ha adquirido también nuevas características, posiciones y roles, que sin embargo, no han trastocado los elementos básicos y esenciales de la producción o circulación del capital, tampoco ha significado cambiar los modos de apropiación de la plusvalía por parte de los propietarios privados de los medios de producción, lo cual quiere decir, que la adopción de la forma neoliberal no solo mantuvo al Estado con su carácter capitalista, sino que su forma neoliberal surgió

como una clave necesaria para la recomposición del capitalismo en momentos de crisis.

Después de la crisis capitalista de finales de los años 70 y principios de los años 80, el neoliberalismo se posicionó como un proyecto que pugnó por reconfigurar el orden capitalista mundial para adecuarse a las condiciones de acumulación transnacional de capital y a la política de sobreexplotación y despojo a través de medidas como la activación de líneas de crédito y deuda externa que otorgaba el Tesoro de Estados Unidos a través del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional a países periféricos; la liberalización de las economías periféricas para permitir la entrada de capitales transnacionales; la privatización de grandes empresas estatales; la centralización del poder político para poder llevar a cabo todas las medidas que exigía su doctrina; las reformas laborales que permitían flexibilizar las jornadas de trabajo y ampliar los grados de explotación; la inserción de grandes conglomerados económicos transnacionales por medio de la desnacionalización de las economías (Gentili & Sader, 2012).

Estas medidas implantadas desde el Estado fueron promoviendo la radicalización de la explotación sobre los trabajadores, al mismo tiempo que los descubijaba del antiguo manto del Estado de bienestar, dejando a las poblaciones a la deriva, sin ningún tipo de protección social y recargando todo el peso de la reproducción de vida en el individuo, hecho que se acentuó con la fragmentación de la cadena productiva, promoviendo el trabajo por vías de terciarización, “outsourcing” y condiciones cada vez más precarias de trabajo (Gentili & Sader, 2012).

Este proceso de cambio en las relaciones sociales de producción tuvo repercusiones en todos los niveles y fue llevado a cabo de manera simultánea desde la acción política directa del Estado, al mismo tiempo que se reconfiguraban las relaciones económicas de producción.

El Estado capitalista neoliberal fue un elemento clave en la recomposición de las relaciones económicas, al mismo tiempo que fue síntesis de esos nuevos cambios, dicho de otra forma, las modificaciones en las relaciones de producción formaban una articulación con el entramado de nuevas formas de relaciones sociales de poder centralizado. Desde la entrada en vigor del neoliberalismo, la centralización del poder político incrementó, pues todas las medidas económicas implementadas

requerían de fuertísimos niveles de exclusión de la sociedad de la toma de decisiones, recayendo en cada vez más reducidos grupos de poder (Oliver, 2005) (Lechner, 1996). Con medidas que afectaban directamente a las clases dominadas, las clases dominantes fueron imponiendo leyes, “reformas estructurales”, privatizaciones y un sinnúmero de políticas estatales antipopulares, que solo podían llevarse a cabo a través de un Estado fuerte y centralizado que evitar que las clases dominadas se incluyeran (Harvey, 2005).

Tenemos entonces que una característica importante del Estado capitalista neoliberal es que se despojó parcialmente de su capacidad hegemónica, es decir, de su capacidad de generar consenso a partir de aparentar representar al conjunto de la sociedad. El Estado se evidenciaba como interventor fundamental a favor de las clases dominantes, es decir, el zorro de la astucia se iba para quedar desnuda la dominación del león (Gramsci, 1999, cuaderno 13). El Estado capitalista neoliberal demostró abiertamente su carácter de clase, sin importar demasiado recubrirse de la apariencia nacional, lo que lo condujo a una crisis orgánica del Estado en América Latina.

Como puede verse entonces, el neoliberalismo se conformó como un proyecto que expresaba de manera evidente una ofensiva de clase a través del Estado (Harvey, 2005) y teniendo como fin último las relaciones de producción. El neoliberalismo por tanto, debe ser entendido como una ofensiva en el marco de la lucha de clases, en la que las clases dominantes lograron triunfar parcialmente.

Sin embargo, fue durante los años 90 y 2000, que el neoliberalismo se vio duramente impugnado y cuestionado por movimientos sociales y protestas en todo el mundo, propias de una reacción de clase a través de distintos medios y recursos de organización, a veces más identitarios, otras veces con formas más evidentemente de clase.

La irrupción de los movimientos sociales de izquierda en América Latina, el Foro Social Mundial y más tarde la constitución de gobiernos progresistas sintetizaron brevemente demandas y triunfos de las clases dominadas, sin embargo se ha llegado a un escollo, pues, aunque buena parte de los gobiernos progresistas (algunos en mayor medida que otros) se han planteado revertir el Estado neoliberal, se han tenido que topar con que esa forma de Estado sigue siendo

fundamentalmente un Estado capitalista que responde a relaciones sociales capitalistas de dominación, es decir, ese Estado responde y actúa en favor de las clases dominantes. Por tanto, a pesar de que se han logrado importantes avances en distintos aspectos, esos gobiernos se instalaron sobre estructuras previas que reproducían ciertas formas de relaciones sociales, de poder económico y poder político que se han conformado como candados que impiden transformaciones de las relaciones sociales a mayor escala, al menos desde las estructuras estatales y económicas actuales.

IV. El Estado como relación social

Hoy en día en diversas corrientes de la ciencia política y de la sociología política existe una tendencia a ocultar debates que atienden al estudio del Estado. Bajo esta tendencia han fructificado corrientes como la “*Elección racional*” o “*Elección pública*” que contempla a los ciudadanos como compradores de un cierto tipo de producto político representado en candidatos a cargos de representación (López Sandoval, 2016). En esa perspectiva y frente a un mercado de consumidores, los políticos se piensan como productos a vender, contemplando a la política como un gran espacio de mercado. Por eso no es extraño que en las últimas décadas se hayan venido robusteciendo materias de “Marketing político” en los programas de las universidades.

Por otro lado se han fortalecido tendencias como el neoinstitucionalismo, la cual se centra en los estudios electorales y de sistemas de partidos (Rodríguez Castillo, 2008). Aunque este tipo de trabajos abonan a discernir de manera concreta ciertos mecanismos del quehacer político, no contemplan a la política como parte de un entramado complejo de relaciones sociales, generando con esa ausencia análisis parciales de solo ciertos elementos y aparatos del Estado, estudiando las reformas que procesó tal o cual partido en la cámara parlamentaria, observando los problemas técnicos de tal o cual ley electoral, construyendo tipos que se acerquen al ideal de democracia y representación. En esta segunda corriente de estudios se sostiene un problema importante: se contempla a la política como una actividad

institucional, que por tanto se estudia al margen de las dinámicas, estructuras y relaciones sociales. Se recarga la política en las instituciones que emanan de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial, en las instituciones electorales y de los partidos sin abordar el problema del poder al nivel de la sociedad civil y de las relaciones sociales, identificando la génesis del poder en la institucionalidad y no en la socialidad, por lo que se termina dejando de lado el problema teórico sobre la relación entre Estado y sociedad, la conformación de los movimientos sociales y la construcción del poder político desde la economía.

En ese sentido, la actual Ciencia Política poco se ocupa de pensar al poder y a la política como parte de la dinámica de la sociedad en su conjunto, de los movimientos sociales, de las formas de organización popular, de las formas culturales y mucho menos de las relaciones entre los humanos y sus actividades productivas, es decir, no se contempla al mundo del trabajo y de la economía.

En ese sentido, importantes corrientes de la teoría política actual convergen en acentuar una separación tajante entre las esferas de la economía y de la política. Para ese tipo de análisis la política sostiene sus propias reglas de funcionamiento sin ser trastocadas por lo económico (Sartori, 1987, p. 213), generando una concepción del poder autorreferencial, es decir, del poder explicado en sí mismo, el poder como mero control, violencia y dominio, sin explicar el por qué los grupos dominantes llegan a serlo. Por tanto, esas tendencias de la teoría política optan por encontrar en las instituciones el punto de partida y de regreso del poder político, pues bajo ese supuesto el poder económico no tendría incidencia en el campo de lo político.

Esa forma de pensar a la política como suma de instituciones conlleva también el pensar al Estado como una suma de elementos simples y estáticos, tales como gobierno, población, territorio, poder, cuerpo jurídico, etc. Poco o nada se piensa al Estado como relación social, como expresión dinámica de la sociedad, como fuerzas sujetas a estructuras y relaciones sociales articuladas históricamente.

El Estado capitalista, lejos de lo que afirman los teóricos liberales, que conforman la corriente dominante en la Ciencia Política actual, es una condensación de relaciones sociales en pugna, es la síntesis de relaciones de poder (Poulantzas, 1979), que necesariamente conforman mapas de correlaciones de fuerza (Gramsci,

1999, cuaderno 13, notas 2 y 17). En ese sentido, el poder es una relación social que se establece en el quehacer político, en el intento de determinadas clases y grupos por impulsar sus proyectos sociales (visiones de mundo, de futuro y de historia) y de la disputa de dichos proyectos por consolidarse dirigentes o dominantes (Gramsci, 1999) (Zemelman, 2007).

El Estado no es un conjunto de instituciones estáticas, sino la síntesis de relaciones sociales de fuerza, es la expresión de las contradicciones, disputas y alianzas entre grupos sociales, que pugnan por proyectar su visión de mundo como visión predominante, como visión aceptada por el resto de los integrantes de la sociedad, por tanto, el Estado capitalista se constituye a partir del quehacer político y de las formas de relación entre los distintos actores de una formación social. Al Estado dan vida cada una de las relaciones políticas, de las confrontaciones de proyectos sociopolíticos e históricos, de las correlaciones de fuerzas que pugnan por dirigir a la sociedad hacia tal o cual rumbo. Esas relaciones de fuerza al condensarse sí contribuyen a la constitución de instituciones, de reglas de las dinámicas sociales, como orden imperante, sin embargo, las instituciones no pueden ser más que expresiones de las correlaciones de poder y de fuerza política, sintetizando en mayor medida los proyectos e intereses de los grupos triunfantes en las pugnas, es decir, de los grupos dominantes, pero también los intereses y proyectos de los grupos dominados, vencidos durante las disputas de fuerza (Gramsci, 1999, cuaderno 13) (Oliver, 2016).

Los intereses y los grupos que los detentan no son aislados uno de otro, sino que forman parte de entramados mayores surgidos al calor de las permanentes relaciones sociales, pero también al calor de las relaciones de trabajo, de sustento y de producción de las condiciones materiales de vida. El poder aunque tenga vetas distintas que permitan hablar de un poder político y de otros poderes económico, cultural o ideológico, se fundamenta de manera condicionante en la raíz de las relaciones de producción. Por tanto, aunque el poder es más que poder en las relaciones económicas, es en el Estado capitalista que el poder del capital es el que predomina y condiciona al resto de relaciones sociales. Y es el capital y su desenvolvimiento el que precisa y promueve por su propia dinámica la existencia de clases sociales.

En esos términos, el Estado no solo es la condensación de relaciones sociopolíticas, es la condensación y síntesis de relaciones de clase (Poulantzas, 1979), o dicho de otro modo, es el espacio construido a partir de la lucha de clases, de las confrontaciones, alianzas y construcciones de las clases dominantes y de las clases dominadas.

Es por todo eso que en este trabajo se partirá de un análisis que piensa a los grupos políticos y a los grupos económicos como dos expresiones de elementos teóricos mucho más complejos: las clases sociales y la sociedad civil como articuladores de individuos y ciudadanos. A su vez, las clases sociales son relaciones sociales que dan vida al Estado.

A pesar de que la esfera de lo político y la esfera de lo económico mantienen cierta autonomía, esta última tiene una definición de relatividad, es decir esa autonomía es relativa en un Modo de Producción Capitalista, pues las relaciones sociales están determinadas directamente por una relación primordial que es el capital (Poulantzas, 1979). En ese sentido, el poder y sus disputas no pueden escindirse de la forma de constitución de las clases sociales, pues es ahí y en relación a los procesos de producción que se constituyen las formas de dominación y de poder de clase. El Estado se conforma de las consecuencias que conllevan las disputas o alianzas de clases y fracciones de clase, sin embargo, el Estado capitalista tampoco puede pensarse abstraído de las relaciones de producción y de la esfera de lo económico, pues si son las relaciones de clase las que lo constituyen y esas clases se construyen no solo desde lo político, lo jurídico o lo cultural, sino también desde lo económico, entonces el Estado toma un carácter marcadamente capitalista, siendo garante (en su condensación o síntesis) del funcionamiento y reproducción óptima del capital.

Por ello, aunque el Estado no sólo expresa los intereses de una clase, sino los intereses de un conjunto de clases y fracciones de clase (pues estas últimas se expresan aún después de haber sido subordinadas) tiene un carácter marcadamente de clase, y no de cualquier clase, sino de la clase, clases o fracciones de clase dominantes, y tiene como necesidad el resguardo de ese carácter, es decir, el mantenimiento del orden social dominante.

Sin embargo, eso no significa, como llegó a pensarse en otro momento, que el Estado sea una máquina, una cosa o una sustancia que pueda tomarse o asaltarse, todo lo contrario, el Estado se conforma como una síntesis de relaciones sociales y por tanto de relaciones universales de poder de determinadas clases y grupos sociales. Eso quiere decir que los grupos de poder que conforman relaciones sociales se encuentran permanentemente en pugna, alianza o confrontación en función de determinados proyectos políticos referentes a sus horizontes históricos (Gramsci, 1999) (Zemelman, 2007). Tampoco se puede dejar de decir que esas relaciones de poder están condicionadas por las necesidades que plantea la reproducción del capital como relación determinante en todo el modo de producción. Es por eso que el poder se conforma como una relación social en pos de mantener el orden donde impera el capital.

Ahora bien, como se dijo, las relaciones sociales que dan vida al Estado, son relaciones de poder condicionadas o en relación directa a la esfera de lo económico, el Estado se encuentra permanentemente condicionado por las relaciones económicas, pero eso no quiere decir que el Estado sea un mero reflejo de lo económico, pues tiene una cierta capacidad de autonomía relativa (Poulantzas, 1979), que le permite sostener sus propias dinámicas, reglas, condiciones, potencialidades, proyectos y relaciones. Esa autonomía relativa es fundamental para que las clases dominadas no se conciban como tales, sino como individuos “iguales”, libres y sujetos de derecho y de ese modo no se desnude todo el tiempo, el carácter mayoritariamente marcado por los intereses de las clases dominantes. La autonomía relativa del Estado debe existir para tener la apariencia de ser “Estado de todos” y no solo “Estado de clase”.

Las clases sociales son entonces una categoría central para entender el modo de configuración de un Estado capitalista. El Estado es capaz de representar el proyecto hegemónico dentro de una formación social. Ese proyecto, al ser el hegemónico refleja la capacidad que tuvo determinada clase o fracción de clase para instaurar consenso a su alrededor. El Estado y el poder político al no ser solo dominio, sino también hegemonía (Gramsci, 1999), no podría representar simplemente el interés desnudo de una clase sobre las demás, aquel precisa de una serie de mediaciones que impida que ese dominio sea visto solo como dominio,

pues un proyecto para sostenerse tiene que ser capaz de expresar consenso y sentido común de amplios sectores sociales más allá del propio al cual se pertenece. Así las relaciones de poder se establecen como relaciones de dominio-consenso para sostener el orden social.

En suma, el Estado capitalista logra existir gracias a la capacidad de consenso que pueda establecer el proyecto de una clase dominante. Al primar el capital como relación, es la clase con mayor poder relacionado al poder del capital la que prima, es decir, la clase propietaria de medios de producción, la clase capitalista, o de manera más específica, es la burguesía, la clase con mayor capacidad de sostenerse como clase hegemónica.

Tenemos entonces que el Estado no puede ser visto como una máquina al servicio de tal o cual clase, sino como una síntesis de relaciones sociales, de correlaciones de fuerza, pero al mismo tiempo y por otro lado, tenemos que en ese Estado la clase que tiene mayor capacidad de ejercicio y fuerza política es aquella que está relacionada con la relación determinante que es el capital. Por tanto la burguesía se instala como la clase con mayor capacidad hegemónica, con mayor poder de dominio y consenso dentro del Estado capitalista, aunque con muchas mediaciones de por medio y no de manera mecánica ni automática, sino a través de relaciones sociales complejas.

Hay que ver entonces, que el Estado al ser relación social obliga a estudiar la relación entre la política y la economía, entre los sectores sociales que dirigen ambas esferas y que realmente conforman un mismo poder unificado entorno al sustento de la clase dominante, aunque con distintas variantes y cierto grado de autonomía relativa, que bien podría permitir la diferenciación entre poder económico (mayor poder a partir de las relaciones de producción) y poder político (mayor poder a partir de la capacidad hegemónica y de dirección social). Además, el Estado es influido por la economía pero interviene también en ella. El Estado en ese sentido juega un papel fundamental (desde lo político, jurídico y lo cultural) al impulsar ciertas formas de reproducción del capital, pues es desde su acción que se pueden propiciar determinadas reglas y controles.

V. Estado, bloque de poder y fracciones de clase

El Estado capitalista moderno sostiene una característica distinta respecto a otros tipos de Estado, pues este encarna una forma doble y contradictoria: es una construcción social que garantiza la reproducción del capital, la explotación y la apropiación de plusvalía del trabajo, al mismo tiempo que expresa la constitución jurídico-política de individuos libres e iguales. El Estado capitalista tiene la función de que los individuos se asuman como libres e iguales, pero no como agentes de producción y sustento del orden capitalista con su injusticia y desigualdad (Ibidem, 2012). Es por esa razón que el Estado cumple una función crucial dando la apariencia de separación economía-política, para que de ese modo, las clases dominantes no sean vistas directamente como clases dominantes, ya que precisan de aparentar pluralidad e integración de distintos grupos que conforman fracciones de una o más clases sociales.

El Estado capitalista, como condensación de relaciones de clase no se constituye solo a partir de la acción económico-política de una sola fracción de clase y la mayoría de las veces ni siquiera de una sola clase. El Estado capitalista expresa los intereses condensados de más de una fracción de clase y más de una clase, pues para sostener su apariencia nacional, su apariencia de gobernar para todos –y de ese modo evitar la polarización de clase y con ello su impugnación- precisa de dar la garantía de aparentar ser un Estado de todos y no un Estado de clase.

Esas distintas clases y fracciones, para poder ser hegemónicas necesitan aliarse y unificarse entorno a un elemento central el cual es denominado *Bloque de poder*. Este se construye a partir de esas alianzas entre clases y fracciones de clase para conformar la principal directriz del Estado que permita la reproducción óptima de sus funciones, entre las que destaca desde luego, el aceitamiento de las relaciones económicas de producción.

El bloque de poder resulta ser el espacio que aglutina las alianzas entre distintas fracciones de clase, de entre las cuales una fracción particular tiende a ser la hegemónica, es decir, una fracción específica es capaz de expresar en su proyecto político, en su horizonte histórico los intereses del resto de las fracciones que

componen el bloque de poder, pero también del resto de las clases de la formación social. Dicho de otro modo, el bloque de poder permite la construcción de consensos alrededor del proyecto hegemónico de una fracción o de un grupo de fracciones de clase, y a su vez, permite la proyección de este al resto de la sociedad.

De la forma de constitución del bloque de poder depende mucho la dirección y la forma de Estado, pues esas clases o fracciones de clase que lo componen están ligadas directamente a los procesos económicos y políticos que priman y condicionan las relaciones de producción y las relaciones sociales.

Como ya se mencionó anteriormente, el tipo de Estado que estudiaremos en el presente trabajo es el capitalista, pero no solo eso, sino que este tiene la forma particular de Estado capitalista neoliberal y dependiente. Para constituirse como tal existieron determinados procesos vivos correspondientes a determinadas formas de constitución de relaciones sociales, en ese sentido, el Estado capitalista neoliberal en América Latina se ha construido a partir de un bloque de poder conformado por la primacía de alianzas entre burguesías trasnacionales –con preeminencia de las burguesías financieras- y burguesías internas subordinadas – particularmente productoras y exportadoras de materias primas-, lo que conformó grandes grupos económicos de capital asociado financiero-exportador de materias primas minerales, frigoríficas, agropecuarias, energéticas, etc.

Además, los grupos políticos dirigentes optaron por asumir un rol de centralización del poder político, a la par de entronizar a grupos tecnócratas formados en universidades estadounidenses con los cuales consiguieron empujar reformas estructurales de despojo, privatización y subordinación bajo las líneas de crédito y a la deuda externa contraída con EUA y órganos como el FMI y el BM (Saxe-Fernández & Delgado, 2004).

Además, esos grupos políticos privilegiaron en todo momento la liberalización de las economías para inducir la entrada de capitales trasnacionales que pudieran explotar recursos y mano de obra nacionales (Gentili & Sader, 2012), además de aliarse con las burguesías internas para asegurar sus márgenes de ganancia.

Ahora bien, en ciertos países esos bloques de poder que conformaban Estados neoliberales llegaron a perder su capacidad de hegemonía y consenso al momento en que se develaban como Estados de clase, hecho que se hizo visible durante los

procesos de impugnación encabezados por movimientos indígenas, obreros y populares en países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil y Argentina. En esos países, en paralelo a la pérdida de hegemonía de los Bloques de poder emergieron movimientos sociales impugnadores que orillaron a reconfigurar los Bloques de poder a la par de un reacomodo de las fracciones de clase hegemónicas. Sin embargo, aunque hubo reajustes y reconfiguraciones, no en todos los países que vivieron esas impugnaciones al neoliberalismo logró establecerse el cambio de bloque de poder, el cambio de las alianzas dominantes.

En momentos de crisis hegemónica o económica, los centros de poder pueden variar y no siempre recaen en las mismas estructuras (Poulantzas, 1979), por eso tenemos que las fracciones que sustentaban el proyecto neoliberal no fueron relegadas de la dirección política en todos los países que vivieron procesos de impugnación al neoliberalismo. En el caso de Brasil, esas fracciones simplemente se movieron a otros espacios de poder o bien se mantuvieron beneficiadas por los gobiernos petistas. En el caso de Chile, esas fracciones mantuvieron exactamente los mismos espacios de dominio que habían heredado de la dictadura por motivos que se desarrollará en el capítulo siguiente.

En la presente tesis se estudia a los Estados chileno y brasileño desde un enfoque relacional que atiende al análisis del Estado como condensación de relaciones sociales, que a su vez vivió en su interior la reconfiguración de ciertos modos específicos de los bloques de poder. Se sostiene que esta perspectiva teórica es fundamental para entender el por qué aconteció la supervivencia del neoliberalismo a pesar de haber llegado a los gobiernos de esos países, partidos con otrora proyectos de izquierda, como lo fueron el Partido de los Trabajadores (Brasil) y el Partido Socialista (Chile).

En esa misma línea es importante recalcar una cuestión: la dificultad de entrever que el hecho de que partidos de izquierda arribaran al gobierno no significa en modo alguno la superación automática del neoliberalismo, hecho que tiene que ver por un lado con la confusión –promovida por las corrientes actuales de la Ciencia Política– entre gobierno y Estado; y por otro lado, tiene que ver con la no concepción del Estado como síntesis de relaciones sociales.

La teoría política actual tiene una importante responsabilidad en la dificultad de analizar fenómenos como el que se cita aquí, puesto que al invisibilizar la discusión sobre el Estado, centrándose por completo en el estudio de lo institucional, se asume al Estado como un conjunto de instituciones con reglas propias y escindidas de las relaciones sociales. Partir de ese enfoque puede traer graves errores en el análisis, puesto que ese posicionamiento lleva a pensar que al asumir un gobierno con dirección distinta, entonces, las instituciones cambian automáticamente de manera acelerada. Ese tipo de confusiones metodológicas e instrumentalistas permitieron llegar a pensar que entonces países como Brasil o Chile estaban teniendo un direccionamiento “posneoliberal” u opuesto a la doctrina neoliberal (Sader, 2008).

Lo cierto es que, el Estado al ser condensación de relaciones sociales, no puede ser pensado como mero entramado institucional, como máquina, o simplemente ser reducido a su papel de gobierno⁴. Eso quiere decir que aunque un partido de izquierda asuma el gobierno, las relaciones sociales que sostienen en este caso al neoliberalismo como proyecto, no desaparecen de manera inmediata. De hecho, incluso esas relaciones neoliberales pueden fortalecerse o desplazarse a otros espacios o centros de poder y desde ahí fortalecerse.

Las relaciones sociales que dan vida al Estado, entonces, pueden ser ataduras y condicionantes del modo de gobierno, pues el poder neoliberal puede acorrallar, luchar, confrontar o reconfigurarse dependiendo de su propia capacidad de fuerza, modificando o no las mismas correlaciones de poder. La supervivencia del poder neoliberal sucede con mayor razón si los mismos partidos de izquierda renuncian a la disputa y a la confrontación contra los proyectos e intereses dominantes, como sucedió en Chile y en Brasil.

En resumen, es necesario posicionarse metodológicamente y teóricamente desde un punto de vista distinto al que ha predominado de manera apabullante en la Ciencia Política, de lo contrario será cada vez más difícil llegar a la raíz del problema y clarificar los fenómenos que están aconteciendo hoy día en América Latina.

⁴ El gobierno, desde luego es la expresión más visible del Estado. El gobierno, como aparato de Estado permite la concreción de los proyectos sociopolíticos de las clases y fracciones dominantes. Desde ahí se dirigen las principales actividades administrativas, jurídicas y gestoras que permiten el funcionamiento relativamente autónomo del Estado y de las relaciones de trabajo, producción, ideológicas, culturales, etc. Sin embargo, aunque el gobierno es la concreción visible del Estado, por ningún motivo puede confundirse como el Estado mismo.

VI. Las alianzas neoliberales y la representación política

Una de las ideas más difundidas por la ciencia política actual es la separación radical entre las esferas de la política y de la economía (Sartori, 2002), lo que lleva a desvincular la relación entre poder político y poder económico y complica el entendimiento de los fenómenos de la estatalidad y sus reconfiguraciones. El Estado, como síntesis dialéctica de relaciones sociales es también síntesis de las relaciones imbricadas entre lo político y lo económico, al ser un campo de organización de la reproducción social y de la vida material de las sociedades. Eso no significa abrazar ciertos postulados del marxismo mecanicista del siglo pasado que entendían a lo político como reflejo de lo económico, a lo superestructural como consecuencia de lo estructural, sin dejar lugar a los errores y a la voluntad de las sociedades (Gramsci, Cuaderno 7, nota 24). Lo que significa sostener la vinculación entre economía y política es que existe una relación estructural entre distintas formas de poder, entendiendo a este como una relación social, es decir, como una relación entre grupos sociales en la que la voluntad juega un papel importante, pero enmarcada en condiciones sociales, económicas y culturales construidas históricamente. Por ello es que se plantea que existen especificidades de lo político y de lo económico, sin que ello implique una diferenciación completa, pues el Estado, como campo de lo político es en todo momento campo también de las relaciones sociales del capitalismo, pero este nunca está permanentemente determinado ni acabado, sino en reconfiguración constante, las relaciones sociales pueden reconstituirse, así como la historia puede reescribirse hacia el futuro (Zemelman, 2013).

El Estado capitalista neoliberal ha sostenido distintas facetas de un proyecto político-económico que ha buscado corregir los obstáculos ocasionados por la crisis de los años 80 y que se ha caracterizado por una reestructuración social que ha permitido fortalecer aún más el dominio de las burguesías en el mundo, a costa de una exclusión y subordinación de las clases dominadas sin precedentes.

Lo anterior, por tanto, conduce a entender el por qué de la importancia de la relación entre lo económico y lo político, y del por qué en un análisis acerca del Estado no pueden separarse ambas esferas, pues estudiar el problema del Estado es estudiar las formas de condensación de las fuerzas y poderes en disputa.

Partiendo de un análisis gramsciano, la relación conflictiva entre política y economía tiene que ver con la relación entre la clase burguesa dominante y los grupos políticos dirigentes, que dan proyección dinámica a la actividad del Estado.

Esa relación es fundamental en la construcción misma del Estado y del orden capitalista imperante y no puede ser entendida mecánicamente, sino de manera dinámica, con momentos de armonía y momentos de tensión y confrontación, como momentos de estructura económica y momentos de construcción de voluntades sociales, pero siempre con la intencionalidad de sostener el capitalismo como orden social.

El capitalismo puede reproducirse gracias a la hegemonía de la que es capaz de dotar el Estado, generando una diferenciación entre los grupos dirigentes en lo político y los grupos dirigentes en lo económico, ya que en momentos en que puede develarse la forma de dominación económica queda a la intemperie como mera fuerza, en la que se pierde de vista la forma política en la que se ha construido el consenso (Gramsci, Cuaderno 13, nota 14), en ese sentido, la construcción político-cultural que expresa el Estado es también una construcción de sentido común intelectual y moral que permite agrupar concepciones y perspectivas del mundo (Gramsci, cuaderno 13, nota 1), por ello, lo económico no puede mostrarse como dominación capitalista abiertamente, sino a través de la medicación de lo político y las perspectivas culturales que este implica en determinado momento histórico.

El papel de representación de lo político, dota de legitimidad a lo económico, pues no resulta evidente a los ojos de todas las clases el problema de dominación que implica el orden capitalista, ya que existe un ejercicio real aunque sesgado, limitado y constreñido de representación de grupos sociales. La representación de distintos sectores cristalizada en el Estado complica la posibilidad de observar directamente la dominación cruda de la clase burguesa, por esa razón juega un papel fundamental la autonomía relativa entre política y economía, que permite que ciertos grupos sociales no pertenecientes a la clase dominante burguesa puedan participar

en la administración y dirección del Estado, sin trastocar la conformación orgánica, que se encuentra a cargo sustancialmente de las clases dominantes. De ese modo, esas clases son capaces de realizar sacrificios, ceder la representación del Estado y permitir ciertos consensos sociales siempre y cuando no sean trastocados sus intereses de clase y puedan conservar en ese sentido su poder y su capacidad de decisión sobre el todo social (Gramsci, Cuaderno 13, nota 23).

Las alianzas entre poder económico y poder político son entonces, formas de garantizar la hegemonía de un Estado, a través de que el poder político pueda llegar a representar intereses sociales, en las que incluso se encuentren intereses de las clases subalternas, con el fin de conservar el orden capitalista sustancial. Las alianzas entre clases dominantes y grupos políticos dirigentes surgen como parte del mapa de la correlación de fuerzas de los Estados, pues se dan en el marco de la construcción de acuerdos y consensos o de pugnas y confrontaciones. Las relaciones sociales en el seno del Estado se dan entorno a la construcción de hegemonía o en la construcción de fuerzas de oposición a la hegemonía existente. Es por ello que entre opositores se construyen alianzas para confrontar a grupos hegemónicos y viceversa, con el fin de empujar su proyecto y convertirlo ya no en proyecto de grupo de poder, sino en proyecto de toda la sociedad (Zemelman, 2013).

Sin embargo, las alianzas que se dan entre grupos políticos tienen un carácter específico y distinto respecto a las alianzas entre poder político y poder económico. El segundo tipo de alianzas, como ya se mencionó son en pos de mantener la hegemonía del Estado como un todo universal concreto, pues la representatividad de ciertos grupos políticos administrando la dirección política del Estado es útil para mantener el consenso del lado de la dominación capitalista. Las alianzas entre el poder político y el poder económico son alianzas en las que se ceden los espacios de representación política a proyectos de sociedad que incluso pueden llegar a ser subalternos, con tal de permitir un mejor funcionamiento de las relaciones económicas donde domina la burguesía organizando el proceso social de trabajo. Una de las características del Estado neoliberal en América Latina fue la inmensa exclusión y centralización de la toma de decisiones sociales, que se llevó a cabo restringiendo al máximo los niveles de incidencia de las clases subalternas en la

organización y dirección del Estado (Castro Escudero & Oliver Costilla, 2005), lo cual quiere decir que las burguesías en un momento de crisis dejaron de lado la necesidad de mantener la representatividad de otras clases con tal de conseguir una optimización del proceso productivo capitalista.

En América Latina el carácter excluyente del neoliberalismo se empató con las transiciones a la democracia representativa y el fin de las dictaduras militares en distintos países, por lo que durante los primeros años de gobiernos democráticos, el neoliberalismo no fue cuestionado con soltura, sin embargo, en cuanto este comenzó a demostrar su carácter dominante y antidemocrático, los movimientos sociales curtidos en la resistencia frente a las dictaduras, comenzaron a levantarse nuevamente en sus propios tiempos y de manera heterogénea.

Frente a ese fenómeno, durante la década de los 90 se vivió una oleada de algidez de los movimientos sociales, los cuales emergieron para colocar en las agendas nacionales sus reivindicaciones subalternas, ante Estados centralizados y cerrados a las representaciones populares. De Bolivia a Argentina, de México a Brasil, los nuevos movimientos sociales fungieron como canales de confluencia de sentimientos y demandas populares subalternas, negadas por los Estados neoliberales, lo que mermó los niveles de legitimidad de estos últimos, pero también puso en crisis con ello a la hegemonía neoliberal, que en su afán por instaurar el modelo de ajuste no había apostado por representar intereses de clases subalternas en el seno del Estado y que tras un proceso de saqueo y ofensiva contra esas clases provocó su impugnación. Es por esa razón que dichos movimientos se condesaron en gobiernos progresistas que llegaron a espacios de representación proponiendo revertir el modelo neoliberal y expresar las demandas populares.

Ese fue el caso del movimiento sindicalista del ABC Paulista que fue pieza importante en la articulación del movimiento “Diretas Já” en busca de elecciones directas para terminar con el legado de la dictadura en Brasil. Ese mismo movimiento fue el que consiguió construir la Central Única de Trabajadores (CUT) y el Partido de los Trabajadores (PT), mismo que compitió en distintas ocasiones por la presidencia y por espacios de gobierno y representación electoral. Sin embargo, no fue hasta el momento en que los gobiernos neoliberales de Fernando Henrique Cardoso se vieron cuestionados y deslegitimados frente a las masas

sociales y que el mismo PT con Luíz Inácio Lula Da Silva como candidato expresó su subordinación ante las burguesías a través de la “Carta al Pueblo Brasileño”, que la burguesía estableció una aceptación de un gobierno petista. Más tarde, esa aceptación consiguió convertirse en una alianza entre sectores de las fracciones de la burguesía interna y el PT, conformando un frente de dirección al interior del Estado.

Las alianzas entre el PT y la burguesía, fungieron como amarres del orden social, con cambios limitados y enfocados principalmente al establecimiento de programas de apoyos sociales, pero sobretodo, como garantías de colaboración del PT hacia la burguesía interna, generando con ello una supervivencia del neoliberalismo y del patrón de reproducción de capital propio de este tipo de proyecto político.

El PT fue importante para mantener la hegemonía del Estado brasileño sin afectar los negocios, el patrón de reproducción ni el poder político de las clases dominantes. La legitimidad social del petismo y del liderazgo de Luíz Inácio Lula Da Silva permitieron redoblar la hegemonía del Estado brasileño, y ahí radicó su importancia para la burguesía (Filgueiras & Goncalves, 2007).

El nudo de conflicto al interior de ese Estado tiene que ver con la ruptura de ese frente que contenía la alianza entre el PT y la burguesía y que inició con la crisis económica de aumento del precio de las commodities posterior a 2008 y la crisis política de legitimidad del gobierno de Dilma Rousseff durante las manifestaciones de 2013.

En el caso chileno, desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet se han alternado dos tipos de gobiernos, uno proveniente de la Concertación de Partidos por la Democracia, especialmente bajo la dirección de la Democracia Cristiana (DC) y del Partido Socialista (PS), y el otro tipo ha sido el de los gobiernos de Sebastián Piñera, empresario y heredero de la burguesía construida al alero de la dictadura. Aunque ambos tipos de gobierno se han esforzado por mostrarse diferentes y opuestos uno del otro, lo cierto es que ambos han fungido como representantes del interés de una misma burguesía fuerte y lo que los diferencia son detalles entorno a las políticas sociales.

En ese sentido, los gobiernos de la Concertación fueron clave durante los momentos de la transición, ya que permitieron durante un tiempo hacer parecer en el discurso

que se estaba dando un cambio sustancial en la política del Estado, cuando lo que realmente sucedía es que sus gobiernos dotaban de legitimidad al bloque de poder heredado por la dictadura. Por ello, la llegada del Partido Socialista al gobierno fue importante, pues provenía de luchas sociales de la segunda mitad del siglo XX y aunque se había escindido y distanciado de los movimientos sociales de manera abrupta, aún en ese momento mantenía importantes niveles de legitimidad. Es así como el PS como grupo dirigente permitió afianzar la hegemonía neoliberal en Chile. Hasta aquí, se plantea que las alianzas entre poder político y poder económico permitieron que desde la representación y legitimidad de partidos provenientes de luchas sociales pudiera reafirmarse la hegemonía neoliberal en Brasil y Chile generando una especificidad política de los papeles que jugaron los grupos políticos en relación a los grupos económicos. Tanto el PT como el PS provenían de importantes movimientos sociales de izquierda durante dictadura (desde antes en el caso del PS) y eso permitió que al aliarse con los sectores de la burguesía pudieran encabezar la gestión del Estado con el respaldo de su legitimidad social. Pero esas mismas alianzas se manifestaron también como amarres que impidieron realizar cambios orgánicos en la estructura estatal, haciendo que los partidos se limitaran a cumplir con su papel de legitimadores del orden social. Hoy día, ambos partidos se encuentran frente a una encrucijada, al tener dificultad de representar a los sectores que habían representado antes de su llegada al gobierno, y eso se empata con un momento en que ninguno de los dos partidos se encuentra en el gobierno y más bien están apartados de la toma de decisiones generales en sus respectivos Estados. Sus alianzas neoliberales con las grandes burguesías de sus países funcionaron para permitirles gobernar durante determinados períodos, pero fueron también esas alianzas las que significaron su aceptación de las reglas del juego impuestas por las burguesías, excluyéndose así como partidos de la posibilidad de reconfigurar orgánicamente estructuras del Estado en sus países, adoptando con ello el neoliberalismo como política de Estado.

A modo de conclusión podemos reiterar que las alianzas en el neoliberalismo latinoamericano fueron alianzas entre grupos provenientes de sectores subalternos y grupos económicos poderosos que permitieron mantener la dominación burguesa a través de una efímera conciliación de clases. Esas alianzas terminaron siendo una

atadura en el que las burguesías seguían colocando reglas y exigencias a los gobiernos con representatividad social respecto a mantener en óptimas condiciones el patrón de reproducción de capital. Ese patrón no podía sino ser reproducido vía políticas económicas neoliberales de ajuste, pero los gobiernos con representación social, al no poder negar sencillamente sus bases sociales apostaron por una conciliación de clases que a la larga sí terminó mermando su legitimidad. Esa conciliación de clases fue la expresión más importante de alianzas neoliberales de representación política de los intereses burgueses bajo discursos de unidad nacional, aunque sin suficiente potencia cultural como para ser asumidos por todas las clases. A la larga sus alianzas conciliatorias se voltearon contra esos gobiernos y los mantienen hasta la fecha en una encrucijada que aún no termina.

VII. Estado neoliberal, dependencia y patrón exportador de producción especializada

El Estado capitalista en América Latina siempre ha tenido especificidades diferenciadas respecto a las características comunes del Estado capitalista europeo o estadounidense. Y una de las características centrales es la situación de dependencia respecto a los Estados centrales dominantes.

La teoría de la dependencia ha sido acusada de ser insuficiente para explicar la realidad actual de América Latina e incluso se ha llegado a excluir de los grandes temas de discusión de las ciencias sociales de la región, sin embargo, ineludible es que la situación de dependencia entre países periféricos y países centrales no solo continúa vigente, sino que dicho carácter dependiente se ha reforzado durante el período neoliberal (Oliver, 2005).

La dependencia es una condición que se refiere directamente a diversas formas de relación desigual entre países centrales y países periféricos, en los que los primeros se benefician de la subordinación económica (también de manera política y cultural) de los segundos (Marini, 1991). El intercambio desigual que se refiere a la exportación de materias primas o de baja manufactura por parte de los países periféricos hacia los mercados de los países centrales se sostiene en mayor medida, siendo a este fenómeno sumadas otras formas específicas de redoble de la

dependencia, como lo son los endeudamientos de los países latinoamericanos a líneas de crédito de instancias del Estado estadounidense disfrazados de organismos financieros internacionales como el FMI o el BM (Saxe-Fernández & Delgado-Ramos, 2007).

También nuevas formas de dependencia son las fragmentaciones de la cadena productiva que permiten aminorar a las burguesías transnacionales el costo de mano de obra, lo que decanta en que grandes empresas transnacionales prefieran tener maquiladoras y ensambladoras automotrices o de otro tipo en países periféricos como Brasil o México que les permiten pagar un salario mucho menor de lo que pagarían en países centrales, con derechos laborales disminuidos en detrimento de los trabajadores y a favor de la tasa de ganancia de la burguesía dominante (Sotelo, 2012) (De la garza, 2005)

La dependencia es una realidad y se ha reforzado durante los gobiernos neoliberales, profundizando el carácter subsoberano de los Estados latinoamericanos, quienes han redoblado su subordinación frente a los intereses de las economías centrales.

Como explica Jaime Osorio,

“El capitalismo implica la presencia de un sistema interestatal con grados y condiciones desiguales de soberanía, más débil en la periferia o en las regiones dependientes y más plena en el mundo desarrollado o central.

Este ejercicio desigual de la soberanía en el seno del sistema mundial capitalista es una característica estructural, en tanto dicho sistema se constituye a partir de relaciones asimétricas, que implican transferencias de valor de unas regiones en provecho de otras” (Osorio, 2016, pág. 278)

Sin embargo, esa subordinación propia de una soberanía débil frente a soberanías plenas que corresponde a la relación de Estados centrales y Estados dependientes, no implica debilidad per se de los segundos en términos de lo nacional, pues si fuera ese el caso, no se podría sostener la hegemonía nacional interna de cada formación social. Lo que sucede es que “la dimensión subsoberana del Estado del capitalismo dependiente implica la subordinación/asociación del capital y de las clases dominantes locales frente al capital y las clases dominantes del mundo

desarrollado e imperialista” (Osorio, 2016, pág. 279) pero esa relación desigual solo puede sostenerse sobre una base de centralización del poder político interno, recargando el dominio sobre estructuras sociales autoritarias. En resumidas cuentas, para que una clase nacional pueda subordinarse/asociarse con una clase dominante internacional, la primera tiene que tener como elemento previo, asegurada la gobernabilidad y el dominio interno, pues de otro modo el saqueo nacional no podría suceder en ningún momento.

En el neoliberalismo,

“además de tener ausencia de soberanía, el Estado ha perdido legitimidad interna por haberse entregado a los proyectos transnacionales y haber terminado con las políticas sociales universales que fueron un elemento de legitimidad y cohesión del periodo anterior. La debilidad del Estado en términos de soberanía y de legitimidad interna ha producido la tendencia a utilizar la fuerza policiaca y militar y la razón de Estado, ante la población trabajadora en resistencia, en términos de definir internamente el ajuste estructural, los bajos salarios, las políticas públicas restrictivas, privatizaciones, tasas de interés altas y una política de subsidios y de apoyo a los grandes banqueros y empresarios transnacionalizados. Paradójicamente, junto a esa pérdida de soberanía, se ha producido un nuevo intervencionismo del Estado en beneficio de la acumulación transnacional de capital” (Oliver, 2005, pág. 63)

Tenemos entonces que el Estado dependiente latinoamericano se reviste entonces de dos características fundamentales: por un lado es un Estado subordinado en su vertiente no solo económica sino también política (y hasta cultural) hacia los mandatos hegemónicos de los Estados centrales y sus burguesías dominantes, pero al mismo tiempo, a pesar de que hacia fuera los Estados dependientes latinoamericanos son sumisos, al interior de cada país esos mismos Estados son sumamente autoritarios, centralizados y verticales (Oliver, 2005) (Osorio, 2016, pág. 281), echando mano del dominio desnudo, de la represión policiaca de ser necesario, con tal de sostener la subordinación estatal y la dependencia económica. El neoliberalismo, en suma, ha sido una doctrina que ha venido redoblando el carácter dependiente de los Estados latinoamericanos, al mismo tiempo que ha reforzado la centralización interna que ha garantizado a su vez el saqueo de las

riquezas naturales, energéticas, minerales y de materia prima y el reforzamiento de la superexplotación de la mano de obra latinoamericana.

En ese sentido, el Estado capitalista neoliberal se constituyó como un Estado disminuido en su soberanía hacia afuera, subordinándose a los mandatos de las economías centrales, con tal de sostener la condición de dependencia e intercambio desigual entre economías dependientes y economías imperialistas.

A su vez, la centralización del Estado latinoamericano como condensación de relaciones sociales ha sido crucial para la reorganización de las relaciones de producción e intercambio, a tal punto que desde el Estado se impulsaron profundas transformaciones que devinieron en una radical transición de un patrón de reproducción de capital a otro patrón nuevo.

La noción de patrón de reproducción de capital se remite a la forma en que el capital consigue valorizarse con tal de reproducirse en sus propias dinámicas y obtener una nueva forma de valor para conseguir el cumplimiento del ciclo del capital. El patrón de reproducción de capital implicaría “un camino específico” o ruta del capital para valorizarse en sus procesos constitutivos (Osorio, 2016, págs. 216-218).

Un patrón de reproducción de capital existe

“cuando en espacios geoeconómicos y en periodos históricos determinados el capital traza (descubre) un camino específico para reproducirse y valorizarse, el cual tiende a repetirse en sus procesos fundamentales. Para su estudio debemos seguir las huellas que el capital deja a su paso por las esferas de la producción y de la circulación (...)

Esto exige, entre otras dimensiones, responder al interrogante: ¿en qué valores de uso encarna la valorización del capital en momentos determinados? Esta pregunta abre un abanico de problemas de particular relevancia. Por ejemplo, dar cuenta de aquellas ramas y sectores que en momentos históricos y espacios geoeconómicos específicos se constituyen en ramas o sectores ejes del proceso de valorización, que son las que establecen su impronta al conjunto de la reproducción, y que producen los valores de uso privilegiados por la valorización” (Osorio, 2016, págs. 217-219).

Desde la perspectiva de Jaime Osorio han existido tres patrones de reproducción de capital en la historia de América latina:

- a) El patrón agrominero-exportador, imperante en el siglo XIX y parte del siglo XX
- b) El patrón industrial que se desarrolla a mediados del siglo XX; y
- c) El patrón exportador de producción especializada iniciado desde los años 80 del siglo XX hasta la fecha (Osorio, 2016, pág. 222).

Durante los tres patrones señalados una de las condiciones fundamentales ha sido la de cumplir con el carácter de dependencia de los países periféricos hacia los países centrales, con tal de satisfacer las necesidades de los segundos y las lógicas de intercambio desigual necesarias para el sostenimiento del capitalismo mundial. El patrón que prima hoy día en América Latina es el patrón exportador de producción especializada, el cual se basa justamente en la satisfacción de las necesidades de los países centrales a través de la exportación ejercida por los países periféricos de materias primas agropecuarias como frigoríficos, soja, café, azúcar, pescado etc; combustibles fósiles, entiéndase petróleo y gas; productos minerales como hierro, oro, plata, cobre y litio, entre otras mercancías.

En ese sentido, se atiende no sólo a la pregunta de cómo se produce, sino también de qué y por qué se produce, pues se contempla entonces la forma de valor de uso para explicar las variaciones en la producción en América Latina y cuáles son las distinciones entre los diversos momentos de la reproducción del capital que se han dado en la región.

El patrón exportador de producción especializada recibe su nombre justamente porque la producción conllevada en los países latinoamericanos está especializada en función de las necesidades y requerimientos de los países imperialistas.

“El sistema mundial capitalista y las divisiones internacionales del trabajo que en su seno se presentan generan especializaciones productivas que no propician ni conducen a todas las economías al desarrollo; por el contrario, apuntan a generar especializaciones que favorecen la elevación de la productividad de algunas

regiones y economías, y que limitan las opciones de actividad que potencian la elevación de productividades en otras” (Osorio, 2016, pág. 412).

En resumen, la especialización de la producción en el patrón explicitado es fruto de las condiciones del capitalismo mundial y forma parte de los requerimientos de las economías capitalistas centrales, lo que implica desde luego a la profundización de la condición de dependencia latinoamericana.

Ahora bien, esas relaciones de producción se intersectan y condicionan también a las relaciones sociales de poder y de clase, es por eso que el Estado dependiente latinoamericano se halla condicionado por esa forma que adquiere la reproducción del capital y que encarna en el patrón exportador de producción especializada.

Desde esta perspectiva las relaciones de poder que constituyen al Estado latinoamericano actual no pueden separarse de las condiciones que aporta el patrón de reproducción de capital, es por ello que a lo largo de esta tesis se contemplará este elemento en el horizonte teórico y en el análisis político-económico realizado, pues las relaciones sociales están en relación a su vez con las formas de relación concreta que asume el capital en los tiempos actuales en América Latina.

También es por lo anterior que el estudio del Estado en función de la condición de dependencia es fundamental para entender el por qué a pesar de existir gobiernos de izquierda en países como Brasil y Chile, los proyectos neoliberales continúan primando en las dinámicas de las relaciones sociales de poder.

Justamente adelantando parcialmente algo que se desarrollará en extenso durante los capítulos posteriores de este trabajo, la transición entre un patrón industrial-nacional y un patrón exportador de producción especializada fue un proceso complejo que tuvo consecuencias diferenciadas. Mientras que en Chile, el proyecto neoliberal se instaló durante el Golpe de Estado de 1973, en Brasil el neoliberalismo se instaló durante gobiernos postdictadura a finales de la década de los 80 y principios de la década de los 90. En Chile además este proceso adquirió características singulares respecto al resto de los países latinoamericanos, pues fue durante la dictadura de Augusto Pinochet que se barrieron de manera profunda y radical –bajo un régimen abiertamente contrarrevolucionario- los nichos y sectores productivos propios del patrón industrial nacional.

Sin embargo, aunque ambos casos se diferencian en ese punto, tanto en Brasil como en Chile, fue el proyecto neoliberal instalado como proyecto hegemónico de Estado, el responsable de impulsar una transición de un patrón industrial nacional a uno de exportación de producción especializada, que de una u otra manera terminó plegando y acentuando la subordinación de Brasil y Chile ante los mandatos de las burguesías transnacionales con sede en Estados Unidos y otros países imperialistas.

El neoliberalismo, en ese tenor, se conformó como un proyecto político-ideológico, con una enorme carga moral, que se aplicó a través del mismo Estado al que falazmente decía confrontar (Borón, 2012). Sin embargo, es importante decir que ese proyecto –impuesto a partir de políticas públicas y acción estatal- no fue en ningún momento el fin, sino el medio. En unidad orgánica entre política y economía todo proyecto político capitalista está en función de un proyecto económico capitalista, lo cual quiere decir que se busca impulsar un determinado tipo de organización económica que consiga superar momentos de crisis y permitir el libre funcionamiento aceitado de las relaciones capitalistas de cada tiempo determinado. El neoliberalismo en ese sentido, ha sido un proyecto político, económico y social que se ha concretado a través de políticas económicas estatales para impulsar y corregir las vías de reproducción del capital. Eso, específicamente en América Latina ha consistido en que el proyecto neoliberal ha buscado reconstruir la condición de dependencia respecto de los centros globales a partir de la modificación del patrón de reproducción del capital, pugnando –como ya se mencionó- por la transición de un patrón nacional industrial a un patrón de exportación de producción especializada. Ese patrón de exportación de producción especializada se constituyó entonces, para mantener los flujos de intercambio dependiente y desigual entre periferias y centros, es decir, para redoblar las condiciones de exportación de materia prima y productos que son requeridos de manera especializada por parte de los centros globales.

En ese sentido, el neoliberalismo se configuró como un proyecto que pugnó por romper las fronteras económicas nacionales y redoblar la dependencia periférica que garantizó el funcionamiento requerido por las lógicas del capital mundial (Fontes, 2010)

La tríada Estado-neoliberalismo-patrón exportador de producción especializada es entonces importante para desglosar las formas de relaciones sociales que adoptaron los estados Brasileño y Chileno para poder entender por qué los gobiernos del Partido de los Trabajadores y del Partido Socialista no consiguieron cambiar las configuraciones sociales neoliberales y su forma de ordenamiento social.

Capítulo 2 El caso chileno: El Neoliberalismo del Partido Socialista y el pacto concertacionista

No existe en América Latina parangón con el proceso de instauración del modelo neoliberal que se dio en Chile, pues, mientras que en otros países del continente, dicho modelo fue asimilado en momentos de caídas de las dictaduras y transiciones democráticas, en Chile, el neoliberalismo se asignó bajo el cobijo proporcionado por la dictadura militar (Ruiz & Boccardo, 2015, pág. 28).

En un contexto de shock, represión y desarticulación de la oposición, se erigió la alianza entre el sector militar dirigido por Augusto Pinochet y el grupo de los Chicago Boys⁵ (Harvey, 2005), quienes sostuvieron como proyecto político-económico fundamental la doctrina neoliberal, a partir de la cual comenzaron un recetario con una serie de medidas como las siguientes (Garretón, 2012, págs. 72-73)

- Eliminación del control de precios
- Liberalización de los flujos de capital internacional
- Liberación del mercado financiero
- Privatización de gran cantidad de empresas públicas
- Privatización de los sistemas de pensiones, salud y educación

⁵ 'Chicago Boys' fue el nombre que se le dio a un grupo de funcionarios de la dictadura que originalmente eran estudiantes y profesores de la Universidad Católica de Chile y que más tarde fueron formados en universidades estadounidenses, especialmente en la Universidad de Chicago, gracias a becas y programas de intercambio. Allí se insertaron en la corriente teórica neoliberal, bajo la tutoría de Milton Friedman (Ver Harvey, 2007). Más tarde, a su vuelta a Chile, participaron en el escrito de un documento mejor conocido como "El Ladrillo", el cual resumía una serie de medidas propias de la doctrina neoliberal que conformaron el proyecto político-económico del dictador Augusto Pinochet y que fueron puestas en marcha como parte de un gran plan de ingeniería social. Más tarde, los Chicago Boys asumieron importantes puestos de administración durante la dictadura, además de conformar un bloque tecnocrático que presumía de experticie y alejamiento de la política (Ver Monckerberg, 2001). Entre los integrantes más destacados se encuentran Sergio De Castro (Ministro de Economía, 1975-76; Ministro de Hacienda 1976-82), Pablo Baraona (Presidente del Banco Central 1975-76; Ministro de Economía, 1976-78), Sergio de la Cuadra (Presidente del Banco Central 1981-82; Ministro de Hacienda 1982), Hernán Büchi (Ministro de Economía, 1979-80; ODEPLAN 1983-84; de Hacienda 1985-89), Álvaro Bardón (Presidente del Banco Central 1977-81), Jorge Cauas (Ministro de Hacienda 1974-77), Miguel Kast (ODEPLAN 1978-1980; Ministro del Trabajo y Previsión Social 1981-82; Presidente del Banco Central 1982) y Joaquín Lavín (Ministro de Educación 2010-2011, Ministro de Planificación y Desarrollo Social 2011-2013), entre muchos otros.

- Eliminación del derecho a huelga y formación de sindicatos y gremios profesionales
- Cambio en las reformas tributarias para apoyar a los grandes consorcios empresariales trasnacionales

En ese sentido, el bloque de poder se conformó de la unión entre neoliberalismo y dictadura, una simbiosis entre lo militar y lo neoliberal (Moulian, 1997, pág. 18). A partir de la centralización del poder y la fuerte represión, logró instaurarse una transformación radical del patrón de reproducción de capital industrial, pasando a un patrón exportador de producción especializada, pero conllevando un barrido radical y profundo de las estructuras y actores consolidados durante el proceso nacional-popular, generando a su vez una reconfiguración clasista, con nuevas alianzas, nuevos actores económicos y sociales y nuevas formas de estructuración de lo social (Ruiz & Boccardo, 2015, pág. 10).

Con la primacía de la propiedad privada y un modelo de economía de libre mercado, se dio inicio al gran anhelo del neoliberalismo, augurando una supuesta “disminución de la intervención del Estado en el mercado”, pero que realmente implicó una profunda reestructuración social a partir de la dirección centralizada del Estado. Fue desde la dirección política que se impuso una radical contrarrevolución capitalista que inició alterando además del patrón de reproducción del capital, el mapa del poder económico, impulsando el surgimiento de nuevos consorcios, empresas y conglomerados económicos con niveles de acumulación y concentración de la riqueza (Fazio, 2016), nunca antes vistos en la historia de Chile.

Esa acumulación desmedida fue ordenada y tutelada a partir de la dictadura, pues, gracias a la acción de Pinochet lograron colocarse en puestos clave de administración de empresas estatales a referentes de los Chicago Boys, quienes a su vez lograban privatizarlas y transferirlas a manos de grupos económicos en alianza con capital de la burguesía externa. Esa transformación capitalista se dio de manera radical en todos los ámbitos de la vida pública, desde la prestación de servicios hasta las actividades productivas y comerciales primordiales para el país, desde el campo y las actividades agrícolas hasta los espacios de producción cultural

y educativa. La privatización fue un medio de transformación de la estructura económica social, política y cultural de Chile.

Más adelante, esos referentes y funcionarios de la dictadura pasaron a administrar las empresas privatizadas y convivieron con la emergencia de una nueva burguesía con altísimos niveles de poder económico, que gracias a su capacidad de acumulación logró instaurarse como el actor fundamental en la vida nacional (Ibidem, 2015, p. 109), consolidándose como el actor con mayor posibilidad de decisión e incidencia en todas las decisiones del rumbo social, es decir, con mayor capacidad de dirección social.

En paralelo con la gran contrarrevolución capitalista, aumentaron los niveles de desigualdad y también de descontento de la sociedad en contexto de un estado de shock y represión, frente a lo cual los brotes de descontento se canalizaron a través del plebiscito de 1988, en el cual triunfó el “No” a la continuidad de la dictadura.

Durante ese período se consolidó la formación de la Concertación de los Partidos por la Democracia, coalición que se dio a partir de la alianza entre dos partidos que antiguamente se encontraban enfrentados: el partido de la Democracia Cristiana (DC) y el Partido Socialista (PS). A esa coalición se sumarían más tarde partidos pequeños como el Partido Por la Democracia (PPD) y el Partido Radical Social Demócrata (PRSD).

Con una larga historia pasada, tanto la DC como el PS apostaron a ser oposición del régimen, pero sin conformar un nuevo proyecto político (Garretón, 2012, pág. 86), sin una propuesta de utopía u horizonte social, convirtiendo su alianza en un mero pacto pragmático de gobernabilidad que le disputara el gobierno a Renovación Nacional (RN) y a la (Unión Democrática Independiente (UDI), los partidos defensores de la dictadura que conformaron la Alianza por Chile.

Una vez que el régimen civil-militar cesó, el gran reto para la sociedad chilena, y en especial para los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, fue la superación de la herencia de la dictadura. Sin embargo, lejos de ello, lo que se ha demostrado, es que el modelo neoliberal permaneció vigente (Íbid, 2012) a través de una transición pactada en los términos de la dictadura, sosteniendo sus

estructuras económicas y políticas. En este caso, fueron 5 los gobiernos del período posterior a la dictadura:

1. 1990-1994 Presidencia de Patricio Aylwin (DC)
2. 1994-2000 Presidencia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC)
3. 2000-2006 Presidencia de Ricardo Lagos (PS)
4. 2006-2010 Presidencia de Michelle Bachelet (PS)
5. 2014-2018 Reelección con intervalo⁶ de Michelle Bachelet (PS)

A pesar de lograr algunos triunfos en materia de derechos humanos y mejoría de programas sociales, los 5 gobiernos sostuvieron a modo de continuidad el proyecto político-económico neoliberal de la dictadura, a partir de grandes pilares como la Constitución de 1980?, el patrón de reproducción de capital, el rol subsidiario, restringido, represivo y focalizado del Estado y la hegemonía de la propiedad privada en no solo las relaciones de mercado, sino en todas las relaciones sociales y culturales (Ruiz, 2016).

En ese sentido, los gobiernos posteriores a la dictadura fracasaron en términos de proporcionar un proyecto transformador que desterrara el proyecto social de la dictadura, pero sí consiguieron en cambio, generar una “neoliberalismo corregido” en consonancia con un “progresismo acotado” (Garretón, 2012). Eso quiere decir que se limitaron a la administración de las estructuras sociales heredadas por la dictadura y optaron por acomodarse a las nuevas formas de reproducción de la vida social.

Durante el período de los gobiernos de la Concertación, este orden se mantuvo perdurable, sin embargo, las movilizaciones de 2006 llegaron a poner en entredicho su estabilidad. Después de exigir carnet gratis, los estudiantes secundarios llegaron a cuestionar la Ley Orgánica Constitucional Para la Educación (LOCE), heredada de la dictadura, para no solo espantar el orden jurídico educativo, sino para reclamar que aquella promesa de ascenso social a través de la educación por lucro, no era más que una ilusión que fortalecía la competencia descarnada y sostenía un

⁶ La reelección de Michelle Bachelet se da después del gobierno del derechista Sebastián Piñera, quien gobernó entre 2010 y 2014.

sistema educativo privado, privativo y exclusivo que no es más que un negocio de grandes conglomerados.

La revuelta de los pingüinos -como se le conoció a la protesta de los secundarios-, sacudió importantes sentidos comunes logrados por el relato de la Concertación y demostró que existía un gatopardismo que realmente protegía el orden socioeconómico de la dictadura, es decir, que había logrado adaptar al neoliberalismo bajo un discurso de supuesta preocupación social.

Además, logró superar su propio sector e integrar a otros sectores sociales que se manifestaron contra el lucro, contra la privatización de la educación y que iniciaron un proceso de reflexión sobre el imperio del mercado sobre lo social. En ese contexto, las aún más grandes movilizaciones estudiantiles de 2011, con la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) a la cabeza, fueron más lejos y proclamaron la necesidad de acabar con las lógicas del mercado, pero no solo eso, el 2011 consolidó la sacudida iniciada por el 2006, que demostró la expresión de un malestar social largamente acumulado y que ponía en duda ya no solo la autenticidad y voluntad de cambio de la Concertación, sino que representó un llamado a romper con la lógica neoliberal del Estado, hecho por los hijos del neoliberalismo. Era la emergencia de un nuevo actor social, una nueva generación de jóvenes y también de movimientos sociales, hijos de un sistema que los crió y los hizo crecer, pero que al mismo tiempo eran la expresión de las contradicciones de un proyecto político posterior a la dictadura pero sostenedor del mismo modelo económico.

Ese nuevo proceso de subversión frente al neoliberalismo continúa en marcha y redobla alientos con millonarias manifestaciones contra el privado modelo de las Agencias de Fondos de Pensiones (AFP), en defensa del territorio y los recursos naturales, en contra de la centralización municipal y gubernamental, en contra de la terciarización y el outsourcing y finalmente también en contra de la corrupción de las instituciones, como lo demostraron los sorprendentes resultados tras las elecciones de 2017, en los que surgió un nuevo Frente Amplio, conformado de organizaciones estudiantiles nacionales como Movimiento Autonomista, Izquierda Autónoma, Izquierda Libertaria, Revolución Democrática, la Unión Nacional Estudiantil, Poder, etc y que logra colocar numerosos representantes suyos en

espacios de representación como concejalías, diputaciones y una senaduría, además de haber alcanzado el 20% de la votación, apenas detrás del 23% del oficialista Alejandro Guillier, representante de la Nueva Mayoría.

En estas elecciones ganó nuevamente el derechista Sebastián Piñera, sin embargo, el Frente Amplio ha demostrado representar a un electorado que pugna por transformaciones profundas del modelo social, político y económico, y parece anunciar un posible período de disputa que aún se encuentra en entredicho.

Frente a estos hechos, el presente capítulo intentará dar no sólo un carácter descriptivo al fenómeno que ha implicado la adaptación del neoliberalismo durante los gobiernos, específicamente del Partido Socialista de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, sino que buscará darle una vertiente explicativa. Esto a través de un análisis de la conformación del Bloque en el poder hegemónico y las alianzas realizadas por parte del PS durante sus gobiernos, sin dejar de señalar que la acción del PS ha estado marcada por su propia conversión al centro político, el vaciamiento de un horizonte histórico y alianzas políticas (con la DC) y económicas (con la burguesía asociada) que han fungido como una concha de contención y renuncia al cambio.

I. Genealogía y conformación de la burguesía asociada en Chile

Cambios en la estructura socio-económica chilena y sustitución del patrón de reproducción industrial

La dictadura chilena significó una reconfiguración radical de la situación de la burguesía interna. Mientras la primera mitad del siglo XX representó la pugna por

consolidar un orden económico que girara entorno a un proceso de industrialización en el país, a partir del golpe de Estado de 1973, se barrió con todo vestigio de la complicada burguesía industrial, instaurando un proceso de pugna por conformar una nueva burguesía acorde al modelo neoliberal.

Gracias al régimen autoritario que centralizaba el poder, y a través de una radical política de privatización de todo aspecto de los organismos económicos estatales, la dictadura de Augusto Pinochet se dedicó a impulsar un nuevo proyecto político-económico, novedoso en América Latina y que más tarde se expandiría a toda la región: el neoliberalismo.

Fue así, como al alero del Estado, diversos funcionarios de la dictadura (entre ellos Hernán Büchi y el yerno de Pinochet, Julio Ponce de Lerou) comenzaron a involucrarse en directorios de importantes empresas estatales, para fomentar una política paulatina pero acelerada de privatización (se estiman 30 privatizaciones de grandes empresas estatales en 15 años), que decantaría en una radical transformación del mapa de la extrema riqueza y alteraría el panorama de las burguesías chilenas.

Las empresas que habían sido desmanteladas como parte de la política de Estado, fueron vendidas, traspasadas, fusionadas o adquiridas por alianzas a gran escala de capitales nacionales y extranjeros multinacionales (Ruiz & Boccardo, 2015, pág. 76), que conformaron una nueva burguesía asociada, misma que desde luego, vio incrementado su potencial económico a la par de un auge de ganancias sin igual, pues si bien, aunque quienes adquirirían las otrora empresas estatales, tenían ya una larga trayectoria de lucro, lo cierto es que gracias a la desregularización económica, estos empresarios no habrían tenido acceso a importantes empresas paraestatales de no haber contado con una alianza con el capital extranjero y un decidido apoyo por parte del Estado. Tales son los casos de la alianza entre la empresa Endesa España y la generadora de energía eléctrica Enersis de nacionalidad chilena. Ese caso, mejor conocido como “caso Chispas”, expuso la iniciativa del gerente general de Enersis, José Yuraszeck quien buscaba conseguir la alianza con Endesa España sin el conocimiento, - y por tanto, sin el consentimiento- del directorio de su empresa (Mönckerberg, 2015).

Ese al igual que el caso de la alianza entre el Banco de Chile y la red financiera estadounidense de Citibank, demuestran cómo existió un crecimiento de la burguesía asociada, misma que logró posicionarse en los más importantes lugares de producción y comercialización.

A diferencia de lo que podría pensarse, la contrarreforma agraria realizada por Pinochet, lejos de regresar el poder a la vieja oligarquía terrateniente chilena, realizó más bien una política de “modernización capitalista”, generando una tecnologización de la industria agropecuaria, pero concentrando la producción en manos de nuevos empresarios provenientes del agronegocio trasnacional (Ruiz & Boccardo, 2015, pág. 76), lo que trajo consigo un nuevo fenómeno de capitalismo agroexportador. A su vez, se vieron fortalecidos otros empresarios dedicados a la comercialización de esa producción, pero no solo hacia el mercado interno, sino también hacia el mercado regional latinoamericano⁷, eso, gracias a su alianza con capitales extranjeros.

Para el año de 1980, los empresarios exportadores representaban el 38.2% del total del empresariado agrícola, sin embargo para 2009, ya componían el 52.2% del total, mientras que los empresarios no exportadores eran el 14.6% durante 1980, contrastando con el 13.1% de 2009 (Íbid, p. 83). Como puede observarse, la estructura de la burguesía agrícola fue modificándose, hasta conformarse como una mayoría dedicada a la comercialización exportadora de materia prima.

El rubro de la minería también fue explotado en mayor medida por la burguesía asociada con el capital extranjero para exportar, teniendo en cuenta que tan solo en 2012 la Inversión Extranjera Directa (IED) en minería representó el 49% de todas las inversiones extranjeras, alcanzando un neto de USD \$ 15.096 millones (Ruiz & Boccardo, 2015, pág. 86).

Como puede verse, a través del proceso instaurado por la dictadura, el proyecto político-económico neoliberal, poco a poco fue desmantelando la antigua estructura del patrón de reproducción de corte industrial para sustituirlo por un nuevo patrón de reproducción de capital de exportación de producción especializada en alianza con una burguesía asociada de capital nacional y extranjero.

⁷ Ruiz y Boccardo catalogarán a ese tipo como “empresariado criollo”, colocándolo justo detrás de empresarios regionales brasileños y mexicanos. Íbid, p. 95

En ese sentido, es posible entrever un radical cambio de los patrones de reproducción de capital, pasando de un período industrial a un período de exportación de producción especializada, pero ello desde un impulso político y estatal de también una sustitución del proyecto político-económico hegemónico, el cual pasaría de un proyecto nacional-popular industrializador y proteccionista a un proyecto neoliberal, propenso a abrir la economía a la entrada del capital transnacional y sus actividades dirigidas a la exportación de materia prima especializada, incluida la producción minera⁸.

Eso, se empalma con la interpretación de Jaime Osorio, respecto a que existe un proceso de articulación y explicación mutua entre neoliberalismo (como proyecto político-económico) y patrón exportador de producción especializada (como patrón de reproducción de capital) (Osorio, 2016)

Ahora bien, ese nuevo patrón exportador de producción especializada, no se detuvo ni sufrió grandes cambios, pues una vez terminada la dictadura, aconteció todo lo contrario, la exportación se posicionó como la actividad fundamental del nuevo patrón de reproducción del capital (Ver cuadro 1).

Cuadro 1 Exportaciones de productos primarios 1988-2003

Año	Exportaciones de productos primarios (Millones de USD)
1988	7,052
1991	8,942
1994	11,604
1997	17,870
2000	19,210
2003	21,046

Fuente: *Elaboración propia a partir del documento "Economía chilena en cifras 1985-2003"/ Departamento de Estudios, Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa)*

Además, eso incluyó un auge de otros sectores de producción de materia prima (Ver cuadro 2). A pesar, de que organismos como la Sofofa, consideran esto como parte del sector industrial, lo cierto, es que, actividades como la pesca, la producción de

⁸ A partir de este momento, en la presente investigación se considerará como materia prima también a la producción minera-extractiva, actividad fundamental en el rubro de la exportación en América Latina. (Osorio, 2016).

vino y celulosa o la exportación de cobre, forman parte de un tipo de producción primaria, -con un mínimo de manufactura, como cualquier actividad exportadora-, sin embargo, es no significa que deba catalogarse dentro del rubro del ramo industrial.

Cuadro 2 Especialización de la producción de exportaciones 1991-2003

Año	Exportación de productos de pescadería (Millones de usd)	Exportación de vinos (Millones de usd)	Exportación de celulosa (Millones de usd)	Exportación de cobre *(Miles de toneladas métricas)
1991	160	84	305	1,814
1994	354	143	716	2,220
1997	668	424	679	3,512
2000	953	580	1,111	4,646
2003	1,132	677	894	4,909

Fuente: Elaboración a partir de datos de "Economía chilena en cifras 1985-2003" Departamento de Estudios, Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa)

Esas mismas actividades exportadoras de materia prima siguieron en constante crecimiento en los momentos más recientes de los gobiernos de la Concertación y particularmente en el gobierno de la socialista Michelle Bachelet (Ver cuadro 3)

Cuadro 3 Exportaciones de materia prima 2013-2015 (Miles de millones de pesos chilenos)

Año	Exportación de producción agrícola-silvícola	Exportación de pescado	Exportación de celulosa	Exportación de cobre
2013	2,678	73	1,729	19,808
2014	3,083	85	2,014	21,305
2015	3,268	71	2,044	19,634

Fuente: Elaboración a partir de datos del Banco Central de Chile/"Cuentas Nacionales de Chile 2015"

Puede constatar, entonces, que el patrón de reproducción, transformado durante dictadura, se mantuvo en constante auge durante los gobiernos de la Concertación,

sin tener un cambio fundamental, ni siquiera durante los gobiernos del Partido Socialista.

Constitución de los grupos económicos durante la dictadura: Primera generación empresarial

Una característica del neoliberalismo es que lejos de fomentar el libre mercado, lo que ha hecho es generar a partir de la intervención del Estado, una serie de modificaciones en los mapas nacionales de extrema riqueza (Borón, 2012) (Harvey, 2005). De esa manera, lejos de permitir la libre competencia, en el caso chileno lo que realmente sucedió fue una concentración mayor de la riqueza, configurando poderosos monopolios económicos en un proceso de instauración de un patrón de exportación de producción especializada.

Si bien, son numerosos los autores y corrientes de la teoría política que buscan infundir la idea de separación entre las esferas de lo político y de lo económico, lo cierto es que ambas se encuentran profundamente ligadas. En el caso chileno, la concentración extrema de capital no solo ha logrado el incremento del poder económico de ciertos grupos sociales, sino también el aumento de la capacidad de influir políticamente en el rumbo social. Esto quiere decir que el incremento de poder económico ha significado también el incremento de poder político.

A lo largo del presente apartado se desarrollará la historia de la conformación de los grupos económicos más poderosos de Chile y se irá detallando de qué forma estos, al constituirse sobre una base de concentración de riqueza –y por tanto de poder económico- han ido apuntalando su capacidad de influencia sobre la dirección política y la supervivencia del proyecto neoliberal como proyecto rector de la vida social en Chile.

Como ya se había mencionado anteriormente, no se puede entender el surgimiento del modelo neoliberal chileno y el consecuente patrón exportador de producción especializada, sin entender su estrecha vinculación con la instauración de un gobierno militar a nombre de la dictadura de Augusto Pinochet.

Bajo la asesoría de diversos integrantes del grupo de los Chicago Boys, la dictadura militar y el modelo neoliberal subsistieron como simbiosis, como parte del mismo proceso (Moulian, 1997), lejos de permitir el libre mercado, propició la constitución de poderosos grupos económicos gracias a numerosas privatizaciones de empresas públicas.

En ese sentido resulta una falacia hablar de que el neoliberalismo se funda sobre el principio de la reducción del Estado y la ampliación y liberalización del mercado, ya que fue el mismo Estado el que realizó las privatizaciones y asignó nuevos roles a las empresas. La reconfiguración del mapa de la extrema riqueza en Chile sucedió al alero de un Estado autoritario, profundamente centralizado y comprometido con el libre mercado. Lejos de reducir el papel del Estado, el neoliberalismo le otorgó un rol preponderante en la reconfiguración del mercado, la propiedad privada y la emergencia de una nueva burguesía asociada, delegándole el papel de ser el principal soporte de las grandes empresas en los momentos de fuertes crisis económicas, como fue el caso de la crisis chilena de 1982-1983.

A lo largo de 15 años (1975 - 1990) fueron privatizadas alrededor de 30 empresas, de los rubros más importantes y estratégicos de la producción nacional. Entre estas podemos encontrar las siguientes:

- Empresa Nacional de Electricidad (Endesa) y filiales
- Compañía de Acero del Pacífico (CAP)
- Industria Azucarera Nacional (Iansa)
- Línea Aérea Nacional (LAN Chile)
- Compañía de Teléfonos de Chile (CTC)
- Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel)
- Laboratorios Chile y el Instituto de Seguros del Estado(ISE)

Por otro lado, se puede notar también la garra del Estado en la conformación de los más poderosos grupos económicos -que a juicio de la doctrina neoliberal no debe tener intervención alguna sobre los procesos económicos- al observar que los mismos personeros del Estado chileno que administraron grandes empresas públicas, pasaron posteriormente a ser parte de los directorios de esas empresas

una vez privatizadas, siempre en alianza con grandes capitales extranjeros, que les permitieron indagar en nuevas áreas de inversión.

Dicho de otro modo: quienes jugaron papeles fundamentales en las privatizaciones a lo largo de la dictadura, obtuvieron su recompensa, siendo asegurados en puestos clave de las direcciones de las empresas privadas. Tal es el caso de Hernán Büchi, quien fuera ministro de Hacienda de Augusto Pinochet, mismo que jugó un rol clave en la privatización, siendo parte de los directorios de las empresas que primero eran estatales y que tras su intervención fueron privatizadas. Tal personaje llegó a ser vicepresidente de la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich). Igual es el caso de Julio Ponce de Lerou, quien estuviera casado con Verónica Pinochet, hija del dictador Augusto Pinochet y que después de impulsar la privatización de diversas empresas, pasó a ser presidente de Soquimich de 1980 a 1983 y vicepresidente de la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa).

Otros caso similar fue el de Sergio De Castro, ideólogo del modelo, chicago boy por excelencia, ministro de economía y de hacienda de Pinochet. Tuvo negocios en la Agencia de Fondos de Pensiones (AFP) ProVida, en el Banco Transandino y en el Consorcio Periodístico de Chile. También podemos encontrar a Enrique Seguel Morel, ex ministro de hacienda de Pinochet y último presidente del banco central, quien pasó a ser parte del directorio de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), entre otros que pueden mencionarse.

Las privatizaciones fueron muchas y muy variadas, sin embargo aquí resumiremos brevemente 5 casos en los que el Estado mismo fomentó la conformación de nuevos grupos económicos:

- Privatización de la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa)
- Privatización de la Compañía de Acero del Pacífico (CAP)
- Privatización de la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich)
- Rescate y apoyo al grupo Cruzat-Larraín
- Privatización y uso de las Agencias de Fondos de Pensiones (AFPs)

Privatización de la Compañía de Acero del Pacífico (CAP)

La privatización de CAP partió de aumentar la participación del sector privado al 49% y disminuir la de Corfo al 51% en 1986. El costo real debió de ser de 200 millones de USD y sin embargo, la transacción no superó los 40 millones. En ese sentido, hubo un subsidio desde el Estado a particulares de alrededor de 150 millones de USD. Roberto Andraca llegó a la gerencia general de CAP en 1983 y desde ahí abrió la privatización que se completó en 1988. Después Andraca pasó a ser presidente del directorio de CAP en 1990. (Mönckerberg, 2015, págs. 73-74) . Luego de ganar la pugna contra los estatistas (sector dentro del ejército que se opuso parcial y momentáneamente a las privatizaciones), Hernán Büchi pasó a ser ministro de hacienda en 1985. Junto con Andraca impulsaron la venta de acciones de CAP desde Corfo a las AFPs, después CAP las recuperó pero las vendió a accionistas que no eran de Corfo, dejándola con solo el 51% de acciones. Así se preparó la disminución del capital propio de CAP y de Corfo, lo que permitió la privatización de la Planta Huachipato que producía el 100% de acero en Chile (Íbid, pp. 81-82)

Privatización de la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich)

Soquimich, que era totalmente estatal en 1973, ahora trabaja salitre, yodo y litio de manera privada. Después del golpe militar, la empresa fue dirigida por el exministro de minería Enrique Valenzuela quien generó fuertes reducciones de personal. De 1974 la empresa que contaba con 10, 684 trabajadores redujo su plantilla a 3, 051 trabajadores en 1996.

A comienzos de los 80 el presidente de la empresa era Julio Ponce Lerou (exyerno de Pinochet). Para 1988 Soquimich ya era enteramente privada gracias a que sus acciones fueron vendidas a la sociedad Pampa Calichera S.A. que logró reunir en 1989 el 20% de las acciones. En su directorio estuvieron Sergio De Castro de 1988 a 1992, Enrique Valenzuela de 1987 a 1991 y Hernán Büchi desde 1993. Por su parte Ponce Lerou obtuvo casi 300 millones de pesos en su calidad de presidente del holding Soquimich y de las filiales Nitratos, SQMQ y Salar. (Íbis, pp. 99-111).

Corfo vendió sus acciones por un monto de 119, 982, 594 USDs entre 1983 y 1988 con un subsidio implícito del 76.4% favoreciendo a los compradores, es decir a Julio Ponce Lerou. (Íbid, pp 113-114).

Privatización de la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa)

Endesa y Chilectra eran públicas. Hoy están bajo el control mayoritario de Endesa España, junto con sus hermanas Gener y Chilquinta. Gener ha sido propiedad de Bruno Philippi quien fue su presidente 13 años junto con el consorcio estadounidense AES Corporation. En 1981 Chilectra fue dividida en tres filiales (chilmetro, chilgener o Gener y Chilectra V región), para después de esto, ser entregada a José Piñera, quien pasaría a ser presidente de Chilmetro una vez que esta se privatizó. En 1983 el gerente general era José Yuraszeck. En 1987 se constituyeron dos sociedades de inversión llamadas Chispitas 1 y Chispitas 2 que permitieron crear más adelante la sociedad anónima Enersis que se volvió madre del holding. A esta se le transfirió la propiedad de Chilectra y Sinapsis. Más adelante José Piñera y Yuraszeck en conjunto, lograron el control de Endesa y Enersis. Más adelante se les vendió a españoles. Cabe destacar que para ese momento (1997-1999) el valor de Enersis era de 5000 millones de USD (Íbid, pp 131-133)

Rescate y apoyo al grupo Cruzat-Larraín

Cuando Fernando Larraín se fue a España en tiempos de la Unidad Popular (UP), su cuñado Manuel Cruzat se quedó a cargo de sus negocios del antiguo grupo BHC, que estaba integrado por Cooperativa Vitalicia, Fondos Mutuos Cooperativa Vitalicia, Seguros La Industrial y La Trasadina, Promotora Progres, Inversiones Atom, las mineras Lo Prado y Pudahuel, 18% de Copec y el 10% de la Compañía Refinería de Azúcar de Viña del Mar (CRAV). Después del golpe 1974 se consolidó la sociedad Cruzat-Larraín, con la adquisición del 46% del conglomerado para cada cuñado, además de que Juan Braun Lyon se quedó el con 5% y Sergio Cardone con el 3%. Durante la crisis de 1983 el grupo se desarticuló. Gracias a la intervención del Estado, las divisiones, traspasos, liquidaciones y absorción de

deudas por el banco central, el grupo logró recuperar sus negocios. Lo hicieron a través de empresas como Isapre Cruz Blanca, Pinturas Tricolor, Watts, Loncoleche, Forestal Valparaíso y Mineras Pudahuel y Cascada. En 1992 se independizaron Cruzat y Larraín. Cruzat mantuvo Isapre Cruz Blanca, y Forestal Valparaíso. Larraín se quedó con Watts, Loncoleche, Lechesur y varias empresas de Viñas y viñedos. (Íbid, pp. 154-157).

Privatización y uso de las Agencias de Fondos de Pensiones (AFPs)

Las Agencias de Fondos de Pensiones (AFPs) después de 20 años conjuntan más de 6 millones de afiliados, de las cuales Provida reina con el 40% del mercado de afiliados.

Baste mencionar que de la privatizada empresa Chilgener (solo una empresa), la repartición de afiliados se configuraba de la siguiente manera: la AFP Provida manejaba el 9% de las acciones en 2000, Habitat controlaba el 6.97%, Cuprum 6.63%, Santa María 4.45% y Summa y Bansander 3.8% p. 240.

La Reforma Previsional permitió que esos recursos fueran traspasados al sector privado. Así Cruzat y Larraín adquirieron AFP, al igual que los conglomerados de Luksic, Angelini y Matte, quienes se juntaron para formar la AFP Summa, mientras el grupo Edwards se sumaba con AFP El Libertador. (Íbid, p. 242).

La emergencia de la burguesía de segunda generación

Para el año de 2015, tan solo doce empresas concentraban el 50.2% de toda la capitalización bursátil de Chile y de esas, solo tres sociedades empresariales concentraban el 25.8%. Esas tres eran la italiana Enel (a través de sus alianzas con Enersis y Endesa), Falabella y Copec (Fazio, 2016, pág. 39). Lo anterior para mostrar que la oligopolización es una característica permanente del mapa de la extrema riqueza en Chile y que tiene como origen, la radical reconfiguración realizada por la dictadura. Fue a partir de ese momento que cambiaron las reglas del mercado y que mutaron los nichos empresariales, permitiendo fuertes niveles

de concentración de excedente. Sin embargo, aunque ese panorama ha ido variando a lo largo de la historia del neoliberalismo en Chile, también ha ido teniendo diversos altibajos.

Uno de los más importantes ha sido el recambio generacional de los grupos empresariales, después de la crisis de 1982-1983, momento en el cual comenzaron a hacerse visibles nuevos integrantes de la burguesía, que a su vez, fueron fruto del modelo neoliberal y del nuevo patrón de reproducción de capital.

Con una notoria preponderancia de las actividades primario-exportadoras, fueron emergiendo importantes empresas que al haber permanecido pequeñas durante el período anterior a la crisis, no habían adquirido grandes sumas de deuda, como si lo habían hecho los propietarios de la primera generación. Eso les permitió a pequeñas empresas exportadoras acceder a fuertes espacios de producción agropecuaria, pesquera, forestal, vinícola, minera, en alianza con capitales extranjeros y accediendo a créditos y privatizaciones realizadas desde el Estado.

Esa burguesía de segunda generación es la que logró consolidarse a pesar del cambio de régimen y es la misma que hoy día gobierna desde grandes oligopolios concentrados. Para 2015, el mapa de los mayores patrimonios en términos brutos se conformaba de la siguiente manera:

Cuadro 4 Sociedades (empresas) con mayores patrimonios al 30 de septiembre de 2015

Sociedad empresarial	Patrimonio (Millones de USD)	Controlado por: (Grupo controlador)
Energis	11,616	Enel (Italia)
Minera Escondida	11,505	BHP Billiton (Inglaterra-Australia)
Codelco	11,426	Estado chileno
Antar Chile	10,183	Grupo Angelini
Empresas Copec	9,878	Grupo Angelini
Quiñenco	8,662	Grupo Luksic
Empresas CMPC	7,904	Grupo Matte
Forestal Arauco	6,575	Grupo Angelini
Minera Valparaíso	6,478	Grupo Matte
Falabella	6,308	Solari-Cúneo-Del Río

Cencosud	5,865	Grupo Paulmann
Endesa	5,003	Enel (Italia)
Inversiones CMPC	4,962	Grupo Matte
LQ Inversiones Financieras	4,568	Grupo Luksic-Citigroup (E.U.A.)
Anglo American Sur	4,482	Anglo American (Inglaterra-Sudáfrica)
Doña Inés de Collahuasi	4,413	Glencore (Suiza)- Anglo American
Banco Santander de Chile	3,840	Banco Santander (España)
Banco de Chile	3,818	Grupo Luksic-Citigroup (E.U.A.)

Fuente: Fazio, Hugo (2016). "Los mecanismos fraudulentos de hacer fortuna. Mapa de la extrema riqueza 2015", pp. 50-51

Como puede observarse, en este cuadro aparecen siete grandes grupos económicos, de capital extranjero, que en ocasiones se encuentran asociados con grupos económicos chilenos, de hecho la mayoría de las grandes empresas se encuentran fusionadas con grandes consorcios extranjeros. En esa categoría están desde la empresa Enel, que es propietaria de otras empresas energéticas como Endesa (que anteriormente era dominada por capital español), Enersis y Chilectra⁹; la alianza financiera entre el chileno Grupo Luksic y la estadounidense Citigroup; la alianza entre Empresas Copec del Grupo Angelini con la forestal estadounidense International Paper; la alianza entre Grupo Luksic y la cervecera Heineken a través de la empresa CCU; y hasta la alianza entre el Grupo Said y Coca-cola, de quien la primera se convirtió en empresa distribuidora en Chile a través de la empresa Embotelladora Andina (Fazio, 2016, págs. 43-49).

De entre esos grupos, la única que se mantiene en control del Estado es la minera Codelco, quien se sostiene como única empresa de alto calado que financia algunos rubros del gasto social estatal.

⁹ José Yuraszeck adquirió la estatal Chilmetro, después de que esta fue privatizada, para después transformarla en Enersis. Esa empresa fue vendida a través de una gran estafa por parte de Yuraszeck hacia pequeños inversores, para pasar a ser posesión de Endesa España (Ver, Monckerberg, 2015). Actualmente, tanto Enersis como Endesa se encuentran controladas por Enel, de capital italiano.

Por otro lado, como puede apreciarse, además de los integrantes de la burguesía externa, se pueden señalar tres grupos económicos de la burguesía asociada que se encuentran de manera recurrente entre los conglomerados más poderosos del país:

- Grupo Angelini
- Grupo Luksic
- Grupo Matte

Los tres tienen como común denominador su capacidad de supervivencia durante la transición, los tres lograron hegemonizarse en el caso de los dos primeros y sostenerse en el caso del tercero (el grupo Matte ya era bastante fuerte desde antes de la dictadura). Los tres sobrevivieron a las crisis económicas de la década de los ochenta, y también se acoplaron a una mayor flexibilización respecto a su adherencia política una vez que se hegemonizaron los gobiernos de la Democracia Cristiana y del Partido Socialista, lo que les permitió sostener sus negocios, empresas y poderío económico, pero también influir en el panorama político y dar dirección al Estado chileno.

A continuación se realizará una breve reseña genealógica de cada uno.

a) Grupo Angelini

Este grupo fue formado por Anacleto Angelini, italiano que comenzó sus negocios en Abisinia durante su anexión realizada por Benito Mussolini, pero que salió huyendo de la Segunda Guerra Mundial, para arribar a Santiago de Chile en el año de 1848.

Desde su llegada a Chile, Anacleto se dedicó a levantar empresas, primero con la empresa Pinturas Tajamar, formada por alianzas de capitales chilenos e italianos, después con la formación de empresas de construcción, como aliado de su amigo Giuseppe Franchini, pero adquiriendo verdaderamente su renombre económico junto con su hermano Gino en la industria pesquera desde 1956.

Comenzó su aventura mercantil en la empresa Pesquera Ricardo de Varenne, fincada en Arica –norte de Chile-, que levantó gracias a su modernización y enfoque

en la producción industrial de harina de pescado. Con el impulso del presidente Jorge Alessandri extendió su empresa a Iquique y recibió de manos de Corfo el 40% de las acciones de la empresa Pesquera Indo en 1968. Más tarde con la ocupación de Grace y Cía (también pesquera), logra adquirir otras 26 empresas, de las cuales controlaba 16. Entre esas figuraban empresas de seguros como Seguros Cruz (con el 59% de propiedad) o Seguros La Previsoria (96% de la propiedad); también se encontraban entre sus propiedades del sector forestal la empresa MASISA (18%) y la Sociedad Forestal Siberia (100%).

Gracias a eso logró conformar su patrimonio con USD\$101 millones y ganancias de USD \$ 76 millones. Esto a su vez le permitió la compra de la Compañía de Petróleos de Chile (Copec) en 1985 con el 14% de las acciones, mismas que recibió del Estado en pagos bajísimos. Desde ahí, lograron consolidar su posición de fuerza económica durante la crisis de 1982 y observar de lejos la caída del Grupo Cruzat-Larraín –quien poseía la mayor parte de Copec- (Caviedes & Bustamante, La red de arrastre estatal: la influencia empresarial del grupo Angelini, 2015), teniendo gracias a eso, la posibilidad de controlar totalmente la compañía con el 60% de las acciones en 1987 y resistir robustamente las consecuencias de la crisis económica

Desde el 2005 el patrimonio bursátil del Grupo Angelini se calcula en alrededor de USD \$9,807 millones. Una vez fallecido Anacleto, la propiedad pasó a dividirse entre Gino su hermano y sus sobrinos Roberto y Patricio. Desde entonces el Grupo Angelini se transformó en la Sociedad Antar Chile y recibe ganancias de USD\$ 855 millones anuales por el consorcio Copec, de los cuales su sector forestal aporta el 50, 5% y el combustibles el 33,6%. Además recibe USD\$ 805 millones anuales por parte de su empresaCorpesca (Ibíd, 2015, p. 5)

b) Grupo Luksic

Hijo del empresario croata Policarpo Luksic, Andrónico estudió en el extranjero, pero ante la crisis de la Segunda Guerra Mundial, prefirió dedicarse a la especulación financiera, logrando reunir un capital de USD \$ 30 mil. Con ese dinero se dedicó a adquirir empresas una vez de vuelta en Chile, como fue el caso de los Yacimientos de Cobre de Portezuelo en el año de 1952. Esta misma empresa fue cedida a

empresarios japoneses por USD \$ 500 mil. Poco a poco, Luksic fue incrementando su riqueza con empresas de minería y de pesca.

Para 1957 el empresario adquirió Forestal Quiñenco S.A., vinculándola con otros negocios en minería. Durante el período de la Unidad Popular y el gobierno de Salvador Allende, el Grupo Luksic logró negociar no ceder todas sus empresas, lo cual se le fue concedido debido a su pequeño tamaño.

Después del golpe militar, Andrónico se radicó en Londres, ya que fue relegado por los proyectos económicos de Pinochet, lo que le llevó a extender sus negocios a Argentina, Colombia y Brasil.

Cuando sucedió la crisis económica de los 80s el Grupo Luksic se dedicó a comprar empresas, comenzando por Ferrocarril Antofagasta-Bolivia, siguiendo con la Manufacturera Madeco, Empresa Michilla. Para 1986 ya controlaba también Anaconda Chile S.A. y Compañía de Cervecerías Unidas (CCU) (Caviedes, 2015, pág. 39), siempre en alianza con capitales extranjeros, tanto estadounidenses como asiáticos y holandeses. Finalmente alcanzó su auge con la adquisición minera de los Yacimientos de Pelambres, adquisición que se convirtió en su principal fuente de ingresos y acumulación de capital. Desde ese momento el Grupo logró ingresar al círculo de los empresarios más grandes de Chile y fue generando alianzas con empresas como NipponMining and Metals y Mitsubishi.

Con la entrada en el siglo XXI, los precios del cobre a nivel mundial subieron y eso permitió al grupo potentado adquirir el control del Banco de Chile, fusionándolo en el año 2000 con el Banco Edwards. Para 2007 se anexa también el Citibank, logrando tener uno de los lugares más importantes del capital bancario. Actualmente también se adhirió a la estadounidense Citigroup, colocándose como el principal consorcio financiero dentro de Chile.

En 2010 logró comprar el 67% de las acciones del Canal 13, y para 2011 su fortuna ya estaba valuada en US\$ 19, 200 millones.

Una vez fallecido Andrónico, se conformó la sociedad Quiñenco, la cual es presidida por el hijo mayor llamado AndrónicoLuksic Craig, quien administra el sector industrial y el sector financiero, debido a la muerte de su hermano. El sector minero, por otro lado, quedó en manos de Paul Luksic, el menor de los hijos.

c) Grupo Matte

De los tres grupos, el Matte es el único que logró sostenerse como grupo antes y después de la dictadura. Su origen se remite a una familia oligárquica del siglo XIX, que se mantuvo fuerte, gracias a sus inversiones en el sector papelerero y forestal. Desde 1920 se formalizó la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), logrando adquirir una fábrica de papel periódico, misma que dirigió Jorge Alessandri, el futuro presidente de Chile.

Ya en la década de los 70s, el Grupo Matte se configuraba como el segundo lugar de grupos económicos, solo detrás del empresario Agustín Edwards, dueño de El Mercurio. Entre las empresas que sustentaban para esa época al grupo estaban sus aseguradoras, empresas agrícolas y también las forestales.

Durante el gobierno de Salvador Allende, el conglomerado se resistió a ser estatizado, a pesar de ser uno de los más importantes, eso le valió ser considerado desde la burguesía como un símbolo de la resistencia empresarial frente al gobierno socialista. Sin embargo, a pesar de no ser expropiado, sí tuvo que perder por falta de recursos el Banco Sudamericano, Codina y Cemento Melón. Poco después, el Grupo Matte logró comprar la Minera Valparaíso y eso le catapultó para adquirir propiedad en Colbún.

Ya durante la dictadura el patrimonio del consorcio ascendió a USD\$ 360 millones, adquirido no a partir de muchas empresas como los dos grupos anteriores, sino con pocas empresas muy rentables y caras (Caviedes & Bustamante, 2015).

Por otro lado, de los hechos más importantes de la historia del grupo, resalta su supervivencia a las crisis de los 80s. Si bien, los Matte no fueron parte del círculo de los grupos consentidos del pinochetismo, lo cierto es que sí se vieron beneficiados por el régimen, debido a la orientación neoliberal y empresarial de la dictadura, que permitía el acrecentamiento de la riqueza y acumulación. Uno de los puntos clave de ese beneficio fue la Ley 701 de 1974, en la que el régimen de Pinochet daba por terminada la reforma agraria realizada por el gobierno de Allende, permitiendo la repartición privada de territorio forestal y agrícola. De esa

redistribución privada se vieron beneficiados los Matte, siendo exentos de impuestos y beneficiados con subsidios del Estado.

Además la dictadura vendió INFORSA a varios capitales, entre ellos el Grupo Matte, lo que les dio un piso suficiente para sortear la crisis, aunado a una política de bajo endeudamiento del 8%, equivalente a USD\$ 8 millones, muy por debajo de las deudas de grupos como el BHC y el Cruzat-Larraín. De hecho durante la crisis logró aumentar su participación del 26% al 45% en su empresa papelera y controlar 35 empresas, entre las que destacaron Volcán y Pizareño y Puerto Lirquén. También formaron el Banco Industrial y de Comercio Exterior, además de consolidar a su papelera como la 2ª empresa más grande de Chile (Ibíd, 2015).

Después de hacer varias incursiones en alianzas con el capital trasnacional y meterse en el comercio argentino y uruguayo, la CMPC se vuelve holding en 1995 y conjunta sectores de producción y mercantilización de celulosa, forestal, papeles, tissue y productos sanitarios. En 1996 incursiona en el sector energético, gracias al apoyo del presidente demócrata cristiano Eduardo Frei, quien privatizó la Central ColbúnMachicura, de la cual, el Grupo Matte adquirió el 40% de propiedad, con una inversión de USD\$ 136 millones (Ibíd, 2015).

Finalmente, a la muerte del padre, en el año 2000, quedaron a cargo los hijos Patrivia, Eliodoro y Bernardo Matte Larraín.

Hasta aquí se tienen suficientes elementos para apuntar que los tres grupos económicos más poderosos atraviesan sus múltiples empresas por actividades productivas de materia prima y baja manufactura que van desde la industria de celulosa y papel hasta actividades extractivas cupríferas y de otro tipo de minerales, pasando por grandes consorcios pesqueros.

Actualmente, también estos grupos, junto con otros grandes conglomerados ingleses, australianos, canadienses, estadounidenses y sudafricanos, se encuentran no solo entre los grandes productores, sino también –y por consecuencia- se hallan insertos en el mapa de los grandes exportadores, como puede apreciarse en el siguiente cuadro.

Cuadro 5 Porcentaje de exportaciones según empresas y grupos económicos

Empresa	Porcentaje dentro del total de exportaciones	Grupo económico controlador
Codelco	14.77%	Estado
Minera Escondida	8.76%	BHP Billiton (Inglaterra-Australia)
Anglo American Sur S.A.	3.24%	
Minera Los Pelambres	3.20%	Grupo Luksic (A través de la sociedad Amsa)
Metalúrgico Alto Norte S.A	2.63%	Glencore (Suiza)
Minera Doña Inés de Collahuasi	2.51%	Anglo American y Glencore
Celulosa Arauco y Constitución	2.46%	Grupo Angelini
Minera Centinela	2.40%	Grupo Luksic
Minera Spence S.A.	1.75%	BHP Billiton
CMPC Celulosa S.A.	1.72%	Grupo Matte
Minera Candelaria	1.50%	Lundin Mining (Canadá)
Minera El Abra	1.35%	Freeport McMoRan (E.U.A.)
Enami	1.31%	Estado
Minera del Pacífico	1.15%	CAP (Propiedad de Roberto Andraca)
Soquimich Salar S.A.	0.94%	Julio Ponce de Lerou
Anglo American Norte S.A.	0.88%	Audley Capital Advisors (Inglaterra)
Aserraderos Arauco S.A.	0.84%	Grupo Angelini

Fuente: Fazio, Hugo (2016). "Los mecanismos fraudulentos de hacer fortuna. Mapa de la extrema riqueza 2015", pp. 50-51

Esto muestra entonces, la conformación de una gran burguesía asociada con capitales extranjeros (estos últimos también se dedican de manera independiente al saqueo de los recursos chilenos), enfocada principalmente a la producción especializada de materia prima, misma que es exportada a los centros económicos mundiales, para abastecer su demanda de manera satisfactoria.

Desempeño histórico de los grupos económicos de segunda generación en la consolidación de los gobiernos concertacionistas

El rol histórico que jugaron los grupos económicos de segunda generación en la consolidación de los gobiernos concertacionistas fue de gran calado. Por un lado permitieron la transición de dictadura a la democracia liberal, pero también por otro lograron sostener a partir de su flexibilización un modelo, un orden de sociedad: el neoliberalismo.

Si bien, fueron los grupos económicos de primera generación los que sustentaron a la dictadura y a su vez fueron beneficiados por esta, tuvieron el papel de sostener un modelo social llamado neoliberalismo. Por su parte, los grupos económicos de segunda generación mantuvieron el modelo y lo fortalecieron, permitiendo que este se readaptara a los cambios de vientos políticos.

Sin embargo, el neoliberalismo de democracia resultó ser uno muy distinto al neoliberalismo de dictadura. Sin ahondar demasiado en el problema, es importante mencionar que una de las características del nuevo neoliberalismo es su capacidad de proyección histórica, más allá de los gobiernos, lo que permitió sostener el modelo, a pesar de cambiar de régimen político, y por tanto, sin importar la diferencia ideológica de los partidos en el poder (Álvarez Vallejos, 2015). En ese sentido, no es descabellado pensar que la fuerza político-ideológica propia de los grupos económicos es tal que ha permitido consolidarse e imponer un orden político-económico a pesar de los cambios en las clases reinantes del Estado chileno.

En ese sentido, la transición entre dictadura y gobiernos democrático-liberales fue un momento de ruptura fundamental para la supervivencia de los grupos económicos de segunda generación y también del modelo neoliberal.

Si bien los empresarios más importantes beneficiados por la dictadura se perfilaron del lado del dictador Augusto Pinochet e incluso impulsaron la formación de partidos políticos que agruparan sus intereses, los grupos económicos de segunda

generación se vieron en la necesidad forzada de replantear su papel en un régimen democrático liberal.

Fue por ello que se comenzaron a perfilar distintas expresiones de lo que sería un proyecto social de clase. Los primeros intentos provinieron justamente de la Sociedad del Fomento Fabril (SOFOFA), misma que comenzó a hacer llamados a los partidos de la Concertación desde el año 1986 para definir su propuesta en materia económica. En ese sentido, y con tal de dar su planteamiento como contrapeso, la SOSOFA convocó a una serie de conferencias, entre las que destacó la de Alfredo de Molinas Bellido, vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y presidente de Fomento del Trabajo Nacional del mismo país. Entre los llamados del empresario español hacia el capital chileno destacaron dos postulados fundamentales:

- a) La necesidad de que los gremios empresariales debían ser actores políticos, dando dirección social en el debate nacional.
- b) La empresa es entendida como la base de la estructura social, pues es un espacio de trabajo en beneficio de la sociedad, lo cual debería generar orgullo empresarial.
- c) La urgencia de “unirse absolutamente” para elaborar una “estrategia” para todos los empresarios de Chile. (Íbid, 2015, p. 31) (Mercurio 29 de marzo de 1986. P. 1)

Otra de las primeras expresiones la constituyó el posicionamiento de la Confederación de Producción y Comercio (CPC), la cual era dirigida en ese entonces por Manuel Feliú, personaje que se dedicó a impulsar la idea del orgullo empresario y de ganancia de dinero, siendo que el Estado era una competencia desleal pues podía perder dinero sin quebrar (Íbid, 2015, pp.32-33), en ese sentido, atreverse a correr un riesgo de inversión, debía ser visto como algo benéfico y respetable. Además, el empresario, aseguraba que la victoria del “No” a la dictadura en el plebiscito de 1988 no era sinónimo a un rechazo al modelo económico, por parte de la población, pues existía una separación entre política y economía, por eso era importante combinar “apertura y realismo” desde el empresariado, es decir se abrían al diálogo, siempre y cuando no se pusiera en riesgo la supervivencia del neoliberalismo y la preponderancia del (gran) empresariado en este (Íbid, 2015, p.

47). En otras palabras, Feliú proponía hacer que se cambiaba para no cambiar lo fundamental, una especie de gatopardismo empresarial.

Una vez que la campaña del “No” resultó victoriosa en el plebiscito, la CPC publicó un manifiesto ya para el año de 1989, que se planteaba supuestamente apartidista y en el que destacaba los siguientes puntos (Íbid, 2015, p. 52). La máxima que se constituyó fue la defensa total del modelo neoliberal.

- a) El reconocimiento del empresariado de la burguesía interna como protagonista político, capaz de influir en la dirección social.
- b) El rechazo a las reformas laborales que se preveían una vez asumido el régimen democrático-liberal.
- c) Necesidad de impedir medidas económicas redistributivas, como lo sería una reforma tributaria.
- d) La propuesta de una ley del Estado empresario, sentando la imposibilidad de que este asumiera el papel del “estatismo” (pensando en la regulación propia del período del gobierno de Salvador Allende y la UP).

Desde ese momento, como lo documenta Rolando Álvarez, los grupos económicos comenzaron a ser consultados de manera constante por los gobiernos concertacionistas en turno, para poder aplicar políticas económicas, para definir el salario mínimo, para definir topes de impuestos ITASA, para activar el Tratado de Libre Comercio NAFTA. Y todo esto lo hacían por medio de reuniones abiertas con la comisión de hacienda del parlamento y también con los ministros, con recepciones en la moneda y participaciones activas de representantes del gobierno en foros de empresarios, a través de la prensa,étc. (Íbid, p. 84).

El juego en la prensa se hacía a través de desplegados que acusaban a la Concertación de mantener aun el modelo “estatista” de la Unidad Popular, para obligar a los ministros a emitir declaraciones públicas en el sentido de calmar a los empresarios y sus inversiones. En ese sentido,

“Se ha exagerado la supuesta capacidad de adaptación del gran empresariado, en el marco de un escenario político que les fue favorable para mantener tanto su protagonismo político como importancia

económica. Por el contrario, la adaptación fue más bien del sistema político, que debió acostumbrarse a que el gran empresariado impusiera su propia agenda político/económica” (Ibíd, p. 74).

II. Alianzas entre los gobiernos del Partido Socialista y la burguesía de segunda generación

Los Grupos Empresariales durante el gobierno de Ricardo Lagos 2000-2005

Desde el principio del gobierno de Ricardo Lagos, al frente del Partido Socialista, los grandes empresarios se encargaron de realizar una especie de mito alrededor del nuevo presidente, sembrando dudas sobre su capacidad de mantener la estabilidad del modelo.

Sin embargo, existió un punto de quiebre en la relación del gobierno de Lagos con los empresarios y este fue la intervención del empresario Juan Claro, que era en aquel entonces el presidente de la Sofofa y que presentó un perfil negociador entre la burguesía nacional y el Estado. Esto se fue hilando a partir de la “Agenda Pro Crecimiento” del año 2002 que firmaron tanto el líder del gremio empresarial como el presidente de la república.

Esta acción fue reforzada por otro momento de inflexión ocurrido durante agosto de ese año, en el que hubo un encuentro entre Juan Claro y Ricardo Lagos, nada más y nada menos que en el Centro de Estudios Políticos (CEP), propiedad del gran líder de su propio grupo económico, Eliodoro Matte, mismo que se encontró presente. Además se encontraron en aquella reunión Horst Paulmann, presidente de Cencosud; Felipe Lamarca, presidente del Grupo Copec, de propiedad del Grupo Angelini; Francisco Péres, gerente general de Quiñenco, del grupo Luksic; Enrique Cueto por parte de LAN; Bruno Phillipi, y otros grandes empresarios más (ibid, p. 100).

Las repercusiones de aquella reunión fueron importantes, pues desde aquel momento, aquellos grupos económicos, que resultan ser los más poderosos económicamente, tendieron puentes y estrecharon vínculos entre gobierno y gran empresariado. A tal grado que para cuando se tenía que cambiar de dirigente de la CPC, el triunfo fue dado a Hernán Somerville, representante del continuismo del posicionamiento emprendido por el Juan Claro de la Sofofa y de su política empresarial de negociación permanente con el gobierno.

En ese tenor fue la asignación de Vittorio Corbo, economista neoliberal y ex funcionario de Pinochet, además de opositor al gobierno, como presidente del Banco Central durante el año de 2003, dando señales de “buena voluntad” con el gran empresariado. (Íbid, p. 103). Además ya para noviembre de 2003 se dio a conocer un estudio en la revista empresarial *Estrategia*, en la que se mostraba que las grandes empresas habían crecido un 72% durante el último año, sin que ello trastocara la desigual distribución de la riqueza, pues de 533 grandes empresas consultadas por el ranking, solo las 10 más ricas se acaparaban el 41% total de las ganancias¹⁰ (Íbid, p. 104).

En resumen, al final del gobierno de Ricardo Lagos, la opinión de los empresarios hacia este y hacia su ministro de hacienda Nicolás Eyzaguirre era rotundamente positiva, a tal grado que se pasó del “tenemos un presidente de lujo, absolutamente de lujo”¹¹ de Andrónico Luksic a inicios del gobierno laguista, al “Mis empresarios aman a Lagos” de Hernán Somerville a finales del año 2005.¹²

Los Grupos Empresariales durante el gobierno Michelle Bachelet 2006-2010

Fue el mismo presidente de la CPC, Hernán Somerville quien se manifestó abiertamente en apoyo a la presidenta Michelle Bachelet durante las manifestaciones estudiantiles de 2006¹³. Eso dejaba en claro que la alianza entre empresarios y gobierno perduraría a pesar de cambiar de presidente. Pero eso no

¹⁰ *Estrategia*, 17 de noviembre de 2003.

¹¹ *Estrategia*, 24 de agosto de 2000, p. 9

¹² *La Segunda*. 14 de octubre de 2005

¹³ *El Diario*, 28 de agosto de 2006. P. 34

es todo, la misma alianza se mantuvo con el Partido Socialista, aquel contra el cual se había rebelado la burguesía cerca de tres décadas atrás.

Los empresarios poco a poco se fueron concentrando en continuar con su línea supuestamente “modernizadora”, pero que buscaba sobretodo negociar la perdurabilidad del modelo y sus beneficios como “nuevo” gran empresariado hegemónico. “Por ello, no eran aliados naturales de la derecha, que por momentos repetía algunas críticas de los ‘modernizadores’, pero que no podía impedir que estos si lo consideraban pertinente, se reunieran y aplaudieran al gobierno de Bachelet. Mientras tanto, durante la administración de la presidenta socialista, la mayoría del gran empresariado chileno, representado por la cabecera de la CPC, siguió transitando por el camino conciliador diseñado por el liderazgo de Juan Claro en los primeros años de la década” (íbid, p. 111).

Es por eso que Bachelet lo mismo se presentaba ante grandes empresarios, que recibía con los brazos abiertos el apoyo abierto de Eliodoro Matte, personaje que se consideraba a sí mismo como socio del gobierno.¹⁴

Muestras de ello se dieron desde el comienzo, con el nombramiento como ministro de hacienda de un líder cercano a los empresarios como lo fue Andrés Velasco. También en paralelo fue elegido presidente de la CPC Alfredo Ovalle, personaje que encarnaba la continuidad con la línea política flexible de Hernán Somerville.

Con estos dos puntos de partida surgieron iniciativas como el proyecto de ley sobre depreciación acelerada, empujada por empresarios y gobierno para lograr exenciones tributarias a los grandes empresarios, lo que provocó la respuesta de la UDI y la derecha política, asegurando que había un pacto entre gobierno y empresarios. La paradoja, como puede observarse no deja de ser extraña, pues en la pugna política se volteaban los roles de los partidos, al menos en el discurso desde la derecha y fuertemente arraigada en la política económica del PS y la Concertación desde el gobierno. Desde luego que eso ocurría solo momentáneamente debido al oportunismo político de la derecha en la coyuntura.

¹⁴ PEstrategia 16 de octubre de 2006. <

Y aunque esta buena relación sufrió algunos tambaleos durante conflictos laborales que se suscitaron a raíz de problemas de subcontratación de trabajadores hacia la empresa Codelco, las relaciones nunca se lastimaron realmente, ni llegaron a desgastarse profundamente, pues el gobierno renunció a impugnar las determinaciones de los Tribunales de Justicia que actuaron en contra de los trabajadores y a favor de la empresa.

Esas relaciones se mostraron igual de fuertes a inicios del año 2008 con constantes entrevistas entre Ovalle y Bachelet además de una férrea defensa del primero hacia el gobierno de la segunda. Eso se mantuvo hasta las elecciones de 2009 en las que resultó ganador el candidato de la derecha, Sebastián Piñera.

Alianzas políticas entre Estado y grupos económicos bajo gobiernos socialistas

Como puede observarse hasta aquí, la burguesía chilena mantuvo una relación histórica estrecha con los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, pero no solo eso, sino que se conformó como una clase con suficiente capacidad de unidad como para imponer una dirección social al Estado. El actor fundamental de las relaciones sociales que dan vida al Estado chileno son los grandes empresarios, mismos que por medio de su poder económico se mostraron capaces de dictar sus demandas y directrices a los gobiernos socialistas, que a su vez se develaron como subordinados al interés de la burguesía asociada.

A continuación se presenta un recuento de cómo puede observarse la alianza entre el Gran Empresariado chileno y los gobiernos “socialistas”

Tabla 1 Ministros del PS en alianza con grupos económicos

Gobierno	Ministro intermediario	Grupo Económico	Directorio	Cargo Ejercido	Partido
M. Bachelet	Nicolás Eyzaguirre	Luksic	Canal 13	Ministro de Educación (2014-2015). Ministro secretario general de la presidencia (2015)	PPD
M. Bachelet	Alberto Arenas	Luksic	Canal 13	Director de Presupuestos (2006-2010). Ministro de Hacienda (2014-2016)	PS

M. Bachelet	Máximo Pacheco Matte	Angelini/Luksic	Banco de Chile, AFP Provida, Lucchetti, Falabella y Banco de Chile	Ministro de Energía (2014-2016)	PS
M. Bachelet	Aurora Williams	Luksic	Aguas de Antofagasta	Ministra de Minería (Desde 2014)	PRS
M. Bachelet	Vivianne Blanlot	Luksic/Matte	Antofagasta PLC/Colbún	Ministra de defensa (2006-2007)	PPD
M. Bachelet	René Cortázar	Luksic	Canal 13	Ministro de Transportes (2007-2010)	PDC
M. Bachelet	Gustavo Arriagada	Saieh	Corpbanca	Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras (2006-2010)	Indep
M. Bachelet	Alejandro Ferreiro	Saieh	Corpvida	Ministro de Economía (2006-2008)	PDC
R. Lagos	Nicolás Eyzaguirre	Luksic	Canal 13	Ministro de Hacienda (2000-2006)	PPD
R. Lagos	Jaime Estévez	Luksic	Banco de Chile	Ministro de Obras Públicas (2005-2006). Ministro de Transportes y Telecomunicaciones(2005-2006)	PS/PPD
R. Lagos	José de Gregorio	Luksic	Cía Sudamericana de Transportes	Ministro de Economía (2000-2001)Ministro de Minería (2000-2001) Ministro presidente de la Comisión Nacional de Energía (2000-2001)	PDC
R. Lagos	Alejandro Ferreiro	Saieg	Corpvida	Superintendente de Electricidad y Combustibles (2000). Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones (2000-2003). Superintendente de Valores y Seguros (2003-2006).	PDC

Como puede observarse, es durante los gobiernos de Michelle Bachelet (2006-2010) (2014-actualidad) que adquieren mayor número de carteras personeros y trabajadores con nexos en directorios de importantes grupos económicos.

Además también puede notarse que el socio mayoritario del gobierno chileno es el Grupo Luksic, quien sostuvo tres ministros durante el gobierno de Ricardo Lagos y seis ministros durante los gobiernos de Michelle Bachelet. Sus acciones y cotizaciones gubernamentales fueron protegidas por los mismísimos responsables de la política estatal.

Desde ahí se tuvo a importantes personeros en carteras fundamentales como las de Hacienda, Economía, Minería, Transportes, AFPs, etc.

De entre los ministros que manejaban vínculos con el capital nacional, resalta la presencia de Nicolás Eyzaguirre, ministro de Hacienda entre 2000 y 2006, al ser pieza fundamental en los cabildeos entre Ricardo Lagos y los empresarios en aquel momento de ruptura, cuando Juan Claro y los grupos económicos optaron por una política de flexibilización y negociación con el gobierno del Partido Socialista. También se subraya la personalidad de Eyzaguirre porque su política fue requerida por la presidenta Michelle Bachelet, dando continuidad al mandato del ministro. Trasladándolo del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Educación durante su gobierno y en momentos de alta presión por parte del movimiento estudiantil, quien exigía educación pública y gratuita en sus movilizaciones. En respuesta, como puede verse, la presidenta colocó a una pieza importante del grupo económico más poderoso del país a resolver el problema de educación.

Otros personajes importantes a señalar son Máximo Pacheco, quien ejerció en numerosos directorios de consorcios (Banco de Chile, AFP Provida, Lucchetti, Falabella y Banco de Chile) incluso con distintos grupos económicos, (Angelini y Luksic); Aurora Williams, quien fuera activista directa desde su posición en el gobierno en pro de Grupo Luksic en el caso de la reserva Los Pelambres, que sostenía un fuerte conflicto por delimitación de territorios y límites con Argentina (Matamala, 2015, pág. 147); y Alejandro Ferreiro, quien fungiera como Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones entre 2000 y 2003, a

pesar de pertenecer directamente a la empresa Corpvida, aseguradora y clara interesada en asuntos de pensiones y seguros de vida.

La política desde la burguesía: financiamiento empresarial hacia el mundo de lo político

Como pudo observarse en el apartado anterior, los vínculos entre políticos y burguesía interna no solo no se esconden, sino que han sido institucionalizados, como una manera misma de relación política, no solo desde la derecha política, sino también desde gobiernos que se autonomban de oposición. Dicho de otro modo, las alianzas entre gobierno y grandes empresarios nos dan pauta para pensar que la política en Chile se ve dominada por la lógica del mercado.

Para reforzar lo anterior es importante abordar otra arista del problema: el financiamiento privado de las campañas políticas.

Durante el gobierno de Ricardo Lagos se aprobó una Ley durante el año de 2003 que buscaba cambiar las lógicas de financiamiento de las campañas electorales, para regular de mejor manera el dinero privado destinado a política. Sin embargo, después de un importante cabildeo con la derecha, la Concertación aceptó autorizar donaciones de empresas, con mínimas medidas regulatorias (Íbid, 2015, p. 101). Ya para 2013, el Servicio Electoral de Chile (Servel) calculaba que los aportes privados a campañas era de 76.8 millones de dólares, sin embargo existen confesiones como la del ex alcalde de Santiago Jaime Ravinet que aseguró que a pesar de que no se podía exceder los 80 millones de pesos chilenos, recibió 400 millones de pesos. Tan solo en 2013 Michelle Bachelet declaró gastos por 5, 377 millones de pesos chilenos (equivalentes 8 millones 341 mil dólares), mientras que la contendiente derechista Evelyn Matthei gastó 3, 474 millones de pesos chilenos (5 millones 389 mil dólares). (Íbid, p. 102). Como puede observarse, la contendiente del Partido Socialista, Michelle Bachelet alcanzó mayor financiamiento privado que la candidata de la derecha.

Las campañas electorales se han convertido en el mayor espacio de disputa por parte de los Grupos Económicos y aunque se ha intentado regular dicha actividad,

lo cierto es que se mantienen abiertos candados importantes, que permiten a un mismo Grupo Económico financiar a diversos candidatos o partidos a través de distintas empresas. Aunque se fije un tope máximo de aportaciones, los grandes grupos evaden este problema utilizando a sus diferentes empresas, sin rebasar el tope.

Como puede verse en el siguiente cuadro el Grupo Luksic ha podido realizar 47 aportes a través de 20 empresas que pertenecen a su conglomero. Por su lado, el Grupo Matte ha hecho 75 con 36 empresas y el Grupo Angelini ha realizado 60 aportes con 20 empresas. Aunque no son públicos los datos sobre qué partidos han recibido ese dinero, sí podemos saber qué Grupos Empresariales han hecho esos aportes, a través de sus peticiones de exención de impuestos gracias a su dinero donado.

Cuadro 6 Aportaciones de Grupos Económicos a campañas políticas

Grupo Económico	Activos (Millones de dólares)	Número de Empresas aportantes	Total de aportes
Luksic	63.029	20	47
Matte	38.248	36	75
Yarur	37.102	8	24
Angelini	31.054	20	60

Datos actualizados en dólares (Matamala, 2015, p.116)

Como detalle cabe señalar, que entre los primeros cuatro donantes destaca la presencia de los tres Grupos Económicos más poderosos, de entre los cuales, el Grupo Luksic es el que realizó mayor aporte a las campañas políticas, lo que puede

indicar un fuerte interés de aquel grupo económico sobre las decisiones políticas y la necesidad de ser deudores de “ciertos” favores.

Financiamiento de las campañas y los casos de corrupción

Desde inicios del año 2015 la corrupción política se convirtió en un tema recurrente en Chile. Fue durante ese año que estallaron distintos casos de intercambios de favores políticos de actores políticos hacia grandes empresas a cambio de dinero justificado con boletas o recibos de cobro falsas. No hubo un solo partido político que no se viera alcanzado por eso.

Sin embargo, en este espacio nos ocuparemos solo de algunos casos que se destaparon y que vieron involucrada a la coalición gobernante y su presidenta Michelle Bachelet.

El inicio de las campañas presidenciales de 2013 fue el período más intenso para la recolección de dinero y financiamiento por parte de los grupos políticos y grandes empresas. En ese contexto, líderes políticos de todos los ángulos del mapa fueron salpicados con casos de financiamientos legales e ilegales para sus campañas.

Desde las campañas de 2005, Michelle Bachelet había articulado fuertes conexiones con jóvenes de la think thank Expansiva, mismos que fueron fundamentales durante ese año para ganar la presidencia, pero también para gobernar. Andrés Velasco fue nombrado ministro de Hacienda, Eduardo Bitrán ministro de Obras Públicas y Jorge Marshall vicepresidente de Banco Estado.

Sin embargo, en ese grupo de jóvenes tecnócratas también participaba Jorge Rosenblut, joven ingeniero que había adquirido un posgrado en la Universidad de Harvard y quien había participado como subsecretario de Telecomunicaciones y de la Presidencia durante el mandato de Eduardo Frei (DC).

Rosenblut que desde el año 2000 era el presidente de la compañía Chilectra fue el encargado de recaudar dinero para la campaña de Bachelet durante 2005, logrando que esta pudiera contar con fondos de 3 mil 865 millones de pesos chilenos (105 millones 946 mil pesos mexicanos), apenas por debajo de su competidor, el empresario Sebastián Piñera, quien recaudó 3 mil 902 millones de pesos chilenos (106 millones 960 mil pesos mexicanos), (Matamala, 2015, p. 40), lo cual quiere

decir que Rosenblut había logrado su cometido de conectar a la candidata socialista con el gran empresariado chileno.

Para la campaña de 2013, el mismo personaje coordinó una serie de triangulaciones y acciones de recaudación de dinero que conllevaron importantes alianzas con el gran empresariado.

El primer caso fue su reunión el día 30 de agosto de 2013, con los dueños de la empresa Endesa Chile, asentados en Madrid y Marbella España. Aquella reunión por videoconferencia, tuvo por objetivo solicitar financiamiento para la campaña de Bachelet. Ahí se encontraron también Vittorio Corbo (cercano a Ricardo Lagos por haber sido presidente del Banco Central), Felipe Lamarca (quien había sido líder de la Sofofa) y los dueños Alfredo Arahuetes, Paolo Bondi y Manuel Morán. Ahí, la empresa acordó aportar USD\$ 1 millón, cantidad que se distribuiría entre candidatos a la presidencia, senadurías y diputaciones (Matamala, 2015, pág. 38).

Ahí quedó claro cómo Rosenblut cumplía con su tarea de generar recaudación entre empresarios hacia quien sería la siguiente presidenta de Chile.

El hecho cobra relevancia porque Rosenblut se había visto implicado en una triangulación que realizó junto con Giorgio Martelli Robban durante las campañas de 2009 (Eduardo Frei era el candidato) para beneficiarse de dinero proveniente de la empresa Soquimich, propiedad de Julio Ponce de Lerou, el exyerno de Augusto Pinochet. Durante ese escándalo se comprobó que Martelli recibió facturas falsas a cambio de servicios que nunca prestó, mismas que sumadas equivalían a 2 millones 500 mil pesos mexicanos (92 millones de pesos chilenos) (Matamala, pp. 42-43).

Sin embargo, a pesar de que Martelli había realizado esos negocios, para 2011 ya había constituido la sociedad Asesorías y Negocios para realizar triangulaciones en un equipo que habían constituido en conjunto él, Rosenblut y Rodrigo Peñailillo, quien sería más tarde el ministro del interior de Bachelet.

Rosenblut logró entrevistarse en al menos dos ocasiones con el dueño de Soquimich (SQM), Julio Ponce de Lerou y con el grupo Angelini. De ahí recibió pagos a través de la filial SQM Salar y de José Tomás Guzmán, representante de los Angelini (Matamala, 2015, p. 43) y a través de la Sociedad falsa de Asesorías y Negocios se pudieron triangular fondos para pagos de campaña a Rodrigo Peñailillo.

Como puede observarse este gran caso fue fundamental para la recaudación de fondos para la campaña de Michelle Bachelet, mismos que provenían no solo de importantes grupos económicos, sino también de la empresa armada y articulada por el exyerno del dictador Augusto Pinochet. Las alianzas evidenciadas ya no solo eran entre grupos económicos y poder político, sino también entre la herencia de la dictadura y los grupos del Partido Socialista.

Aunque no ha podido comprobarse que Bachelet tuviera conocimiento de estos movimientos, lo cierto es que su gobierno quedó atado a una alianza profunda con el gran capital nacional desde su inicio.

Por su parte, los ministros Alberto Arenas (Hacienda) y Rodrigo Peñailillo intentaron por todos los medios detener investigaciones de la Fiscalía nacional durante inicios de 2015, sobre las triangulaciones de recaudaciones de financiamiento de las campañas, sin embargo tuvieron que salir del gobierno para mayo de 2015.

Con la salida de Arenas se desdibujó la relación con el Grupo Luksic, pues como se había mencionado anteriormente, este formaba parte del directorio de Canal 13.

Pero con la renuncia de Rodrigo Peñailillo también se acabó un momento de sustento de una nueva camada de jóvenes tecnócratas que comenzaban a crecer al alero del Partido Socialista y se reflejó la imposibilidad de ese nuevo grupo de hacer una sustitución generacional en la dirección del partido y del gobierno. Se demostró un profundo fracaso en el proyecto político gobernante y su línea de pragmática alianza con los grandes grupos económicos chilenos.

El caso Caval

Además del vendaval que tuvo que vivir el gobierno de Michelle Bachelet durante el escándalo de corrupción de su ministro del interior, estalló también otro caso que evidencía alianzas con Grupos Económicos en la forma de hacer política durante su gobierno.

En un contexto en el que Grupo Luksic ha aportado importantes cantidades de dinero a la política y en el que se observa que mantienen importantes vínculos con el Partido Socialista y con la Concertación, fue que se desarrolló un paradigmático caso de tráfico de influencias.

El hijo de la presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos participó de una reunión con Andrónico Luksic, el principal responsable del Grupo Económico referido, en su propia oficina, para solicitar un crédito de 6, 500 millones de pesos chilenos (USD\$ 10.083 millones), para ser traspasados a la empresa Caval.

La situación fue que la esposa de Dávalos (nuera de Bachelet), Natalia Compagnon resultó ser la dueña de la empresa Caval con el 50% de propiedad y el mismo Dávalos trabajaba como gerente de proyectos.

El préstamo fue autorizado a través del Banco de Chile de posesión de Grupo Luksic unos días después de la reunión, dejando al descubierto con ello, que el hecho de ser el hijo de la presidenta era un muy buen motivo para recibir un cuantioso préstamo para una empresa privada, préstamo que sería imposible de recibir si no fuera por la relación política entre la presidenta y el grupo económico.

Las alianzas entre Gran Empresariado y los gobiernos del Partido Socialista no son el origen, pero sí la evidencia de un giro ideológico rotundo de aquel partido que antaño había sustentado la coalición de la Unidad Popular y la presidencia de Salvador Allende. Hoy, a 44 años del golpe de Estado, la hija de Salvador Allende, Isabel Allende, es la presidenta de un Partido Socialista muy distinto, que realiza alianzas profundas con el gran capital nacional para sostenerse y para desarrollar una agenda de gobierno que permita la reproducción del modelo económico neoliberal. Hoy la adaptación del neoliberalismo en Chile se ha dado gracias a la intervención activa del Partido Socialista, otorgando legitimidad y un discurso que se dice progresista, pero que voltea la espalda a importantes causas sociales.

¿Cómo el PS pudo tener mutaciones tan radicalmente distintas después de 44 años? A continuación expondremos algunas respuestas a esta incógnita

III. Las mutaciones del proyecto del Partido Socialista de Chile

Las alianzas entre la burguesía y los gobiernos del Partido Socialista no son el origen, pero sí la evidencia de un giro ideológico rotundo de aquel partido que antaño había sustentado la coalición de la Unidad Popular y la presidencia de Salvador Allende. Hoy, a 44 años del golpe de Estado, la hija de Salvador Allende,

Isabel Allende, es la presidenta de un Partido Socialista muy distinto, que realiza alianzas profundas con el gran capital nacional para sostenerse y para desarrollar una agenda de gobierno que permita la reproducción del modelo económico neoliberal. Hoy la adaptación del neoliberalismo en Chile se ha dado gracias a la intervención activa del Partido Socialista, otorgando legitimidad y un discurso que se dice progresista, pero que voltea la espalda a importantes causas sociales.

Breve recuento histórico de las mutaciones del Partido Socialista

El Golpe de Estado de 1973 y la posterior instauración de la dictadura militar de Augusto Pinochet implicó un momento constitutivo en la historia de Chile, que provocó la reconfiguración total del panorama social. Eso desde luego afectó a uno de los principales actores sociales de la experiencia de la Unidad Popular: el Partido Socialista.

Una vez que comenzó la represión y persecución militar contra todos los activistas y participantes del proceso allendista, el PS se vio obligado a pasar a la clandestinidad al igual que otros partidos de izquierda. Cuadros fundamentales de la organización fueron reprimidos, torturados, desaparecidos y asesinados. Otros más lograron escapar y se exiliaron en los países que les otorgaron asilo.

Fue a partir de ese momento que las reconstituciones del PS tuvieron que ser fuertes, en medio de la persecución, la clandestinidad y los hilos tejidos desde el exilio. Una primera etapa de mutación del PS posterior al golpe se desarrolló a modo de autocrítica, de evaluación y diagnóstico del conflicto.

Aunque durante este proceso el Partido Comunista se presenta abierto ante las tesis militares, -después de no haberlas aceptado antes del golpe-, el Partido Socialista prefiere rechazar las posturas militares y opta por cuestionar la falta de dirección unitaria del gobierno de la Unidad Popular, además se plantea la necesidad de cuestionar de fondo elementos de su proyecto, como lo eran el “estatismo” y la visión teleológica de sus valores ideológicos (Valenzuela, 2014, pág. 59).

A partir del diagnóstico realizado sobre su actuación en el gobierno, el PS comienza a mostrarse receptivo a propuestas reformistas y a la socialdemocracia europea. Lo

más rescatado de este posicionamiento teórico-político es la necesidad de revertir la idea de estatización y hacer primar la democracia política.

Más tarde se dio un conflicto en términos de la dirección política entre dos líderes del tiempo: Carlos Altamirano y Clodomiro Almeyda. Durante el año de 1979, ambos entraron en conflicto por cuestiones de desacuerdos sobre el quehacer político del partido y fue así como se formaron dos Partidos Socialistas distintos con direcciones propias y que desconocían la legitimidad del contrario (Valenzuela, 2014, pp.69-70). La fractura interna de las dos corrientes provocó heridas profundas y fue el paso necesario para que ambos se plantearan una urgente renovación. El siguiente proceso generó entonces una reflexión más acorde con el reformismo del momento. A través de pequeños núcleos en el exilio, se plantearon distintas tesis entre 1980 y 1981 para lograr la renovación del PS. Por un lado se llamó a generar una reflexión entorno a la valorización de la democracia y de los derechos humanos, las libertades individuales y un paulatino alejamiento del maxismo-leninismo, además de que se planteó que era fundamental realizar una alianza con el también reprimido Partido de la Democracia Cristiana. Los acercamientos entre el PS y la DC se dieron sobretodo a partir de organizaciones como Convergencia Socialista, el Bloque Socialista y la Alianza Democrática, además de revistas en circulación y trabajos en institutos en Italia, Francia, Holanda y España (Íbid, p. 72).

En Chile la discusión giró sobretodo en torno a la necesidad de democratización del país y el derrocamiento de la dictadura. Aquellos debates se desarrollaron a partir de iniciativas de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) e instituciones de educación e investigación no estatales, como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), en donde pudieron trabajar sin tanto acoso intelectuales como Tomás Moulian, Manuel Antonio Garretón, Norbert Lechner o Augusto Varas. Ya para 1988 se llamó a la reunificación del PS, logrando juntar a las corrientes de ambos bandos bajo la dirección de Jorge Arrate. Sobre esa base se empujó una renovación política que les permitió ser actores importantes en la conformación de una nueva coalición de gobierno.

Finalmente, el último proceso de mutación del PS se suscitó a partir de la caída de la dictadura y la llegada al gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia, coalición de la cual ha formado parte el PS junto a la DC desde 1989.

A esta también se añadió el Partido Por la Democracia, que se formó a partir de escisiones de los partidos grandes.

Durante aquellos momentos el PS mantuvo su presencia en el gobierno, primero con Enrique Correa quien fungiera como Ministro Secretario General con el presidente Patricio Aylwin y después con Germán Correa como Ministro del Interior de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Por su parte Carlos Ominami, Ministro de Economía jugó un papel importante para dar la imagen de que los socialistas podían mantener negociaciones y diálogo con los grupos empresariales para mantener la economía chilena “estable”, sin estatizaciones ni nacionalizaciones, es decir, sin que el Estado interviniera en la regulación económica.

Como ya se explicó los gobiernos de los presidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet terminaron de alejar el fantasma del socialismo, generando alianzas profundas con las burguesías asociadas, promoviendo encuentros, entrevistas, comunicados, lobbys, negociaciones hasta llegar al momento de sostener sus campañas con dinero de Julio Ponce Lerou, el exyerno de Augusto Pinochet.

Del proyecto socialista al proyecto neoliberal

Las mutaciones del PS han representado un giro de 180° en su posicionamiento ideológico, convirtiéndose en un engrane fundamental para la legitimación del neoliberalismo con una cara social y programas focalizados para sectores pobres. Sin embargo como puede observarse existió una renuncia a la transformación del régimen neoliberal, optando por su sostenimiento o mejoramiento de su posición inaugurada desde 1994 cuando el PS llamó a “enmendar el modelo de desarrollo” (Íbid, p. 86).

Por otro lado, el PS negó la propuesta revolucionaria, optando por una vía de distribución del ingreso (no de la riqueza) y también divorciándose tajantemente de la política de los movimientos sociales. Desde este punto es que la institucionalidad neoliberal no ha sido trastocada por la política del PS, a tal grado que este se ha negado a convocar a un nuevo proceso constituyente, aceptando con ello hasta el momento la misma Constitución Política legada por la dictadura de Pinochet. El PS

optó por fortalecer sus pactos y alianzas con la burguesía y no con los movimientos sociales.

Entre las explicaciones que se han hipotetizado, diferentes autores han sugerido que los gobiernos de la concertación utilizaron el momento de la dictadura a modo de chantaje, de tal manera que se evitase la emergencia de demandas sociales, siempre blandiendo la posibilidad de un retorno del autoritarismo, por lo cual, según esta idea, sería necesario apostar al “centro” político y al sostenimiento del orden heredado por la dictadura (Huneus, 2014) (Ruiz, 2016)

En ese sentido el PS ha preferido optar por situarse en una posición de centro o punto neutro en el mapa político (Huneus, 2014), intentando con ello evitar conflictos con la burguesía mientras sostiene su careta de preocupación social.

Sin embargo, ello no elude dos grandes problemas y contradicciones en el posicionamiento del Partido Socialista:

- Ha aceptado sin discusión la lógica del mercado, comprando la argumentación conservadora de que el Estado representa necesariamente “estatismo” y “autoritarismo”. Es decir, el Partido Socialista ha abrigado conceptualizaciones clave de las propuestas ideológicas del neoliberalismo, configurando con ello una adherencia a los sentidos comunes del neoliberalismo (Moulian, 1997): el sostenimiento del libre mercado, la no regulación del Estado sobre la economía aunque esto implique la conformación de monopolios y altos grados de la concentración de riqueza, por ejemplo.
- El PS ha optado por dos vías simultáneas: la renuncia a la transformación del neoliberalismo y del orden imperante, al mismo tiempo que ha optado por su adaptación con una cara social (Garretón, 2012).

Esas dos contradicciones, entre otras que pueden encontrarse, han sido clave en la legitimación del modelo, anulando todo tipo de oposición a este y eliminando también un polo transformador del mapa político. Por tanto, el PS se ha consolidado como un actor clave de la Concertación y ahora Nueva Mayoría en la adopción del neoliberalismo en Chile o de aquello que Manuel Antonio Garretón ha llamado “Neoliberalismo corregido, progresismo acotado” (Íbid, 2012).

Dicho de otro modo, el proyecto de socialismo del PS se desdibujó pasando por la renuncia a un proyecto transformador de orden social y mutando a un proyecto capitalista de adopción del neoliberalismo con componentes de beneficio social. Se pasó del proyecto socialista al proyecto neoliberal.

IV. Estado neoliberal y bloque de poder: el Partido Socialista de Chile, la Concertación de los Partidos por la Democracia y la Burguesía Asociada

Las protestas estudiantiles de 2006 y de 2011 lograron insertarse en la agenda nacional, sin embargo, quien crea que su único aporte político fue la demanda de educación gratuita se encuentra en una posición reduccionista. Los movimientos con los que cientos de miles de jóvenes irrumpieron en la escena nacional realmente generaron otro señalamiento político más sofisticado: los gobiernos de la Concertación habían continuado con la misma herencia de la alianza dominante entre una fracción hegemónica dentro de la burguesía y un gobierno enquistado en la misma institucionalidad heredada por la dictadura.

Como se expuso anteriormente, al alero del régimen civil-militar de Augusto Pinochet, se impulsó el surgimiento de un nuevo patrón de reproducción de capital, pero también la hegemonía incuestionable de una burguesía interna asociada con burguesía externa, que permitió generar un cuadro de privatizaciones de los servicios y empresas público-estatales y la consolidación de la primacía del patrón de extracción y exportación de cobre, pescadería, vinos, celulosa y papel.

Esa burguesía, beneficiada por la contrarrevolución capitalista instaurada por el Estado de dictadura, se conformó como el actor social más preponderante en el mapa político de Chile, lo que le permitió establecerse en una posición privilegiada al interior de un nuevo bloque de poder, del cual también formó parte el gobierno militar de Pinochet y la acción política de tecnócratas (Ruiz, 2016, pág. 78) formados para dismantelar los nichos de un patrón de reproducción de capital industrial y también las estructuras de un Estado protector.

Desde la instauración del golpe de estado en 1973, hasta la salida de Pinochet en 1990 transcurrieron 17 años, a lo largo de los cuales se consolidó ese bloque, gracias a la situación de shock y represión que permitió evitar todo tipo de oposición social al fenómeno contrarrevolucionario, que barrió los actores y fuerzas sociales que primaban en el patrón de reproducción anterior.

Durante el proceso de consolidación de ese bloque, también acontecieron diversos actos de impugnación, tal como ocurrió durante el período de crisis económica entre 1982 y 1983, momento en el que irrumpieron las Jornadas de Protesta en la que participaron miles de personas que reclamaban el fin de la dictadura. Ese hecho marcó un momento de efervescencia popular, pero que más tarde, frente a una nueva oleada de represión del régimen, fue subsumida por la transición pactada entre la alianza de la Concertación y la dictadura.

Desde inicios de las jornadas de protesta habían surgido ya dos tesis políticas de oposición a la dictadura: la tesis de la vía armada del Partido Comunista, que logró articular el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, -mismo que alcanzó a realizar un atentado contra Pinochet-; y la tesis del centro político que reunió al Partido Socialista y a la Democracia Cristiana entorno a una propuesta de transición democrática pactada. Esa última fue la que logró consolidarse durante el Plebiscito de 1988, que preparaba la salida de Pinochet a cambio de sostener intocada la institucionalidad de la dictadura.

La transición resultó ser entonces, un acuerdo entre élites organizadas que soterró la participación social bajo la decisión política acotada de la transición, es decir, se configuró un pacto a espaldas de la sociedad (Íbid, 2016, p. 68), pero no solo eso, lejos de representar un cambio en la estructuración del bloque de poder, la salida pactada fue una mera sustitución del grupo gobernante, que se paró sobre la institucionalidad heredada, pero que sostuvo sin un mínimo de cambio la alianza dominante con la burguesía asociada.

La transición fue entonces un cambio de gobierno, pero con la continuidad del mismo bloque de poder, que se caracterizó por el afianzamiento del principal actor de la dictadura como dirigente político y actor hegemónico: la burguesía chilena asociada, hija de la dictadura. Esa burguesía, beneficiaria de la acción estatal neoliberal, monopólica, aliada del capital extranjero que era recibido con los brazos

abiertos, demostró ser la clase dirigente de un Estado neoliberal que representó sus intereses sin contrapesos (Íbid, 2016, p. 79), tapujos ni mediaciones generales. El Estado chileno se consolidó como el representante crudo de la burguesía chilena, en demérito, desde luego, de la participación social.

Las relaciones sociales que primaron fueron las controladas por esa burguesía, y esas relaciones de poder se convirtieron en relaciones constitutivas del Estado chileno, que lo condensaron y lo moldearon, con una sociedad excluida de la toma de decisiones, que a pesar de depositar esperanzas en la transición democrática, realmente quedó al margen gracias a las formas excluyentes de la dictadura que se sostuvieron durante los gobiernos de la Concertación.

Esas relaciones de poder en las que primó la burguesía de manera abierta y desnuda, devinieron reglas y esas reglas eran ya instituciones que permitieron sostener un mismo orden social con un nuevo consenso pactado desde arriba, de manera gubernamental, sin la sociedad, pero que dotaba al bloque de poder de una nueva hegemonía respaldada por la legitimidad que otorgaba a la Concertación tener el adjetivo de democráticos, a pesar de que esa democracia fuera restringida y restrictiva de la participación social.

La hegemonía se mantuvo varios años, conseguida a través de gobernar desde la alianza dominante con pactos que apuntaban a la manutención del orden, con obvia ausencia de un proyecto transformador (Garretón, 2016). La justificación de la declinación del cambio del orden, se sustentaba fundamentalmente en el chantaje permanente que aseguraba que si no se gobernaba desde el centro político, entonces estaba latente la posibilidad de la vuelta de los militares (Ruiz, 2016), por eso, no había que generar descontento en los grupos dominantes, para lograr gobernabilidad y la consecución de derechos, reducción de la pobreza y desarrollo económico sin grandes cambios en la agenda política y de manera paulatina.

Con el arribo de Ricardo Lagos al gobierno, el Partido Socialista volvía a tener presidente, sin embargo, a pesar de levantar esperanzas de cambio en muchos sectores de la sociedad, el PS ya no era el mismo que el del gobierno de Allende, pues había vivido una conversión y vaciamiento de su proyecto transformador, ello en el contexto de su alianza con la DC y su apuesta a la administración de las estructuras heredadas.

El gobierno de Lagos fue la confirmación de que la burguesía lejos de ceñirse al poder político, realmente había desarrollado una novedosa capacidad de articular de manera transparente poder económico y poder político, interviniendo en la agenda, entrevistándose con el presidente, dándole órdenes al Ministro de Hacienda, planteándose como verdadero gobierno desde sus instituciones y vocerías como le CPC o la Sofofa.

Al mismo tiempo, Lagos se encontraba urgido por demostrar que el Partido Socialista no era más aquel partido que se confrontaba con la burguesía y optó por una línea de redoblamiento de la alianza dominante con los grupos económicos más poderosos, tal como da cuenta su alianza (Ver apartado II) con Juan Claro, quien a su vez representaba la línea de los empresarios más flexible, pragmática y negociadora con el gobierno. Además de sus múltiples encuentros con los grupos Luksic, Angelini y Matte, entre los que destaca el evento en el Centro de Estudios Políticos de Eliodoro Matte; también se encuentra su disposición de colocar al pinochetista Vittorio Corbo en la dirección del Banco Central, y la colocación de tres robustos representantes del Grupo Luksic: Nicolás Eyzaguirre en el Ministerio de Hacienda (2000-2006); Jaime Estévez en los Ministerios de Obras Públicas y de Transportes (2005-2006); y José de Gregorio en los Ministerios de Economía (2000-2001), Minería (2000-2001) y Energía (2000-2001).

De igual modo actuó Michelle Bachelet, durante sus gobiernos, colocando a 8 representantes de grupos económicos como ministros de estado, entre ellos destacan el mismo Eyzaguirre como Ministro de educación (2014-2015), y Ministro secretario general de la presidencia (2015); Alberto Arenas, -representante de Luksic-, como Ministro de Hacienda (2014-2016) y Director de Presupuestos (2006-2010); Aurora Williams –representante de Luksic- como Ministra de Minería (2014-2015); Vivianne Blanlot –representante de Luksic y Matte-, como Ministra de defensa (2006-2007); y Máximo Pacheco Matte –representante de Angelini y Luksic-, como Ministro de Energía (2014-2016).

El grupo Luksic resultó el mejor representado en el gobierno de Bachelet y eso no es casual, al encontrar que fue el grupo que más aportó para la segunda campaña, “donando” alrededor de USD 63, 029 millones.

Como pudo observarse en los apartados anteriores, las alianzas de los gobiernos del Partido Socialista con los representantes más poderosos de la burguesía se mantuvieron firmes, consolidando el bloque neoliberal de poder, es decir, adoptando el proyecto neoliberal bajo un discurso de supuesto centro político. Se mantuvo, pues, la directriz neoliberal del Estado, renunciando abiertamente a la posibilidad transformadora.

Los gobiernos de la Concertación, resaltando los gobiernos del Partido Socialista demostraron que el Estado neoliberal chileno es un estado dominado por la burguesía, por ello no importa el color del partido, mientras se sometan a sus lógicas del proyecto neoliberal, reproduzcan el patrón exportador de producción especializada y sostengan como acción política el recubrimiento de legitimidad a la hegemonía de la burguesía dentro del bloque de poder.

En ese sentido, aunque Michelle Bachelet haya ganado las elecciones de 2014 con un discurso en pro de los movimientos sociales y retomando sus principales demandas, -como lo fue su propuesta de cambio de constitución o lograr educación gratuita-, esta tuvo que ceñirse a las reglas del juego, demostrando que tomó esas demandas solo como meras banderas vacías, sin respaldarlas de un proyecto transformador.

La única forma de conseguir un cambio, implicaría realizar una alianza profunda y de largo aliento con los movimientos y organizaciones sociales, sin embargo, eso resulta inviable frente a una política de exclusión de la sociedad que ha primado en todos los gobiernos concertacionistas desde 1990 (Ruiz, 2016). Por tanto, el PS se encuentra subordinado a su propia posición neoliberal y de alianza de representación con la burguesía chilena. Eso explicaría el por qué Bachelet optó por renunciar a la propuesta de convocar a la conformación de una nueva constitución que reemplazara a la constitución pinochetista, y por qué optó por redoblar el carácter subsidiario del Estado, inyectando recursos directos a los bancos, para otorgar “gratuidad” a través de créditos y del sostenimiento educativo a la educación privada y del negocio bancario. No es de extrañarse que durante su gobierno, las movilizaciones estudiantiles no decrecieran y mantuvieran una posición crítica y disconforme.

Por otro lado, la adherencia del Partido Comunista a la Concertación –hecho que marca el cambio de nombre de Concertación de Partidos por la Democracia a Nueva Mayoría- no cambia en lo más mínimo la orientación neoliberal del gobierno, sino que otorga otro nivel de legitimidad al bloque de poder, sin conseguir darle un direccionamiento alternativo a la política gubernamental. Al contrario, al sumarse al juego de acuerdos y pactos elitarios, el PC se alejó cada vez más de su capacidad de representación social. Tan solo durante el año 2015, las Juventudes Comunistas quedaron relegadas de todas las presidencias de federaciones de las universidades públicas, a pesar de mantener su presencia política.

El fracaso del PC en su alianza dentro del grupo gobernante también comprueba la nula autonomía del Estado frente a la burguesía, desnudando su debilidad y subordinación, al no existir la posibilidad de articular un proyecto gubernamental de alternativo al poderío de los grupos económicos, además de dejar entrever que es imposible generar una fuerza política interna, dentro del gobierno, con la cual poder empatar en una correlación de fuerzas con la burguesía chilena.

Hoy día desde la sociedad comienzan a emerger nuevos actores colectivos que buscan consolidarse y hacerse valer como partícipes de la política nacional. Ese nuevo ciclo empezó a gestarse desde la revuelta de los estudiantes secundarios en 2006, dando paso al movimiento de los mineros subcontratados de la industria del cobre, la movilización estudiantil de 2011 y una serie de protestas que han devenido un verdadero abanico de variopintos movimientos populares.

Han surgido protestas en contra de la centralización política que recluye a las regiones desde la política santiaguina, movimientos en defensa del agua, movimientos feministas en todo el territorio nacional, protestas de pesqueros, y lo más reciente y sorprendente ha sido la protesta contra el sostenimiento del esquema de privatización y utilización de las Agencias de los Fondos de Pensiones (AFPs) que han logrado una convocatoria nodal sumando a millones de personas a lo largo de las principales ciudades del país y trastocando la columna vertebral del modelo, pues han sido las AFPs el instrumento por medio del cual los grupos económicos han logrado capitalizarse y expandirse al mercado regional latinoamericano (Ruiz, 2015) (Miranda & Rodríguez, Eduardo, 2002), colocando los

fondos de los pensionados en negocios de alto riesgo y provocando graves casos de defraudación con el dinero de los jubilados.

La legitimidad del orden social neoliberal cada vez se encuentra más cuestionada por los movimientos sociales y eso ha demostrado que la legitimidad institucional no puede retejerse desde la misma institucionalidad, no desde ahí. Por eso no es extraño la incompreensión de los grupos gobernantes frente a fenómenos como el surgimiento de un nuevo Frente Amplio que agrupa organizaciones sociales que no provienen de los partidos políticos tradicionales, sino de nuevas fuerzas sociales que demandan construir una nueva relación Estado-Sociedad, colocando figuras novedosas en candidaturas a espacios de representación política, como fue el caso de la periodista Beatriz Sánchez, candidata feminista y externa al sistema de partidos.

Cabe mencionar que Sánchez quedó tan solo a 3 puntos de Alejandro Guillier, candidato de la Nueva Mayoría. La candidatura de Beatriz Sánchez levantó enormes gestos de simpatía a lo largo del país de parte del mismo electorado que solía votar por los partidos de la concertación. La incapacidad de Guillier y de la Nueva Mayoría de entender cuáles son las nuevas demandas de la sociedad, que sí logró canalizar el Frente Amplio, les generó la imposibilidad de atraer esos votos en la segunda vuelta frente al ultraderechista Sebastián Piñera. La derrota estrepitosa de la Nueva Mayoría es también la evidencia del fracaso de lograr legitimidad y consenso social luego de largos años de la exclusión del panorama político, sufrido por la sociedad chilena.

El Frente Amplio, a pesar de no conseguir colocar a su candidata presidencial en segunda vuelta, sí logró concitar un apoyo serio a su proyecto, colocando distintos diputados, concejales y un senador en los espacios de representación, además de que ya había logrado ganar la alcaldía de la ciudad de Valparaíso con Jorge Sharp.

Sin embargo, ese éxito parcial e inicial del Frente Amplio apenas abre la pregunta de si la efervescencia y descontento social será capaz de consolidar un nuevo actor social durante el gobierno retrógrada de Piñera.

Además, sin duda, queda pendiente ver si las fuerzas sociales son capaces de construir una nueva alianza lo suficientemente fuerte como para orillar al bloque de poder a reconfigurarse, es decir, falta ver cuál será la relación que se establezca

entre este nuevo actor político y la burguesía, pues aunque minada la legitimidad de los gobiernos concertacionistas –el gran aliado de la burguesía flexible-, esa burguesía sigue siendo perfectamente capaz de sostenerse como el actor más importante en la vida social chilena, dominando aun importantes sentidos comunes de amplios sectores sociales, pues aunque la victoria de Piñera tenga que ver en parte con la crisis de la Nueva Mayoría, lo cierto es que grandes capas sociales abrazan la visión cultural neoliberal de competencia encarnizada, individualización en los servicios sociales y una fuertísima aspiración de poder de consumo y ascenso social vía el éxito capitalista.

Crisis del bloque de poder, crisis de hegemonía y ruptura de la relación Estado-Sociedad en Chile

Durante marzo de 2015, algunas encuestas dieron a conocer la más baja aprobación del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, rondando entre un 29% y un 31%¹⁵ en índice de desaprobación, alcanzando la cifra más baja durante su gestión, lo que provocó inmediatamente una lluvia de explicaciones que señalaron al fenómeno como una crisis de confianza en la institucionalidad (Barozet, 2016) (DelaMaza, 2016).

Pero cuando se habla de que hay una crisis de confiabilidad hacia el gobierno de la Nueva Mayoría o de falta de confianza en las instituciones, suele pensarse como un elemento meramente político, meramente institucional o meramente gubernamental, que en ese sentido, podría ser solucionable a partir del impulso de políticas públicas, reformas y acciones institucionales del gobierno para recuperar la confianza de la ciudadanía. En ese sentido bastaría con un cambio de partido y de dirección del gobierno, que permitiesen la aplicación de medidas para mejorar la gobernanza y la gobernabilidad¹⁶. Muchos autores de inmediato realizaron

¹⁵ Encuesta de Evaluación de Gestión de Gobierno, 2015 [http://www.adimark.cl/es/estudios/documentos/13_eval%20gobierno%20mar_2015.pdf]

¹⁶ Tal fue el caso de la Comisión Engel que puso en marcha el gobierno de Michelle Bachelet, en la que se reunió a un conjunto de expertos que realizaron una lista de recomendaciones para una

balances, elogios y críticas que se restringían a proporcionar recomendaciones y perspectivas de cómo evitar la colusión entre poder político y poder económico, reduciendo el problema a un problema de partidos (Fuentes, 2016) o a un problema que incitaba a buscar formas de separación entre política y economía (Barozet, 2016) (DelaMaza, 2016).

Dando continuidad a los problemas metodológicos de raíz que sostiene hoy día la ciencia política, los análisis actuales olvidan u obvian que el problema atiende a cuestiones estructurales y no meramente institucionales y tiene que ver con que es imposible realizar por medio de acciones gubernamentales una separación de lo económico y de lo político, siendo que el poder que se configura desde ambas esferas constituye cada una de las relaciones sociales que dan vida al Estado neoliberal chileno hoy día, pero que sobretodo, sostienen la alianza dominante del bloque de poder que da dirección político-social a todo el país.

Olvidaron que la antípoda no está instalada entre Estado y Mercado –como tanto pregonó el neoliberalismo (Harvey, 2005)-, sino entre Mercado y Democracia (Borón, 2012), ya que los grupos que dominan con su poderío al mercado, son los mismos que dominan en el Estado (Ruiz, 2016) a través del bloque de poder y de ciertas formas de relaciones sociales en las que la burguesía participó como actor constitutivo.

Lo que desnudaron los movimientos sociales emergentes en los últimos, -con particular énfasis el movimiento estudiantil surgido desde 2006 y las recientes movilizaciones contra las AFP- a la par del descontento y las protestas frente a los casos de corrupción¹⁷, tiene que ver más bien con un cuestionamiento a la hegemonía del bloque dominante.

Chile se encuentra en un proceso de agotamiento del consenso que instauró la concertación por medio de su pacto realizado con la misma burguesía que emergió bajo la protección de la dictadura. Ese consenso no se ve en crisis a partir de

reforma de partidos, en la que se evitara el financiamiento de empresas privadas en las campañas electorales (Fuentes, 2016).

¹⁷ Es así como los casos Penta, Soquimich, la Ley de Pesca, la colusión del papel confort, el caso Caval, el caso Peñailillo, desnudaron una profunda alianza entre burguesía y todos los partidos políticos, en la que se vieron implicados todos los partidos políticos –con especial mención de la UDI, RN, la DC, el PS- y los grupos económicos más poderosos conformados al alero de la dictadura y sostenidos por los gobiernos de la concertación. Para más información y detalles sobre los casos de corrupción ver (Matamala, 2015); (Mönckerberg, 2015) ; (Fazio, 2016)

tensiones entre burguesía y gobierno, todo lo contrario, los casos de corrupción (que no son nuevos, sino nueva es su explicitación), muestran que burguesía y gobierno asumieron un pacto establecido durante más de 25 años y que permitió la supervivencia del modelo socioeconómico heredado por la dictadura. El consenso más bien se ve en crisis y cuestionamiento a partir de la protesta de la sociedad que es la misma que fue excluida del pacto concertacionista durante los pasados 25 años. Los movimientos sociales, -es importante insistir- han sido los actores que han develado la corrupción de la alianza dominante, infundiendo no solo desconfianza hacia el gobierno y sus instituciones, sino un rechazo frente al consenso que hegemónico.

Se hizo visible que las clases dominantes dominan a través de hacer de sus intereses el eje rector del Estado chileno, es decir, que la burguesía se conformó como el actor rector de toda la sociedad, dominando toda la agenda política a través del apoyo recibido por los gobiernos concertacionistas. Eso implica que se demostró que los gobiernos post-dictadura terminaron siendo aliados clave de la burguesía construida al calor del estado pinochetista.

Con su hegemonía cuestionada se ha abierto un nuevo momento en el que el consenso reinante ha ido evidenciando las interminables contradicciones del pacto concertacionista.

La falta de credibilidad sí representa un peligro, pero ante la institucionalidad nacida de un régimen ilegítimo que se instauró por la fuerza y a través de un golpe de Estado. Por ello, es importante decir que la hegemonía impuesta es una hegemonía nacida de la corrupción de la misma institucionalidad que hoy se encuentra asumida por el gobierno en turno. La corrupción nació desde el momento en que se asumió por bueno realizar un pacto con la dictadura (entre 1988 y 1990) pero también al momento de pactar y aliarse de manera subordinada con la burguesía hija de la dictadura (desde 1990 hasta la fecha).

Ese consenso se encuentra fuertemente cuestionado y difícilmente se restablecerá por vías institucionales (que se sustentan en una institucionalidad cuestionada y corrompida) y ahora se abre la posibilidad de observar qué papel jugará la sociedad en la propuesta de una nueva sociedad.

En ese sentido, la clase dominante encontró un respiro en la victoria de Sebastián Piñera, sin embargo, aún falta ver qué sucede con la alianza que había sostenido con los gobiernos concertacionistas –fuertemente desvirtuados y con poca credibilidad frente a la sociedad- y con la emergencia de nuevos actores sociales que pugnan por un proyecto refundacional.

En ese sentido, el divorcio entre Estado y sociedad al que alude Manuel Antonio Garretón (Garretón, 2016), se funda en un divorcio entre un Estado dominado por una burguesía con enorme poder económico pero sin suficiente consenso social y una sociedad que no ha sido contemplada en la toma de decisiones sobre su propio futuro desde 1973 y que además se compone de una estructura fuertemente individualizada, atomizada y sin espacios que den orgánica a un nuevo actor social unificado.

Por lo tanto, la propuesta de refundar la relación Estado-Sociedad a partir de un llamamiento a establecer una nueva constitución (Íbid, 2016) resulta a todas luces insuficiente, pues el país se encuentra en un momento en el que, como se dijo, a pesar de que los poderes económicos se encuentran cuestionados y la coalición partidaria que dotó de consenso al estado neoliberal se encuentra decaída y sin credibilidad, la sociedad aun no logra establecerse como sujeto con suficiente fuerza política como para poder plantearse como el actor fundamental en la construcción del nuevo panorama político.

La cuestión entonces, tiene que ver con cómo la sociedad consigue irrumpir de nuevo en la política y también observar el cómo la clase dominante intentará reconstruir su hegemonía y a través de qué métodos, formas y actores políticos lo hace.

Capítulo 3 El caso brasileño: adaptaciones del neoliberalismo durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores

El neoliberalismo sostenido a través de conciliación de clases

Brasil ha figurado como un ejemplo paradigmático de gobiernos progresistas en América Latina que han adoptado el neoliberalismo por medio de una política de conciliación de clases. A pesar de que brevemente se sostuvo la vieja ilusión desarrollista de llevar a cabo un proyecto que colocara a Brasil a un estadio de supuesta modernidad al nivel de potencia económica a través del fortalecimiento del mercado interno, lo que realmente sucedió fue que los gobiernos del PT terminaron plegándose a modelos de ajuste (Pinho de Carvalho & Costa, 2015), propios de la política neoliberal, ciñéndose a los requerimientos de los centros mundiales, a través del tipo especializado (y exigido) de producción y exportación de mercancías, políticas de austeridad y medidas anticíclicas.

El proyecto neodesarrollista en Brasil se encuentra agotado y hoy se sostiene hegemónico un proyecto ultra(neo)liberal llegado vía golpe de estado parlamentario. Durante el proceso de golpe primaron los intereses de los nichos neoliberales de los grupos económicos por encima del proyecto neodesarrollista: a largo plazo, la burguesía optó por no apoyar/tolerar más el proyecto del PT, pues le dejó de ser funcional, por tanto, es importante mencionar que la derrota de la ilusión desarrollista parte de la contradicción interna que implicó intentar sostener alianzas con todos los sectores, a modo de un Estado neutro o rector, que más bien sostenía una política de conciliación de clases.

El Estado brasileño fue un campo de simbiosis y mezcla entre un proyecto neodesarrollista y otro neoliberal, que de manera contradictoria pervivieron al mismo tiempo en los mismos espacios de poder y apoyados por el mismo gobierno petista. El neoliberalismo se adaptó bajo el alero de los gobiernos del PT al mismo tiempo que este intentaba impulsar un proyecto desarrollista, pues era sostenido por los

intereses de fracciones mayormente cercanas al capital trasnacional y al coaligado con este, mientras que el neodesarrollismo fue impulsado desde el gobierno en alianza con la burguesía interna (Boito Jr, *Governos Lula: a nova burguesia nacional no poder*, 2012), intentando colocar a grandes empresas brasileñas en los principales rankings de competencia de nivel mundial. Grupos empresariales como JBS, EBX OGX, AB Inbev, BRF y Votorantim fueron catapultados por los gobiernos del PT a través del Banco Nacional de Desarrollo para que pudieran aliarse con grandes capitales estadounidenses y conformar enormes corporaciones regionales y mundiales.

Al mismo tiempo que se hacía una alianza con la burguesía interna se intentó realizar una política de distribución de la renta a través de programas sociales asistencialistas como Bolsa Família o Minha Casa Minha Vida, que permitiesen ganar la adhesión de camadas populares y pauperizadas. Fue así como a través del dinero distribuido por esos programas, el gobierno consiguió aumentar los índices de consumo y traspasar umbrales de extrema marginalidad.

Tenemos entonces que el PT intentó conciliar los intereses de la burguesía y los de las clases trabajadoras populares pauperizadas. Esa conciliación de clases, cabe decir, implicó profundas contradicciones que fueron tensionándose y desgastándose hasta su fracaso y agotamiento actual, por ese motivo, es fundamental realizar un balance de ese intento de conciliación para entender el papel que jugaron los gobiernos del PT en aquel proceso de adopción del neoliberalismo.

De este modo aclaramos que a lo largo de este trabajo intentaremos comprender el motivo por el cual aquel partido de izquierda realizó una profunda conversión hasta amparar y resguardar los nichos de poder neoliberal dominante. Dicho de otro modo, el neoliberalismo fue abrazado por el PT debido a la política de empoderamiento que proporcionó al gran empresariado y su iniciativa privada, mismos que gracias a eso, lograron sostener su hegemonía política, económica y cultural, manteniendo su rol directriz del Estado. La conversión, el viraje que permitió que el PT adaptara e impulsara a la iniciativa privada tiene que ver con el afianzamiento de alianzas de representación –propias del proyecto petista de conciliación de clases- entre el PT y ese gran empresariado dominante que dieron

vida a un nuevo frente dentro del bloque de poder. A lo largo de esta tesis se comprobarán las alianzas entre ambos y se desarrollarán algunos modos legales e ilegales en sobre como esto sucedió.

I. Breve balance histórico de los gobiernos del PT en Brasil

Para entender el por qué el PT vivió una conversión que permitió adoptar al neoliberalismo, representar a los grupos dominantes que lo abanderaron y llevar al extremo esas tensiones, es fundamental realizar un balance histórico de sus gobiernos. Sin embargo, dicha tarea corre un riesgo importante debido a que nos encontramos en un momento de gran intensidad del debate sobre la cuestión brasileira y eso nos conduce a subrayar que cualquier balance se mantiene abierto a nuevas críticas y reformulaciones.

Para comenzar y para utilidad del presente trabajo, se expondrán brevemente 5 períodos en la historia del PT, que se dividen entre su fundación desde los movimientos sociales hasta los cuatro gobiernos tanto del presidente Luíz Inácio Lula Da Silva como de la presidenta Dilma Rousseff, los cuales se ordenaron de la siguiente manera:

1. *El PT de izquierda y de los movimientos sociales (1989-2001)*
2. Primer gobierno Lula (2002-2006)
3. Segundo gobierno Lula (2007-2010)
4. Primer gobierno Dilma (2011-2014)
5. Segundo gobierno Dilma (2015-2016)

Quedaría pendiente realizar un balance del PT en crisis durante el período del golpe de estado y la instauración del gobierno de facto, momento durante el cual, el partido ha tenido que volver a métodos de movilización social, pero sin realizar las necesarias autocríticas que podrían llevar a una reflexión más profunda sobre su actuar.

Primer período: El PT de izquierda y de los movimientos sociales (1989-2001)

Para empezar, es necesario aclarar que el origen del Partido de los Trabajadores se dio al calor de diversas luchas de izquierda en abierta confrontación con la dictadura civil-militar brasileña instaurada a través de un golpe de estado en 1964. Debido a la importante industrialización de del corredor ABC en la ciudad de São Paulo, fue creciendo la cantidad de obreros, mismos que lograron aglutinarse en distintas organizaciones sindicales que más tarde dieron vida a la Central Única de Trabajadores (CUT), desde la cual se sostuvo una fuerte resistencia contra la dictadura (Carranza, 2007, págs. 53-54).

Es en ese contexto y como necesidad de participar en la disputa política más allá de la lucha gremial que en 1979 se llevó a cabo la fundación del Partido de los Trabalhadores (PT). Con una fuerte presencia en el mundo sindical y agrupando a un sinnúmero de corrientes revolucionarias y de izquierda, el PT se posicionó como un partido que abanderaba la lucha de clases y que lucharía por la conformación de un orden socialista en el Brasil (López Castellanos, 2001).

Poco a poco, el PT en ese sentido, se convirtió en un actor clave de la resistencia obrero-popular que reivindicaba demandas sectoriales y que al mismo tiempo incidía en el debate nacional, impulsando y sumándose a iniciativas democratizantes, tales como lo fue la campaña de “Derechas ya”, que exigía la realización de elecciones directas y la transición a un régimen democrático (Carranza, *ibidem.*: 52-62).

Fue durante ese período que el partido se conformó como principal foco de oposición política a la dictadura, llegando a presentar a su principal dirigente, el tornero Luíz Inácio Lula Da Silva como candidato presidencial durante las elecciones de 1989. En aquella ocasión, Lula se vio derrotado por Fernando Collor de Mello, debido a una fuerte intervención de la burguesía brasileira a través de medios de comunicación como la Red O Globo, quienes desde luego se posicionaron en su contra.

Más tarde, el propio Lula diría que su discurso en aquella primera contienda era radical y que por esa razón los sectores más conservadores se le opusieron, además de que estos lograron tener mayor arraigo con las camadas más pobres.

Sin embargo, esa elección solo significó el comienzo, pues el líder del PT se presentó otras dos ocasiones a las elecciones presidenciales, frente a Fernando Henrique Cardoso en las que de nuevo fue derrotado, mostrando una mayor moderación gradual y alejándose poco a poco de la política confrontativa de clase. Por su parte, el período de los dos gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, se caracterizaron por la consolidación del modelo neoliberal a partir de una serie de medidas privatizadoras e incentivadoras de la concentración de capital a través de la clásica liberalización de la economía. Fue durante sus mandatos que se instaló el Plan Brady (1998), el cual buscó incrementar la deuda externa por medio de préstamos solicitados al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial (BM), mismos que ascendieron a 41, 5 mil millones de dólares en 2000. Para 2001 se solicitó otro préstamo de 15 mil millones de dólares y para 2002 se pidieron 30 mil millones de dólares (Mattoso, 2013).

Además, durante el mismo período existió una pérdida del 12,5% de puestos formales de empleo (Ibíd, p. 53) y la puesta en marcha del Plan Nacional de Desestatización (PND) por medio de la Ley 8.031 de 1991, mismo que logró privatizar 69 empresas estatales del sector eléctrico, petroquímico, mineral, portuario, financiero, informático y ferroviario. Por otro lado, las privatizaciones alcanzaron también a los bancos estatales, como fue el caso del de São Paulo, Rio de Janeiro, Rondira y Aliguas (Ibíd, p. 64).

En ese contexto de andanadas contra la clase trabajadora el PT se posicionó en el debate nacional como opción opuesta a la agenda neoliberal hegemónica, lo cual lo llevó a realizar una campaña con un discurso antineoliberal, pero que al mismo tiempo buscaba atraer la simpatía de las clases dominantes. Esa posición, que contrastaba con su campaña radical de 1989, lo llevó a publicar en el año de 2002 la “Carta al pueblo brasileiro”, en la cual explicitaba que no realizaría ninguna acción contra los grupos económicos dominantes, manteniendo una línea de continuidad con los gobiernos anteriores, en términos de política fiscal, política cambiaria, etc. Este hecho resulta altamente significativo porque marca un momento de ruptura respecto a la primera etapa del PT, llevando al máximo el contraste entre el Lula radical de la campaña de 1989 y el Lula de 2002 moderado, conciliador y dispuesto a dar todo tipo de concesiones al gran capital. Al mismo tiempo, esa carta anunciaba

ya desde ese momento el inicio de una segunda etapa del PT que pondría en práctica ahora desde el gobierno, la política de conciliación de clases.

Segundo período: Primer gobierno Lula (2002-2006)

Cuando Luiz Inácio Lula da Silva asumió como presidente de Brasil en 2003 todas las esperanzas se volcaron sobre su figura y se pensó que se estaba inaugurando un momento de profundas transformaciones que desplazarían a la hegemonía neoliberal. Con su origen humilde y de sindicalista obrero del ABC paulista, sin título profesional, Lula logró canalizar el descontento popular contra el gobierno neoliberal de Fernando Henrique Cardoso y captar el voto mayoritario, proveniente de diversos estratos, pero sobretodo de las clases medias (Singer, 2012).

Armando un frente pluriclasista, la segunda etapa del PT se caracterizó por mantener un perfil bajo, sin realizar ninguna medida transformadora del modelo heredado y dando muestras de continuidad con su Reforma de Pensiones¹⁸, con medidas contracíclicas y políticas macroeconómicas de ajuste, es decir, con iniciativas de corte neoliberal.

Además, desde ese momento ya se evidenciaban las alianzas que se habían tejido con grupos económicos, pues basta tan solo voltear a mirar las recolecciones de donaciones privadas en las campañas presidenciales para entender el fuerte compromiso que adquiriría Lula. Mientras que José Serra, el abierto candidato de la derecha consiguió ingresos de R\$ 28 millones 540 mil, Lula recibía de ingresos R\$ 39 millones 460 mil (Maringoni, 2017, pág. 39). Sin embargo, ello no implicó una merma en la popularidad del líder petista, pues logró concitar enormes muestras de apoyo a través de sus programas sociales. Sin duda alguna, ahí comenzó a fraguarse el fenómeno de reconocimiento y aceptación social de Lula, lo que lo llevaría a ganar fácilmente las elecciones que le permitieron sostenerse en el gobierno por segunda ocasión.

¹⁸ Este fue un importante momento de división al interior de las filas del PT, pues militantes inconformes denunciaron que la reforma previsional fortalecía el modelo de pensiones de mercado y no permitía dirigirse a un modelo solidario de pensiones. Más adelante, varios de esos militantes renunciaron al PT y llamaron a conformar otras iniciativas políticas como lo fue el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), dando lugar a la primer gran ruptura al interior del partido.

Tercer período: Segundo gobierno Lula (2007-2010)

Fue la tercera etapa la que consolidó la nueva perspectiva del gobierno del PT y de la política lulista. Esta tercera etapa se dio por inaugurada en el segundo gobierno de Luíz Inácio Lula Da Silva, después de que durante 2006 este realizara una campaña que sostuvo grandes índices de adhesión y que contó con 58 millones 295 mil de votos, con los cuales logró imponerse frente al candidato de la derecha, Geraldo Alckim, quien obtuvo 37 millones 543 mil votos (Singer, 2012, pág. 51).

La tercera etapa del PT se caracterizó por la consolidación del proyecto neodesarrollista, como una propuesta del gobierno de Lula para superar el neoliberalismo y como un sello de gobierno propio.

Con la designación del heterodoxo Guido Mantega como Ministro de Hacienda se dio inicio a un intenso período de auge del proyecto neodesarrollista, que contempló alta inversión del Estado en la capitalización de empresas sobretodo de aquellos consorcios nacionales con tendencia a expandirse.

El neodesarrollismo fue un intento por potenciar desde el Estado el “desarrollo” o “modernización” de Brasil para conseguir sacarlo del atraso, tal como sucedió con los intentos del siglo XX, impulsados por la CEPAL. En esta ocasión, el proyecto de Lula se fundamentó en buscar ampliar la industrialización, incrementar el peso de Brasil en la economía regional y mundial y aplicar la rectoría estatal en la actividad económica.

Fue desde el Estado que se ordenó al BNDES otorgar grandes créditos a grandes empresas, permitiéndoles expandirse y conquistar mercados de otras regiones que antes nunca hubieran logrado alcanzar. Durante los gobiernos del PT, el modelo neodesarrollista mostró alto crecimiento económico. De 2001 a 2002 se incrementó la tasa de cambio del Real frente al Dólar de 2,32 R a 3,53R (Barbosa & Pereira de Souza, 2010, págs. 73-80), también, se alcanzaron cifras importantes en términos de exportaciones, llegando a recibir 118 mil millones de dólares durante 2005, contrastando con los 60 mil millones de dólares de 2002. Se pagaron 23,3 mil millones de dólares de deuda externa al FMI durante 2005. En total se alcanzó un

crecimiento del Producto Interno Bruto que pasó del 3,2% durante el período 2003-2005 al 5,1% del período de 2006-2008 (Ibíd.: 81-91).

Es durante ese período también que se afianzó la aplicación de políticas sociales de distribución de la renta. Algunos de los programas sociales más importantes iniciados por Lula (y continuados por Dilma) como Bolsa Familia buscaron acrecentar su alianza con las camadas más pobres de la población, otorgando dinero de manera directa y permitiendo que las personas accedieran a un mercado de consumo del cual antes se encontraban exiliados. Fue así como se incrementó el salario mínimo que era de R\$ 240 durante 2003 a R\$ 300 en 2005. Al mismo tiempo se impulsó la transferencia de apoyos económicos a personas en pobreza extrema, llegando a beneficiar a cerca de 8,7 millones de familias brasileñas durante 2005 (Ibidem, 2010: 75-80)

Como puede observarse este fue un período de algidez de la política de conciliación de clases, que logró generar una alianza con la burguesía al mismo tiempo que impulsaba programas sociales dirigidos a las camadas populares, a pesar de que eran las primeras las que recibían los mayores beneficios de manera sobrecogedora. Tal solo en 2008, el BNDES otorgó el 76% de sus créditos a las grandes empresas, mientras que a las pequeñas empresas le creditó alrededor de 5.7% y a las personas físicas 4.7%¹⁹.

Esa doble jugada permitió a Lula sortear la crisis política que causó el escándalo del Mensalão, con el cual se descubrió un esquema de propinas clandestinas que otorgaban dirigentes del PT y funcionarios del gobierno a parlamentarios para conseguir mayorías y así permitir margen de gobernabilidad al presidente. Sin embargo, el Mensalão tuvo pocas repercusiones gracias a la política de “mantener contentos a todos” de Lula y el gobierno pudo salir avante (Valente, 2017), llegando incluso a concluir el período presidencial con los índices de aprobación más grandes de toda la historia contemporánea de Brasil, con más del 80% de aprobación.

Este fue el momento de mayor auge de la política conciliatoria lulista, que además, consiguió concluir sin llevar a cabo reformas transformadoras, como lo hubiese sido una reforma tributaria y fiscal dirigida a cobrar deudas e incrementar impuestos a

¹⁹[<https://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20100818/quem-entende-bndes/4588.shtml>]

los grandes grupos económicos; una reforma Política que incentivase al empoderamiento social o una reforma de telecomunicaciones que pusiera fin al monopolio incuestionable de la Red Globo.

Finalmente, otra cuestión que evidenció ese tercer período fue la conformación de un fenómeno social que se ha dado por nombrar “Lulismo”, elemento que intenta mostrar que existe una diferenciación entre la conformación institucional del PT y la figura de Lula (Singer,2012), generando un liderazgo cercano al fenómeno nacional-popular latinoamericano del siglo XX. De ese modo, según esta postura el “Lulismo” logró consolidar una forma de relacionarse con la población sin mediaciones y consolidando a su líder como supuesto personaje carismático que generó enorme empatía con la sociedad. Desde luego, este debate se encuentra abierto y no es nuestra intención ahondar en él.

Cuarto período: Primer gobierno Dilma (2011-2014)

La elección de Dilma Rousseff como presidenta tuvo como eje el asumir la continuidad del proyecto de Lula en el gobierno, asegurando que se mantendrían los programas sociales, pero sobretodo, se prometió sostener el modelo de conciliación de clases, cuestión que fue cierta, mientras duró, mientras existió base material para tener a todos los sectores más o menos conformes, sin tener que escoger entre uno de ellos.

Con un estilo de gobernar menos carismático, un tanto más osado y sin muchos adornos, Dilma asumió el reto de demostrar que el proyecto del PT podía traspasar un solo gobierno y que lograría institucionalizar un proceso de cambios, más allá de caudillismos. Su victoria llegó a ser leída por varios sectores como una afirmación de un proyecto transformador, que incluso llevó a ciertos intelectuales a hablar de un período “posneoliberal” en Brasil (Sader, 2008). Lo cierto es que realmente esto reafirmó la idea de que existía una verdadera posibilidad para conciliar clases a largo plazo y empujar un proyecto neodesarrollista que colocase a Brasil en el desarrollo pleno. De hecho, fue durante este gobierno el verdadero momento de experimentación del neodesarrollismo.

Iniciando su gobierno, Dilma nombró al heterodoxo Guido Mantega, claro expositor del neodesarrollismo, junto con quien comenzó una suerte de confrontación con los bancos al exigirles reducir sus tasas de impuestos y aumentar el volumen de crédito debido a la enorme cantidad de lucro que ejercían. Al mismo tiempo impulsó la reducción del cobro de luz, la reducción de impuestos en los créditos del BNDES, la desvalorización del real, la protección de la producción nacional a través del aumento de impuestos y un enorme programa de inversión de infraestructura (Singer, 2015, págs. 42-49).

Sin embargo, el avance del neodesarrollismo fue puesto en entredicho, durante las protestas de 2013. El conflicto se originó a partir de una histórica reivindicación contra los altos precios del transporte, que llevó al Movimiento Pase Libre (MPL) a exigir que se permitiese el pase diferenciado. A las manifestaciones se sumaron pronto los sectores estudiantiles y más tarde otros sectores populares. Los motivos resultaron ser bastante heterogéneos y poco unificados, pero coincidían en que los gobiernos del PT habían fallado en atender más allá de programas asistenciales, problemas de seguridad social universal, tales como la calidad de la educación pública, los servicios de salud y las deficiencias del transporte público, a pesar de que el gobierno sí atendía de manera inmediata a los intereses de la gran burguesía, construyendo carreteras, infraestructura, y como corolario, estadios de fútbol para el mundial, que resultaron ser elefantes blancos de cemento.

Frente a las demandas de un movimiento heterogéneo, el gobierno no alcanzó a entender el mapa político, no supo cómo responder al descontento, pues había cambiado al movimiento social por la gobernanza y la gobernabilidad, cambiando la calle por la administración pública, cambiando la participación por la corporativización.

Frente al pasmo del gobierno y frente a la desorganización de los movimientos ocurrió lo que nadie imaginaba: poco a poco la derecha con la dirección del Partido de la Social Democracia Brasileira (PSDB) y los canales mediáticos de Globo, logró insertarse al interior del movimiento social. La televisora invitaba a las personas todo el día a marchar contra la presidenta, colocando especialmente el tema de la corrupción en el centro. Fue así como las movilizaciones de 2013 se encontraron en disputa por organizaciones y sectores críticos al PT desde la izquierda con

sectores de la derecha. Esa disputa a la larga, se inclinó a favor de la derecha política. Podemos, entonces, hablar del inicio de una crisis política al interior del gobierno, quedando desnudas las contradicciones del modelo de conciliación de clases.

La derecha política, por su parte, logró acumular gracias a que durante marzo de 2014 se realizó el destape de los casos de corrupción de la operación “Lava Jato”, el cual consistía en una red de lavado de dinero entre actores políticos y funcionarios de la empresa Petrobras, en el cual se vieron implicados diversos funcionarios del lulismo (al igual que de la derecha), entre ellos algunos de los ministros, como Antonio Palocci, Fernando Bezerra Fernando Damata y Paulo Bernardo.

Todo esto, más otros casos de corrupción que fueron abriéndose más adelante, abonaron a la campaña mediática contra el PT, acusándolo de ser la imagen viva de la corrupción, lo cual agravó la situación de credibilidad y legitimidad de la presidenta y del modo de gobierno del PT.

Quinto período: Segundo gobierno Dilma M(2015-2016).

El último gobierno del PT comenzó en crisis. Frente a un momento de importante descrédito y poca legitimidad, la competencia entre Dilma y su principal contrincante del PSDB, Aécio Neves se tornó difícil, sin embargo, el PT realizó una campaña enfocada en el resalte de las políticas sociales efectuadas durante sus gobiernos y la alta posibilidad de perderlos con un gobierno francamente neoliberal como sería el de Neves.

Sin embargo, con el apoyo fundamental de los estados más pobres del nordeste (como Pernambuco, Bahía y Ceará), Dilma consolidó su victoria con 54.5 millones de votos, equivalentes al 51.6% de la votación, apenas 3.5 millones por encima de Neves²⁰. Así, la presidenta logró asumir a inicios del año 2015.

Poco tiempo transcurrió para que en abril de 2015 explotara nuevos casos de corrupción que decantaron en la Operación Zelotes, en la cual se evidenció el recibimiento de propinas de funcionarios para exentar pago de impuestos, mismos

²⁰[http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/10/141026_brasil_elecciones_2014_vivo_segunda_vue
lta_az]

que provenían de grandes empresas con las que el PT había mantenido importantes relaciones como Camargo Correa, Gerdau, Votorantim y Safra, entre otros.

Aunado a eso, la presidenta Rousseff comenzó una férrea política neoliberal de reducción de impuestos a las grandes empresas, reducción del gasto social, reducción de tarifas de energía, aplicando políticas de exoneraciones, además de colocar a distintos personajes del mundo corporativo empresarial y abiertamente neoliberal como Joaquim Levy, quien fuera nombrado como Ministro de Hacienda con un curriculum de impecable experiencia como director del Banco Mundial, después de haberse doctorado en la famosa y tecnócrata Universidad de Chicago. Gracias a Levy, se logró bloquear un aumento del gasto social de R\$80 millones, además de ir más lejos y llegar a un recorte del mismo en alrededor de R\$69 millones²¹. Esto, sin embargo no discordaba de la línea de política de reducción del gasto social de Dilma, pues durante el período de 2010-2014 se alcanzó un índice de -0.4, en inversión al gasto social, mientras que en 2011-2015 se alcanzó un índice de -6.2%, datos que contrastan duramente con el 25.4% del período 2006-2010 de Lula (Maringoni, 2017, pág. 47)

Es importante considerar que para ese entonces, la crisis económica brasileña se había ahondado debido a una caída en picada de las exportaciones de commodities a China, -principal socio comercial e importador de materias primas de Brasil- y un aumento en el precio de las mercancías primarias y de baja manufactura. De ese modo, el gobierno de Dilma se quedó sin bases materiales para sustentar su política de conciliación de clases, y en palabras de Gilberto Maringoni

“La crisis internacional de 2008 –enfrentada a un aumento del gasto público en un primer momento- y la caída de los precios internacionales de las commodities evidenciaron las fragilidades del modelo y acabaron por inviabilizar el pacto de clases establecido en 2002. Cuando esa situación externa cambió, el lulismo tuvo que hacer algo contrario a su modo de operar: explicitar elecciones. Eso fue fatal” (Íbid, p. 37).

Dilma no sólo se quedó sin bases materiales, sino también sociales, pues al tener que elegir entre dos lados de su política de conciliación, definitivamente apostó por

²¹ <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/12/levy-tinha-sido-escolhido-para-trazer-confianca-politica-economica.html>

el lado más neoliberal, descuidando a las bases populares del PT y llevando al gobierno con ese tipo de decisiones a un índice de aprobación de tal solo el 10%²². Con estas cuestiones y frente a una acumulación ilegítima de la derecha, en diciembre de 2015 comenzaron los momentos de traición y embates, provenientes inicialmente del presidente del parlamento, Eduardo Cunha del Partido Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), imputado en graves delitos de corrupción²³, quien impulsó una serie de acusaciones contra la presidenta por supuesta violación a la ley presupuestaria y a la ley de probidad, sin mostrar ningún tipo de evidencias hasta el momento. Más tarde, la traición terminó consolidándose con el apoyo del vicepresidente Michel Temer, también del PMDB, quien junto a Cunha se volcó a una alianza con el PSDB y con la gran burguesía brasileña. Así fue como ese proceso decantó en la destitución de la presidenta Rousseff el 17 de abril de 2016, con una votación en la Cámara de Diputados en la cual se aseguraron 357 votos a favor de la destitución, 137 en contra y 7 abstenciones, mientras que en el senado se votó el 12 de mayo de 2016 con 55 votos a favor de la destitución y 22 en contra. Con ese resultado se consolidó un Golpe de Estado parlamentario, se dio fin a los gobiernos del PT y se abrió un nuevo período de auge ultra(neo)liberal en Brasil, asumiendo de manera fáctica e ilegítima el otrora vicepresidente Michel Temer.

II. Neoliberalismo y neodesarrollismo: dos patas de un mismo patrón de reproducción de capital

Para autoproclamarse como gobiernos contrarios al neoliberalismo, los gobiernos del PT asumieron la caracterización de neodesarrollistas, sin embargo, lo cierto es que el neodesarrollismo resultó ser un planteo endeble que a pesar de confrontarse discursivamente con el neoliberalismo, ambos convivieron simbióticamente al alero de los gobiernos de Lula y Dilma, sin presentar grandes confrontaciones o disputas. Debido a dicha simbiosis, prima hoy día en Brasil, una confusión respecto a las

²² <http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/06/21/1030658>

²³ Eduardo Cunha se encuentra preso hoy día, después de haber sido apartado de su embistimiento de diputado en

diferencias y similitudes de ambos proyectos, y eso tiene que ver con la manera en la que se abordan ambos conceptos. De hecho, algunos autores han confundido al neoliberalismo y al neodesarrollismo bajo la categorización de patrones o de “desarrollo” o de “acumulación de capital” (Alves, 2013, pág. 134 y 167), pensando que ambos eran en sí mismos los caminos de la reproducción y acumulación del capital. Sin embargo, es importante discutir esta concepción que confunde el fin con el medio, para poder así generar una distinción real que permita entender mayormente el fenómeno.

Para saltar la confusión, es fundamental realizar una diferenciación entre los conceptos de “proyecto político-ideológico” y “patrón de reproducción de capital” (Osorio, 2016: pp. 221-222).

Un patrón de reproducción de capital es una forma específica, una ruta, un camino particular que el capital traza para conseguir su perpetuación, reproducción y cumplimiento de sus ciclos esenciales (Osorio, pp. 217-218) (Ver capítulo 1).

Ni el neoliberalismo, ni el neodesarrollismo se conforman como patrones de reproducción del capital, pues si bien ambos impulsan un camino que permite desarrollar cierta forma para que el capital se realice, ninguno de los dos es en sí mismo el camino. Tanto neoliberalismo como neodesarrollismo se conformaron más bien como los medios a través de los cuales se impulsó la construcción del patrón de reproducción de capital, eso quiere decir que tanto neoliberalismo como neodesarrollismo son el medio, no el fin, pues ninguno de los dos son espacios de realización del capital, aunque sí son proyectos que ponen en marcha políticas económicas que permiten el libre camino y existencia de un patrón de reproducción de capital.

Como ya se había mencionado en el Capítulo 1, para el sociólogo Jaime Osorio han existido tres patrones de reproducción de capital en la historia de América latina:

- d) El patrón agrominero-exportador, imperante en el siglo XIX y parte del siglo XX
- e) El patrón industrial que se desarrolla a mediados del siglo XX; y
- f) El patrón exportador de producción especializada iniciado desde los años 80 del siglo XX hasta la fecha (Osorio, 2016, p. 222).

Según el autor el patrón por el cual atraviesa el continente actualmente, es el patrón de exportación de producción especializada que se basa fundamentalmente en que los centros globales demandan determinados tipos de mercancías, especialmente materia prima, minerales y energéticos (obtenidos por medio del método extractivista), manufactura de nivel básico y mano de obra precarizada, que precisan sus economías para sostener sus propios patrones de reproducción de capital que implican mayor complejidad tecnológica y productiva.

A diferencia del patrón de reproducción de capital, un proyecto político-económico e ideológico se establece en función de horizontes históricos y utopías, es decir, dependiendo de a dónde se quiere llegar, dependiendo del tipo de sociedad que idealmente se plantea como una construcción de lo deseado, es que se establece una proyección de realidad. Un proyecto implica la acción presente –es decir política- para cambiar la realidad histórica heredada del pasado y convertirla en algo nuevo en el futuro (Zemelman, 2013). Esa construcción de futuro parte de lo deseado y de lo proyectado en el presente.

Un proyecto político es una construcción social, sostenida por determinados grupos, que plantean distintas direcciones a la sociedad (Ibíd, 2013), por lo que eso los lleva a intentar que su propuesta sea aceptada por grandes sectores. Los grupos que impulsan determinados proyectos deben hacerse parecer como los representantes del consenso, de la mayor posible de cantidad de personas.

Un proyecto político puede plantear propuestas de dirección sobre cualquiera de las esferas de lo social, con tal de intentar dirigir en determinado rumbo a la sociedad, por eso no es extraño que los proyectos políticos den propuestas entorno a lo económico, a lo cultural, respecto a la seguridad, etc. Pero es importante reiterar que el proyecto es un medio para la consecución de un fin social, un proyecto no es en sí mismo el fin social.

Uno de los proyectos más importantes de las últimas décadas en América Latina, ha sido el neoliberalismo, que se concretó a través de políticas económicas estatales para impulsar y corregir las vías de reproducción del capital. En unidad orgánica entre política y economía todo proyecto político capitalista está en función de un proyecto económico capitalista, lo cual quiere decir que se busca impulsar un

determinado tipo de organización económica que consiga superar momentos de crisis y permitir el libre funcionamiento aceitado de las relaciones capitalistas de cada tiempo determinado. Específicamente en el caso de América Latina, lo anterior ha consistido en que el proyecto neoliberal ha buscado reconstruir la condición de dependencia respecto a los centros globales a partir de la modificación del patrón de reproducción del capital, pugnando por la transición desde un patrón industrial del siglo XX (durante el período nacional-popular) a un patrón de exportación de producción especializada.

En ese sentido, el neoliberalismo se configuró como un proyecto que pugnó por redoblar la dependencia periférica y garantizar el funcionamiento requerido por las lógicas del capital mundial, generando enormes cantidades de deuda externa de los países periféricos hacia grandes corporaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM), para de ese modo obligarlos a aplicar políticas de austeridad y mantener un flujo de deuda permanente (Saxe-Fernández & Delgado, 2004). Además, ante las necesidades del capital mundial, ese modelo de ajuste obligó a generar políticas de austeridad como la reducción del gasto social, las privatizaciones de empresas públicas, la disminución de impuestos y liberalización de cambio y aduanas, entre otras medidas ya conocidas (Gentili & Sader, 2012).

Hasta aquí queda claro que el neoliberalismo fue un proyecto político-económico con fuerte carácter moral e ideológico que se estableció para permitir redoblar las condiciones de ventaja para las grandes burguesías multinacionales en el intercambio entre centros y periferias.

En Brasil, fueron los gobiernos de Fernando Collor De Mello y Fernando Henrique Cardoso los que se encargaron de introducir un neoliberalismo tardío procurador de privatizaciones y deuda externa, frente a ello, el Partido de los Trabajadores se presentó como oposición y una vez llegado al gobierno intentó poner en marcha un proyecto alternativo de nación, sustentando su lógica económica en el proyecto llamado “neodesarrollista”.

En síntesis: tanto el neoliberalismo como el neodesarrollismo se conformaron como proyectos político-económicos, pero es importante tener claro que ninguno de los dos fue en sí un patrón de reproducción de capital. Tanto neoliberalismo como

neodesarrollismo han sido proyectos que intentaron sostener determinadas formas de reproducción de capital, es decir, ambos proyectos impulsaron un tipo de patrón de reproducción de capital. Lo que se conmina a comprobar en este trabajo es que tanto el neoliberalismo como el neodesarrollismo son dos patas de manutención del mismo patrón de reproducción de capital: el patrón de exportación de producción especializada.

El neodesarrollismo como sostenedor del patrón de exportación de producción especializada

Vinculado al concepto de “posneoliberalismo”, el concepto de “neodesarrollismo” se ha venido discutiendo en los últimos años en América Latina para insistir que se ha instaurado un distinto tipo de organización política y económica.

Aloizio Mercadante, fundador de la CUT, del PT y exministro de educación de Dilma Rousseff asegura rotundamente que “Brasil, a lo largo del gobierno del PT, ha comenzado a construir un Nuevo Desarrollismo, un nuevo patrón de desarrollo sustancialmente distinto tanto del neoliberalismo como del antiguo nacional-desarrollismo predominante en el pasado” (Mercadante, 2013), el cual consistiría en una nueva forma de impulso del desarrollo capitalista vía mayor intervención del Estado en la economía, colocar lo social como eje central de desarrollo e impulsar a Brasil como potencia política y económica en el escenario mundial (Ibid, 2013).

A pesar de que los defensores de esta postura aseguran que se sostienen diferencias importantes respecto al desarrollismo impulsado por la CEPAL durante la primera mitad del siglo pasado, lo cierto es que importantes postulados del neodesarrollismo se basan fundamentalmente en las características de su antecesor, las cuales girarían entorno al aumento de la industrialización como “vía de superación de la pobreza” y un Estado interventor, regulador y planificador de la vida social y económica (Singer, 2015, págs. 41-42), que inaugure un camino hacia una plena modernidad o desarrollo de las distintas esferas de lo social. En suma, ambas posturas tienen en común un intento de recomponer al capitalismo desde una primacía del Estado por encima del mercado.

El proyecto neodesarrollista fue puesto en marcha durante el segundo gobierno de Lula, pero alcanzó un auge especial durante el primer gobierno de Dilma Rousseff junto a su ministro de hacienda, Guido Mantega (Íbid, 2015, pp. 46-50), período durante el cual se sostuvo como proyecto el neodesarrollismo, que se conformó de características como la reducción de impuestos, el uso intensivo de los bancos de desarrollo del Estado, un nuevo diseño de infraestructura, la desvalorización del real, el control de capitales y la protección al producto nacional (Íbid, 2015, p. 54). Aunque el neodesarrollismo como proyecto político-económico se diferenció del neoliberalismo sobretudo entorno al rol del Estado, en este trabajo sostenemos que el neodesarrollismo al igual que el neoliberalismo es un proyecto que a través de sus políticas económicas, logró en lo fundamental sostener un mismo patrón de exportación de producción especializada.

A pesar de que la misma ex presidenta Dilma Rouseff asegura que Brasil “no es un país de commodities”, pues durante los gobiernos petistas se levantaron empresas constructoras de aviones y barcos²⁴, lo cierto es que no es así y es importante desmentir esta perspectiva.

Brasil hoy día es un país que en su actividad económica, se mantiene de la exportación y sobretudo de la exportación de materia prima y de baja manufactura, ocupando el lugar número 21 entre los países exportadores del mundo, llegando a percibir por esta actividad USD\$ 182 mil millones solo en 2016, cuando el PIB del mismo año llegó a rondar USD\$ 1.8 billones²⁵.

Los principales socios comerciales importadores de los productos brasileños se encuentran en el siguiente cuadro.

²⁴ Conferencia de cierre del Congreso ALAS 2017, Montevideo, Uruguay. A partir del min 38:28.
<https://www.youtube.com/watch?v=Tkx189BQssY>

²⁵ <https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/bra/>

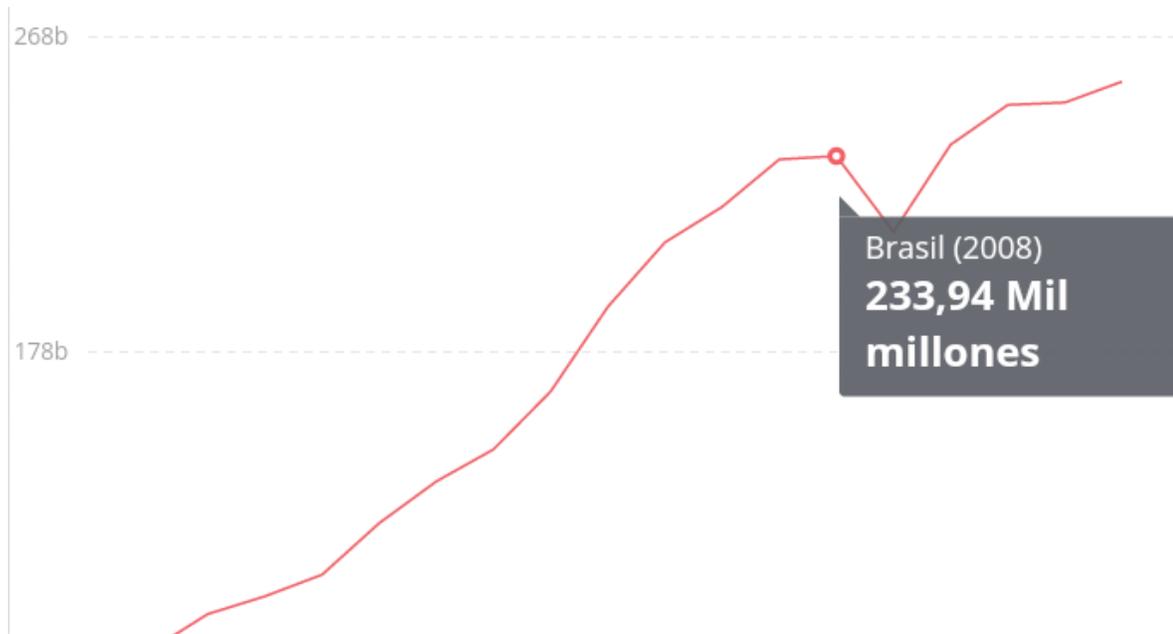
Cuadro 7 Principales clientes comerciales de Brasil

Clientes principales <i>(% de las exportaciones)</i>	2015
China	18,6%
Estados Unidos	12,7%
Argentina	6,7%
Países Bajos	5,3%

Fuente: Comtrade, últimos datos disponibles/ Portal Banco Santander

Por otro lado, en la gráfica número 1 se puede observar que en el período de 1995 a 2010, -mismo que abarca los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso (período 1995-2002) y de Luíz Inácio Lula da Silva (período doble de 2002-2010)-, se mantuvo en aumento permanente la exportación de bienes y servicios, con una caída durante la crisis de 2008, pero recuperándose y continuando su aumento, según datos del Banco Mundial.

Gráfica1 Exportaciones de bienes y servicios a precios constantes de 2010 (USDs)



Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales/Banco Mundial[<http://datos.bancomundial.org/indicador/NE.EXP.GNFS.KD?end=2010&locations=BR&start=1992&view=chart>]

También podemos observar en el siguiente cuadro que en el período que abarca desde el gobierno de Cardoso a los gobiernos Lula Da Silva y Dilma Rousseff, se mantiene clara una tendencia de incremento de exportaciones de materias primas, en consonancia con la disminución de exportaciones de productos manufacturados, según datos de la Cepal. Esto quiere decir que el patrón exportador primario fue alimentado por los tres gobiernos, aunque existe una alza permanente durante los gobiernos de Lula y Dilma quienes lo impulsaron en mayor medida.

Cuadro 8 Exportaciones de productos primarios y manufacturados 1998-2014

Año	Exportaciones de productos primarios según su participación en el total	Exportaciones de productos manufacturados según su participación en el total
1994	44.9	55.1
1998	45.3	54.7
2002	47.4	52.6
2006	49.2	50.8
2010	62.9	37.1
2014	65.2	34.8

Fuente: Cuadro de elaboración propia con base en datos de Cepal/Cepalstat Base de datos, estadísticas e indicadores externos [<http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=1910&idioma=e>] y [<http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=1911&idioma=e>]

El cuadro anterior demuestra que las exportaciones de productos primarios sí siguen siendo muy importantes en Brasil, al contrario de lo que sostiene Dilma Rousseff. Pero no solo eso, sino que el papel preponderante de esas exportaciones aumentó de manera considerable durante los gobiernos del PT.

Siguiendo la línea, podemos observar en el siguiente cuadro cuáles han sido los productos más exportados en el período 1998-2010, notando que si bien incrementan las exportaciones de soya o petróleo crudo, el producto que tiene mayor exportación es el mineral de hierro, una mercancía exigida mayormente en términos de especialización y requerimientos de la actividad extractiva.

Cuadro 9 Productos exportados durante el período 1998-2010

Productos exportados	1998	2002	2006	2010
Soya	4.3	5.0	4.1	5.6
Mineral de hierro	6.5	5.1	6.5	14.8
Petróleo crudo	-	2.8	5.0	8.3
Aves muertas o vivas	-	2.4	2.2	3.0
Café verde o tostado	4.6	-	-	2.7
Motores de combustión interna	2.2	2.3	-	-
Vehículos automotores	3.2	3.3	3.4	2.3

Fuente: Cuadro de elaboración propia con base en datos de Cepal/Cepalstat Base de datos, estadísticas e indicadores externos

Por otro lado, durante el año 2015, de la cantidad de exportaciones totales, tan solo el 2.10% pertenecía a productos automotores como aviones y helicópteros. En contraste, el 43.20% de esas exportaciones equivalían a productos agropecuarios, minerales, aceites y cárnicos, según datos expuestos en el siguiente cuadro.

Cuadro 10 Productos exportados desde Brasil durante 2015

191,1 miles de mills. USD de productos exportados en 2015	
Habas porotos, frijoles, fréjoles de soja soya, habas porotos, frijoles, fréjoles de soja soya, incl. quebrantadas	11,00%
Minerales de hierro y sus concentrados. Minerales de hierro y sus concentrados, incl. las piritas de hierro tostadas cenizas de piritas	7,40%
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminosoAceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso	6,20%

Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa. Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido	4,00%
Carne y despojos comestibles de gallos, gallinas. Carne y despojos comestibles de gallos, gallinas, patos, gansos, pavos gallipavos y pintadas, de especies domésticas, frescos, refrigerados o congelados	3,30%
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción. Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja soya, incl. molidos o en pellets	3,00%
Café, incl. tostado o descafeinado; cáscara. Café, incl. tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos de café que contengan café en cualquier proporción	2,90%
Pasta química, de madera. Pasta química, de madera, a la sosa soda o al sulfato (exc. pasta para disolver)	2,80%
Maíz y derivados	2,60%
Helicópteros, aviones y demás aeronaves. Helicópteros, aviones y demás aeronaves para la propulsión con motor; vehículos espaciales, incl. los satélites, y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales	2,10%

Fuente: Portal Banco Santander

[https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/brasil/cifras-comercio-exterior?&actualiser_id_banque=oui&id_banque=35&memoriser_choix=memoriser]

Hasta aquí, los datos muestran que al contrario de lo que dice Dilma Rousseff, durante los gobiernos del PT se amplió la importancia de las exportaciones de bienes primarios, pero al mismo tiempo, esos son los bienes exigidos por los centros globales, como es el caso de los minerales, es decir, los bienes especializados

requeridos por las economías centrales para sostener su mismo ritmo de producción con mayor nivel de tecnologización.

En ese sentido, podemos decir que el neodesarrollismo no solo siguió alimentando un patrón de exportación de producción especializada a modo de continuación de la acción del proyecto neoliberal, sino que amplió y profundizó dicho patrón. El neodesarrollismo resultó altamente rentable para el mismo patrón de reproducción de capital que había inaugurado el neoliberalismo años antes, de este modo, los gobiernos del PT ayudaron como nunca a la propiedad privada, tal como sostiene Lula al asegurar que “los empresarios nunca ganaron tanto como ganaron en mi gobierno”²⁶.

En conclusión, el neodesarrollismo resultó ser un mejor proyecto político-ideológico para la reproducción del patrón de exportación de producción especializada, a comparación de lo que fue el neoliberalismo, utilizando las vías propias del modelo de extractivismo mineral y del agronegocio, que suplían las demandas de los centros económicos mundiales. Es por ello que aunque mantenían diferencias tanto neoliberalismo como neodesarrollismo (respecto al papel rector del Estado), ambos proyectos político-económicos terminaron adaptando el mismo patrón de reproducción de capital, sin diferenciarse sustancialmente, lo que permitió que ambos convivieran en un mismo momento y en un mismo espacio con dicho patrón como paraguas económico.

III. El PT y la conciliación de clases: la apuesta por la clase dominante

Hasta aquí, se habrá podido notar que la forma de gobierno del PT no siguió una ruta de polarización social como las de los gobiernos de Hugo Chávez o Evo Morales (Safatle, 2017), en las que se privilegiaba una lucha social contra el orden

²⁶ Ver minuto 0:31. [<https://www.youtube.com/watch?v=U6X5UkZOPBY>]

dominante. Al contrario de esas experiencias, el PT apostó como lo hemos dicho hasta el momento, a formular una conciliación de clases que resultó ser momentánea, pero que fue presumida como un verdadero modo de hacer política a largo plazo. En su llegada al gobierno, Lula planteó su proyecto como uno capaz de derrocar al neoliberalismo y los estragos dejados por este (López Castellanos, 2001), sin embargo, asumió un gobierno de conciliación de intereses, uno que decía existir para todas las clases y sin distinciones, sin embargo esa política ha presentado diversas limitantes y problemáticas:

1. Tener la dirección del gobierno no implica per se desmontar las estructuras del Estado (como relación social). Importantes núcleos de poder, identificados con el proyecto neoliberal, se mantuvieron activos e impulsando su posición política desde otros espacios del Estado, algunos de ellos resultaron ser el poder legislativo y el poder judicial, que optaron por recurrir a una posición de conservación del orden social.
2. Dejando activos en toda su potencialidad a los grupos neoliberales, el gobierno mantuvo también una serie de alianzas con los grupos y fracciones de clase que pugnarón por sostener un mismo patrón de reproducción de capital y acumulación de riqueza, como modelo de ajuste y como proyecto neoliberal.
3. El modelo de conciliación de clases intentó comprometerse y dejar contentos a todos los sectores, aunque fueran contradictorios entre sí y reivindicaran visiones de sociedad e intereses encontrados. Es por eso, que el PT asumió la concepción liberal de Estado rector, como pacto social, pues el lulismo intentó gobernar para todos. Sin embargo, quedó al descubierto, que el Estado no es fruto de un contrato neutro, sino una síntesis la lucha de clases, por lo que la acción del gobierno, terminó reforzando en mucha mayor medida a la gran burguesía respecto a las clases subalternas.
4. Las relaciones sociales que se condensaron en ese momento fueron un intento de conciliación, pero que realmente implicaron una alianza desigual, en términos de que primó la conciliación entre el PT y la burguesía por sobre una política de beneficios de fondo a las clases subalternas. Además, el

Estado tuvo una mayor inclinación (aunque contradictoria e intermitente) por apoyar en mayor medida a una fracción en especial, a la burguesía interna, respecto a otras fracciones de la burguesía (Boito Jr, 2012). Todo eso, amparado en un proyecto impulsor de las empresas brasileñas, que las insertó en los grandes círculos del mercado internacional.

5. Hubo una ausencia de alianza política entre el gobierno y los movimientos sociales, no solo en términos de exigencias y reivindicaciones, sino sobretudo en términos del evitar concebirlas como poder primordial al momento de gobernar. En síntesis, se gobernó “desde arriba”, pactando con la gran burguesía y no con la sociedad en las calles.
6. No se impulsó un empoderamiento popular, pues el PT no contempló la centralidad de un proceso de emancipación y politización social. No se impulsó la construcción de un sujeto social e histórico, frente a la dominación de las clases enquistadas al interior del Estado. Los programas sociales sencillamente contemplaron a las clases populares de una manera asistencialista, pero nunca las contemplaron como sujetos sociales, capaces de tomar su destino en sus propias manos, como sujetos capaces de jugar un papel protagónico en el panorama político.

En síntesis, la conciliación estuvo sobretudo, sostenida por una alianza explícita con los grupos económicos más poderosos de Brasil. A continuación procederemos a detallar lo dicho hasta aquí.

La conciliación del PT con los grandes grupos económicos

Para comenzar a indagar a detalle las alianzas de representación entre el gobierno Lula y los grandes grupos económicos, expondremos los siguientes cuadros que muestran a los ministros de Luíz Inácio Lula Da Silva que tuvieron un nexo importante con representantes o corporaciones de la burguesía.

Cuadro 11 Ministros de Lula vinculados a Grupos Empresariales

Nombre	Partido político	Cargo	Vínculo con Grupos Empresariales
Alfredo Nascimento	PR	Ministro de transportes 2004-2011	Enriquecimiento ilícito
Edison Lobão	PMDB	Ministro de Minas y Energía 2008-2015	Vinculado a la Red Globo
Eunício Lopes de Oliveira	PMDB	Ministro de Comunicaciones 2004-2005 (*Presidente del senado en el gobierno Temer)	Vinculado a Petrobras
Geddel Quadros Vieira Lima	PMDB	Ministro de Integración Regional 2007-2010 (*Ministro de la Secretaría de gobierno de Michel Temer desde 2016)	Inculpado por la Operación Catilnárias y desvío de recursos a JBS y otras empresas
Henrique de Campos Meirelles	-----	Presidente del Banco Central de Brasil 2003-2011	Miembro del Consejo de la Empresa Azul Líneas Aéreas. Expresidente internacional del BankBoston. Anunciado en 2012 presidente de J&F, holding perteneciente a JBS. Presidente del Banco Original (Posesión de J&F de JBS)
José Alencar Gomes da Silva	PMDB, PL	Ministro de defensa 2004-2006 Vicepresidente de Brasil 2003-2011	Empresa textilera Coteminas
José Dirceu	PT	Ministro jefe de la Casa Civil de Brasil 2003-2005	Denuncias por corrupción en correos, Operación Lava Jato, Mensalão; También era consultor para TV Azteca y Salinas Pliego
Luiz Fernando Furlan	----	Ministro de desarrollo, desarrollo y comercio exterior 2003-2007	Consejo de Administración del Grupo Sadia y de la Fundación Amazonas Sustentable
Miguel João Jorge Filho	-----	Ministro de desarrollo, desarrollo y comercio exterior 2007-2010	Vicepresidente de Asuntos Legales, Recursos Humanos y Asuntos Corporativos de Volkswagen y Banco Santander

Pedro Brito do Nascimento	PSB	Ministro jefe de la Secretaría Nacional de Puertos 2007-2011	<i>Pablo Carlos Rojas Gómez</i> Superintendente General da Bolsa de Valores Regional; Director del Banco Fibra S.A.; Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado del Ceará; Presidente del Banco del Estado del Ceará S.A.; Presidente del Consejo de Administración del Banco del Estado del Ceará S.A.; Superintendente Financiero del Banco del Nordeste del Brasil S.A.
Wagner Gonçalves Rossi	PMDB	Ministro de agricultura	Compañía Nacional de Abastecimento
Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto	PTB	Ministro de Turismo 2003	Fundador de Biobrás, empresa de insulina. Accionista de las empresas Biommm Technology e Kroton Educacional.
Paulo Bernardo Silva	PT	Ministro de Planeamiento, orden y gestión 2005-2011	Implicado en la Operación Lava Jato, por destinar una propina a la Empresa Consist entre 2010 y 2015. Presidente del Sindicato de Bancarios de Paraná

El cuadro anterior muestra que al menos 13 ministros de los dos gobiernos de Luíz Inácio Lula Da Silva presentaban alianzas con grandes empresas, lo cual no puede dejar de llamar la atención ya que en un gobierno de conciliación de clases, la burguesía fue la mejor representada políticamente, a final de cuentas.

Entre los ministros más importantes vinculados con grupos empresariales se encuentran los siguientes:

José Dirceu

Integrante del movimiento estudiantil después del 64 se convirtió en abogado y más tarde se integró al PT y para formar parte del movimiento Diretas Já a favor de elecciones directas en la década de los 80. Fue Ministro jefe de la Casa Civil de Brasil durante el período 2003-2005.

Se volvió famoso por ser señalado como el operador principal de lo que se conoció como el Mensalão, esquema que contemplaba la compra de apoyos políticos en el congreso para el empuje de iniciativas petistas. También fue implicado en la

Operación Lava Jato por el intercambio de favores políticos por grandes sumas de dinero proveniente de empresas privadas, según las delaciones de Julio Camargo (intermediario y consultor entre Petrobras y distintos políticos receptores de propinas), Alberto Youssef (intermediario de bancos propiedades de Itaú y Petrobrás) y Milton Pascowitch

Además, el mismo Dirceu trabajó como asesor y consultor del Grupo Azteca, de propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de las empresas Elektra y Banco Azteca. De ese trabajo, Dirceu se benefició con un pago de R\$1.7 millones a través de JD Assesoria e Consultoria. Por otro lado, durante el año 2008 el Grupo Azteca tuvo acceso al mercado financiero de Brasil, siendo el empresario Salinas Pliego recibido por el mismo presidente Lula²⁷. Desde el año 2015 se inició un proceso del Banco Central para expulsar ese conglomerado de Brasil.

Paulo Bernardo Silva

Fue Ministro de Planeamiento, orden y gestión 2005-2011 del gobierno de Luíz Inácio Lula da Silva, y también Ministro de Comunicaciones 2011-2015 de Dilma Rousseff. Implicado en la Operación Lava Jato, debido al desarrollo de una propina con la Empresa Consist Software entre 2010 y 2015, también fue presidente del Sindicato de Bancarios de Paraná.

La relación con Consist Software, -una empresa informática-, cobró relevancia, debido a que el ministro fue de los principales impulsores del Plan Nacional de Banda Larga, siendo él el principal responsable durante su gestión. En dicho Plan se contemplaba aumentar la Banda Ancha para incrementar el nivel de conexiones a internet. El plan consistía en un esquema de inversión en la principal empresa Telebás, pero que a su vez se vinculaba con servicios prestados por otras empresas como Star Overseas (empresa con la cual se vinculó José Dirceu, recibiendo R\$ 620 mil en compensación)²⁸, Intelig (Que forma parte del consorcio TIM, que a su

²⁷ <https://oglobo.globo.com/brasil/lava-jato-investiga-pagamentos-de-grupo-mexicano-jose-dirceu-19097456>
<http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/lava-jato-investiga-pagamentos-de-bilionario-mexicano-a-dirceu/>

²⁸ <http://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/noticias/entenda-como-o-plano-nacional-de-banda-larga-foi-feito-20121221.html>

vez se suma al Holding Telecom Italia, propiedad de las familias Benetton y Pirelli) y GVT (propiedad de Amos Genish, surgida a partir de una fusión entre la empresa de Holanda, Global Village Telecom y otras estadounidenses de ComTech Communications Technologies).

Eunício Lopes de Oliveira

Dueño de la empresa Manchester Servicios Ltda., Lopes de Oliveira fue Ministro de Comunicaciones 2004-2005 del gobierno Lula e integrante del PMDB.

Durante los años 2007 y 2011, su empresa recibió alrededor de R\$ 1 billón en contratos con la estatal Petrobras. De hecho, el último y mayor gran contrato de la empresa con Petrobras fue de R\$ 617, 9 millones, suceso que no se volvió a repetir una vez que el senador se retiró de Manchester ²⁹

Hasta asumir la presidencia del senado, Lopes se sostenía como el integrante más rico del PMDB, con un patrimonio de R\$99 millones³⁰, al ser también dueño de las empresas Confederal y Corpvs, que integran el holding Remmo Participaciones.

Henrique de Campos Meirelles

Actual Ministro de Hacienda de Michel Temer, se mantuvo en el cargo de presidente del Banco Central de Brasil 2003-2011 durante prácticamente todo el gobierno de Lula.

Sin embargo, Campos Meirelles también fue miembro del consejo de la empresa Azul Líneas Aéreas, además de ser presidente internacionail del BankBoston. Durante 2012 fue nombrado presidente de J&F, holding perteneciente al gran frigorífico internacional JBS³¹. También fue Presidente del Banco Original (Posesión de J&F de JBS) a partir del gobierno de Temer.

Como puede notarse, Campos Meirelles logró tejer una influencia económica desde el Estado, capaz de asegurarle un futuro como parte del gran capital nacional.

²⁹ <https://oglobo.globo.com/brasil/empresa-de-eunicio-oliveira-obteve-contratos-de-1-bilhao-com-petrobras-16044037>

³⁰ <http://veja.abril.com.br/politica/eunicio-milionario-cacique-do-pmdb-e-indio-da-odebrecht/>

³¹ <https://exame.abril.com.br/revista-exame/o-preco-de-henrique-meirelles/>

Pedro Brito do Nascimento

El Ministro jefe de la Secretaría Nacional de Puertos 2007-2011 y Ministro de la Integración Nacional de Brasil 2006-2007 se graduó como economista por la Universidad Federal del Ceará, y también fungió como Superintendente General da Bolsa de Valores Regional; Director del Banco Fibra S.A.; Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado del Ceará; Presidente del Banco del Estado del Ceará S.A.; Presidente del Consejo de Administración del Banco del Estado del Ceará S.A.; Superintendente Financiero del Banco del Nordeste del Brasil S.A.

Como puede observarse su experiencia se vincula fundamentalmente al campo financiero regional, teniendo una proyección a nivel nacional.

Para complementar el cuadro de ministros que tuvieron alguna relación con la burguesía brasileira, ahora procederemos a mostrar un cuadro que entrecruza a los ministros de Lula que fueron expuestos en casos de corrupción, entre los que destacan ministros que mantuvieron un tipo de relación ilegal con grupos económicos.

Cuadro 12 Ministros de Lula implicados en casos de corrupción

Nombre	Partido político	Cargo	Caso de corrupción implicado
Agnelo dos Santos Queiroz Filho	PT	Ministro de Deportes 2003-2006	Recepción de propina de R 900 millones durante copa mundial
Antonio Palocci Filho	PT	Ministro de Hacienda 2003-2006	Implicado en Operación Lava Jato e investigado por recibir dinero para campañas de Dilma Rousseff
Carlos Roberto Lupi	PDT	Ministro del Trabajo y empleo 2007-2011	Acusado por desvío de recursos públicos frente a la Cámara de Diputados en 2011

Guido Mantega	PT	Ministro de Hacienda 2006-2011 / Ministro de Planeamiento, organización y gestión de Brasil 2003-2004/ Presidente del BNDES	Implicado en Operación Zelotes y Operación Lava Jato, en el que se acusó de dar propina a la empresa OSX, en posesión del empresario Eike Batista
Humberto Sérgio Costa Lima	PT	Ministro de Salud 2003-2005	Envuelto en pagos de recursos públicos a Mário Barbosa Beltrão, presidente de la Asociación de las Empresas del Estado de Pernambuco (Assimpra)
José Alencar Gomes da Silva	PMDB, PL, PRB	Ministro de defensa 2004-2006 Vicepresidente de Brasil 2003-2011	Recibió a través de su empresa textilera Coteminas un millón de reales
José Antonio Dias Toffoli	----	Abogado General de la Unión 2007-2009 Ministro del Supremo Tribunal Federal 2009-Actualidad	Inmerso en el Escándalo del Mensalão
José Dirceu	PT	Ministro jefe de la Casa Civil de Brasil 2003-2005	Denuncias por corrupción en correos, Operación Lava Jato, Mensalão; También era consultor para TV Azteca y Salinas (pliego/)
Paulo Bernardo Silva	PT	Ministro de Planeamiento, orden y gestión 2005-2011	Implicado en la Operación Lava Jato, por destinar una propina a la Empresa Consist entre 2010 y 2015. Presidente del Sindicato de Bancarios de Paraná
Romero Jucá Filho	PSDB/P MDB	Ministro de previdencia social 2005	Implicado en Operación Lava Jato y en Operación Zelotes. Se le acusa de recibir propina por construcciones en Belo Horizonte

Silas Rondeau Cavalcante Silva		Ministro de Minas y Energía 2005-2007	Implicado en caso de tráfico de influencias en Operación Lava Jato
-----------------------------------	--	--	--

Como puede notarse, ministros como Paulo Bernardo, José Dirceu y José Alencar, que eran personajes vinculados a grupos económicos, también aparecen implicados en casos de corrupción por recepción de sobornos o tráfico de influencias. Sin embargo, también destacan otros ministros como son los siguientes casos:

Antonio Palocci

Médico y militante del PT fue Ministro de Hacienda, durante el primer gobierno Lula (2003-2006) iniciando una política de desarrollo del mercado interno y apoyando a las grandes empresas con capital estatal del BNDES. .

Además de haber sido investigado durante la Operación Lava Jato por el recibo de propinas de parte de la empresa Odebrecht, Palocci fue señalado como un mediador entre el Estado y la empresa frigorífica Friboi, propiedad del grupo económico JBS.

Según lo que el Ministerio Público Federal anunció es que Palocci recibió 2 millones a través de su Consultora Empresarial y Financiera entre 2009 y 2010. Durante ese mismo período el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) compró títulos de deuda de la Empresa Friboi por un valor de R\$ 3.5 billones. Además, en el año 2009 JBS a través de Friboi adquirió la empresa Pilgrim's, acrecentando su poderío comercial. Cabe mencionar que la empresa JBS donó R\$ 10 millones para la campaña de la presidencia en 2010.

Guido Mantega

El economista por la Universidad de Sao Paulo fue Ministro de Planeamiento, organización y gestión de Brasil 2003-2004, presidente del BNDES de 2004 a 2006

y Ministro de Hacienda de de 2006 a 2015. Como se puede observar ocupó carteras importantes durante los gobiernos de Lula da Silva y de Dilma Rousseff, asumiendo un rol fundamental en la inyección de inversiones estatales del BNDES a empresas nacionales.

Se le ha acusado de haber recibido R\$ 5 millones para campañas electorales de parte de Eike Batista, presidente del Grupo EBX, que agrupa las empresas OGX (petróleo y gas), MPX(energía), LLX (logística), MMX(minería) y OSX, desempeñadas principalmente en actividades mineras, extractivistas, petroleras y energéticas³².

Además se le investiga en la Operación Zelotes por supuesta coacción para donación de dinero a campañas a partir de su presidencia del BNDES³³

Respecto al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, se realizó el mismo ejercicio con sus ministros.

Cuadro 13 Ministros de Dilma Rousseff vinculados a Grupos Económicos

Nombre	Partido político	Cargo	Vínculo con Grupos Empresariales
Alexandre Antônio Tombini	---	Presidente del banco central 2011-2016	Representante de Brasil ante el FMI de 2001-2005. Ex asesor de la Câmara de Comércio Exterior (Camex). Fue nombrado director ejecutivo del FMI
André Peixoto Figueiredo Lima	PDT	Ministro de Comunicaciones 2015-2016	Socio de las empresas "Top Med Scientific Comercio e Importacao Ltda", "Porto Seco Iracema"
Armando de Queiroz Monteiro Neto	PSD,P MDB,P DT	Ministro de desarrollo, industria y comercio exterior 2015-2016	Expresidente de la Confederación Nacional de la Industria 2002-2010, ex residente de la Federación de las Industrias del Estado de Pernambuco 1992-2004
Alfredo Nascimento	PR	Ministro de Transportes 2010-2011	Tráfico de influencias con empresa propiedad de su hijo

³² <http://veja.abril.com.br/economia/minha-vida-virou-um-inferno-diz-guido-mantega/>

³³ https://brasil.elpais.com/brasil/2016/05/09/politica/1462798301_985465.html

Edison Lobão	PMDB	Ministro de Minas y Energía 2011-2015	Empleado de los periódicos Correo brasilense, Última Hora y la Red Globo. Fue parte del Consejo administrativo de la empresa Telecomunicações de Brasília S.A. Implicado en la Operación Lava Jato y en el Escándalo de los Panamá Papers.
Carlos Eduardo de Sousa Braga	PMDB	Ministro de Minas y Energía 2015-2016	Socio de la empresa Parintins Vehículos Ltda.
Guilherme Afif Domingos	PSD	Ministro jefe de la secretaría de la micro y pequeña empresa 2013-2015	Director y presidente de la empresa Indiana Seguros S/A, también director de la Asociación Comercial de Sao Paulo
Joaquim Vieira Ferreira Levy	-----	Ministro de Hacienda 2015	Trabajó en el FMI, fue vicepresidente del Banco Interamericano de desarrollo, trabajó en el Banco Central Europeo, fue secretario y ministro de Fernando Henrique Cardoso. En 2016 después de su cargo con Rousseff se convirtió en director financiero del Banco Mundial.
Kátia Regina de Abreu	PSD, PMDB	Ministra de agricultura 2015-2016	Presidenta de la federación de Agricultura e Pesca del Estado del Tocantins. Es intermediadora con las grandes empresas de Agronegocio y defensora de Monsanto.
Nelson Henrique Barbosa Filho	-----	Ministro de hacienda 2015-2016	Presidente del consejo de administración del Banco de Brasil, del consejo de administración de la empresa Minera Vale S.A., del Banco Regional de Brasilia y de la Central de Custodia y de Liquidación Financiera de Títulos, S.A. (Cetip) Presentó una propuesta de reducción del gasto público

De manera seguida, presentamos el cuadro con los ministros del gobierno de Dilma implicados en casos de corrupción:

Cuadro 14 Ministros de Dilma implicados en casos de corrupción

Nombre	Partido político	Cargo	Caso de corrupción implicado
Alfredo Nascimento	PR	Ministro de Transportes 2010-2011	Investigado por incremento de riqueza del 86% de riqueza de la empresa de su hijo durante su administración. También se demostró la existencia de cuantiosos intercambios económicos entre la empresa de su hijo y el ministerio a su cargo. Además participó del lado del Impeachment contra Dilma Rousseff
Antonio Palocci Filho	PT	Ministro jefe de la casa civil 2011	Implicado en Operación Lava Jato e investigado por recibir dinero para campañas de Dilma Rousseff
Carlos Roberto Lupi	PDT	Ministro del Trabajo y empleo 2007-2011	Acusado por desvío de recursos públicos frente a la Cámara de Diputados en 2011
Edison Lobão	PMDB	Ministro de Minas y Energía 2011-2015	Empleado de los periódicos Correo brasileiro, Última Hora y la Red Globo. Fue parte del Consejo administrativo de la empresa Telecomunicações de Brasília S.A. Implicado en la Operación Lava Jato y en el Escándalo de los Panamá Papers.
Eliseu Lemos Padilha	PMDB	Ministro jefe de la Secretaría de aviación 2015 *Sigue siendo ministro de Temer	Implicado en Operación Lava Jato

Fernando Bezerra de Sousa Coelho	PMDB	Ministro de la Integración nacional 2011-2013	Implicado en Operación Lava Jato, en términos de lavado de dinero para la candidatura de Eduardo Campos. Fue acusado de recibir R\$ 3 millones de la frigorífica JBS.
Fernando Damata Pimentel	PT	Ministro de Desarrollo, industria y comercio exterior 2011-2014	Implicado en Operación de Lava Jato por esquema de propinas para campañas electorales por cuenta de JBS. También se le implicó en lavado de dinero hacia la empresa Odebrecht.
Paulo Bernardo Silva	PT	Ministro de comunicaciones 2011-2015	Implicado en Operación Lava Jato por desvío de recursos públicos a empresa Desist
Michel Temer	PMDB	Vicepresidente 2011-2016	Principal actor y artífice de la orquestación junto con Eduardo Cunha del golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rouseff en 2015. Se encuentra acusado por recibir sobornos de JBS, por asociación ilícita y por obstrucción de la ley. Su status está pausado debido al apoyo que tiene en el Congreso Nacional y que impide el procesamiento del Supremo Tribunal Federal.

De esos cuadros, varios ministros ya fueron expuestos en el apartado referente a Lula, ya que muchos de ellos fueron funcionarios de ambos gobiernos. De los que no se abordaron hasta aquí, es importante destacar la trayectoria de los siguientes ministros

Edison Lobão

Militante del PMDB, fue Ministro de Minas y Energía 2011-2015, gobernador del Maranhão y actual senador. Fue empleado de los periódicos Correo brasileño,

Última Hora y la Red Globo. También fue parte del Consejo administrativo de la empresa Telecomunicações de Brasília S.A., además de estar implicado en la Operación Lava Jato y en el Escándalo de los Panamá Papers.

A principios de 2017 se le levantó un seguimiento desde el Supremo Tribunal Federal (STF), por haber participado en un esquema de recibimiento de una propina del 1% en el inicio de la construcción del gran complejo hidroeléctrico Belo Monte. Entre las empresas que proporcionaron el dinero de la propina se encuentran Andrade Gutierrez, Odebrecht, Camargo Corrêa, Queiroz Galvão y OAS³⁴. La triangulación se realizó a través de empresas contratistas del hijo del senador, llamado Márcio Lobão, quien resultó dirigir una decena de empresas. Entre esas figura EML Proyectos Asesorías y Participaciones, la empresa principal del esquema de corrupción³⁵.

Alfredo Nascimento

Fue nvestigado por incremento de riqueza del 86% de la empresa de su hijo durante su administración. También se demostró la existencia de cuantiosos intercambios económicos entre la empresa de su hijo y el ministerio a su cargo. Además participó del lado del Impeachment contra Dilma Rousseff a pesar de haber sido su Ministro de Transportes entre 2010-2011.

A inicios de este año la empresa JBS aseguró haberle entregado donaciones junto con otros diputados de la región del amazonas³⁶.

Fernando Bezerra de Sousa Coelho

Fue Ministro de la Integración nacional 2011-2013, diputado por Pernambuco y actual senador por la misma entidad y afiliado al PMDB.

Se encuentra Implicado en Operación Lava Jato, en términos de lavado de dinero para la candidatura de Eduardo Campos. Su hijo Fernando Bezerra Coelho fue

³⁴ <https://www.cartacapital.com.br/politica/desdobramento-da-lava-jato-atinge-filho-de-edison-lobao-do-pmdb>

³⁵ <http://veja.abril.com.br/blog/radar/marcio-lobao-tem-uma-dezena-de-empresas/>

³⁶ http://amazonas.bncamazonia.com.br/ta_na_midia/alfredo-e-pauderney-receberam-mais-de-r-400-mil-diz-jbs/

acusado de recibir R\$ 3 millones de la frigorífica JBS³⁷ y de haber estado en contubernio con su padre gracias a servicios de asesorías. Actualmente el hijo de Bezerra de Sousa, se desempeña como Ministro de Minas y Energía del gobierno Temer.

Fernando Damata Pimentel

Actual gobernador de Minas Gerais, Integrante del PT y Ministro de Desarrollo, industria y comercio exterior 2011-2014, Pimentel se encuentra Implicado en la Operación de Lava Jato por esquema de propinas para campañas electorales por cuenta de JBS. Según Ricardo Saud, director de J&F, Pimentel recibió R\$ 300 mil durante 14 meses, cuando aun era ministro³⁸. Según el delator, el dinero era enviado a través del despacho de Andrade Antunes & Henriques Advogado, registrado en Belo Horizonte.

También se le implicó en lavado de dinero hacia la empresa Odebrecht. En menor medida también recibió dinero de la ECB (Empresa Construtora de Brasil)³⁹.

Gleisi Helena Hoffmann

Militante del PT, fue Ministra jefe de la casa civil 2011-2014. Fue denunciada por corrupción pasiva durante la Operación Lava Jato por recibir propina de petrobrás para su campaña política y por triangulación con Odebrecht.

Según las delaciones de dueño y delatores de Odebrecht, el monto traspasado a la actual senadora fue de alrededor de R\$5 millones⁴⁰

Actualmente Hoffman es senadora por Paraná y presidenta del Partido de los Trabajadores.

³⁷ <http://epoca.globo.com/politica/noticia/2017/08/exclusivo-jbs-pagou-r-3-milhoes-ministro-de-minas-e-energia.html>

³⁸ <https://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/diretor-da-jf-diz-em-delacao-que-pimentel-recebeu-mensalinho-de-r-300-mil-quando-era-ministro.ghtml>

³⁹ <https://istoe.com.br/as-provas-da-propina-de-pimentel/>

⁴⁰ <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/04/1874855-campanha-de-gleisi-hoffmann-recebeu-r-5-mi-dizem-delatores-da-odebrecht.shtml>

Alexandre Antônio Tombini

Economista por la Universidad de Brasilia y doctor en economía por la Universidad de Illinois, fue presidente del Banco Central entre 2011 y 2016. Representante de Brasil ante el FMI de 2001-2005. Ex asesor de la Cámara de Comercio Exterior (Camex). Fue nombrado director ejecutivo del FMI desde 2016.

Armando de Queiroz Monteiro Neto

Fue Ministro de desarrollo, industria y comercio exterior 2015-2016, pasó por varios partidos como el Partido de la Social Democracia Brasileira (PSDB), el Partido del Movimiento Democrático Brasileiro (PMDB) y el Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). También es expresidente de la Confederación Nacional de la Industria 2002-2010, ex residente de la Federación de las Industrias del Estado de Pernambuco 1992-2004.

Joaquim Vieira Ferreira Levy

Doctor en Economía por la Universidad de Chicago, tecnócrata de pura cepa, fue nombrado por Dilma Rousseff Ministro de Hacienda entre enero y diciembre de 2015. Trabajó en el FMI, fue vicepresidente del Banco Interamericano de desarrollo, trabajó en el Banco Central Europeo, fue secretario y ministro de Fernando Henrique Cardoso.

Levy participó también como asistente ejecutivo Del Banco Bradesco S.A⁴¹., que es el segundo mayor consorcio bancario en todo Brasil.

Al asumir en su cargo, lo primero que exigió al gobierno de Rousseff fue bloquear el gasto de gobierno de alrededor de R\$80 millones, consiguiendo un recorte de R\$69 millones⁴².

En 2016 después de su cargo con Rousseff se convirtió en director financiero del Banco Mundial.

⁴¹ <http://www.worldbank.org/en/about/people/j/joaquim-levy>

⁴² <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/12/levy-tinha-sido-escolhido-para-trazer-confianca-politica-economica.html>

Kátia Regina de Abreu

Integrante del PSD y más tarde del PMDB fue nombrada por Dilma Rousseff como Ministra de agricultura entre 2015 y 2016.

Fue presidenta de la federación de Agricultura y Pesca del Estado del Tocantins (1995-2005) y representante de la Bancada Ruralista dentro del Congreso Nacional de Brasil. Durante su gestión se manifestó como una activista en contra de las invasiones a terrenos de terratenientes. Además de ser conocida como la “Motosierra de oro” ha impulsado las exenciones e incentivos a transgénicos, la reducción de los derechos de trabajadores campesinos como han señalado movimientos sociales y organizaciones como Vía Campesina

Después de ser figura opositora a Lula y Dilma y haber apoyado a José Serra, se volvió aliada de Dilma. Es una reconocida intermediadora con las grandes empresas de Agronegocio y defensora de Monsanto.

Nelson Henrique Barbosa Filho

Economista por la Universidad Federal de Rio de Janeiro y doctor en Economía por la New School for Social Research, fue Ministro de Hacienda entre 2015 y 2016. También fue presidente del consejo de administración del Banco de Brasil (2009-2013), del consejo de administración de la empresa Minera Vale S.A., del Banco Regional de Brasilia y de la Central de Custodia y de Liquidación Financiera de Títulos, S.A. (Cetip). Fue clave en la presentación de una propuesta de disminución de meta de superávit del PIB del 0.7% al 0.5% aceptado por la presidenta Dilma Rousseff⁴³.

A su vez se desempeñó haciendo críticas al gobierno por permitir grandes inversiones en el gasto público y social, a pesar de autodenominarse como partidario de posiciones desarrollistas con mayor participación del Estado en la economía.

⁴³ <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/12/1720985-conheca-o-novo-ministro-da-fazenda-nelson-barbosa.shtml>

Michel Temer Lulia

Abogado por la Universidad de São Paulo y doctor en Derecho Público por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, fue diputado por São Paulo y presidente de la Cámara de Diputados entre 1997 y 2001 por el PMDB, partido del cual llegó a ser presidente.

Desde el PMDB, figuró como principal actor y artífice junto con Eduardo Cunha del golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Roussef en 2015, retirándole paulatinamente el apoyo del PMDB a su gobierno desde su inicio y generando alianzas con el PSDB para instaurar un gobierno golpista con él como presidente, tal como sucedió.

Hasta el momento se encuentra acusado por la Fiscalía General por cargos de corrupción y sobornos por recibir pagos ilegales de parte de la empresa JBS a su partido político. Además, está acusado por asociación ilícita y obstrucción a la justicia recibir sobornos por 587 millones de reales⁴⁴ (unos US\$188 millones) a cambio de favores políticos⁴⁵. Hasta el momento los aliados de Temer lo han sostenido en la presidencia, gracias a un bloqueo que se ha generado desde el Congreso Nacional para evitar que sea procesado formalmente por el Supremo Tribunal Federal.

Como puede notarse hasta aquí, los ministros de Dilma sobresalen principalmente por sus nexos con grandes empresas brasileiras, además, es importante recalcar que a partir de 2015, durante su segundo gobierno, Dilma comenzó a colocar ministros con una formación abiertamente neoliberal, que se posicionaban por medidas encaminadas a la reducción del gasto social y el beneficio a la gran propiedad privada, como fue el caso sobretodo de Joaquim Levy representante del Fondo Monetario Internacional y que trabajó en cargos directivos del Banco Mundial, además de colocar a otros ministros empleados o vinculados a Confederaciones patronales o potentes empresas como Odebrecht o JBS.

⁴⁴ <http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-41276014>

⁴⁵ <https://lta.reuters.com/article/topNews/idLTAKCN1BP32L-OUSLT>

Desde luego que ese franco viraje hacia el neoliberalismo no era ya parte de una conciliación de clases, sino más bien una elección abierta y pública en favor de la burguesía (Maringoni, 2017). Eso, además de provocar malestar en lo que había sido un sector crítico de izquierda que apoyó a Dilma durante las elecciones de 2014, provocó también que las bases sociales del petismo no defendieran de manera masiva al gobierno frente al golpe de Estado. Por otro lado, a las clases dominantes dejó de interesarles y ser funcional un gobierno que ya no conseguía generar gobernabilidad y hegemonía tras de la cual pudieran resguardar sus intereses reales. Existen también otros factores que habría que abordar, sin embargo, lo importante es resaltar que existió una adopción transparente del proyecto neoliberal por parte del gobierno de Dilma Rousseff y eso puede observarse claramente en las alianzas de sus propios ministros con poderes económicos nacionales y extranacionales, colocados en puestos clave del gobierno brasileiro por la presidenta petista.

Las principales empresas beneficiadas por el PT

La investigación que comenzó a partir de los cuadros de alianzas arrojó no solo nombres de los ministros de los gobiernos del PT, también mostró los nombres de las empresas que recibieron beneficios provechosos. A continuación mostraremos una lista de esas empresas:

1. Banco Azteca de Salinas Pliego
2. Banco Santander
3. BanksBoston
4. Consist
5. Coteminas
6. Globo
7. Grupo EBX OGX
8. JBS S.A.
9. Odebrecht
10. Sadia y Perdigao: **BRF**
11. Aracruz y Votorantim Celulosa: **Votorantim**

Ahora bien, por otro lado, también se realizó un seguimiento de la lista de los personajes más ricos de Brasil en un intervalo de 2002 a 2016, llegando a los siguientes resultados

Cuadro 15 Reconfiguraciones en las listas de los más ricos de Brasil 2002-2016

Año	Nombre	Empresa	Cantidad de riqueza (Billones de USD)
2002			
	Joseph y Moise Safra	Hermanos Edmond Safra	4
	Antônio Ermírio de Moraes y familia	Votorantim	3.6
	Aloysio de Andrade Faria	Banco Real, Brasil	2.8
	Júlio Bozano	Banco Bozano Simonsen	1.3
	Abilio Diniz y familia	Pão de Açúcar,	1.1
2004			
	Antonio Ermírio de Moraes	Votorantim	5.2
	Julio Bozano	Banco Bozano Simonsen	3.2
	Jorge Paulo Lemman	Ambev	2.6
	Aloysio Andrade Faria	Banco Real, Brasil	1.3
	Joseph e Moise Safra	Grupo Safra	1
2006			
	Joseph y Moise Safra	Grupo Safra	7.4
	Aloysio Andrade Faria	Banco Real, Brasil	3.8
	Jorge Paulo Lemann	AB Inbev	3.4
	Antonio Ermírio de Moraes y familia	Votorantim	3.2
	Julio Bozano	Banco Bozano Simonsen	1.6
2008			
	Eike Batista	Grupo EBX OGX	7.5
	Joseph Safra	Banco Safra/Grupo Safra	7
	Jorge Paulo Lemann	AB Inbev	5.3
	Aloysio de Andrade Faria	Banco Real, Brasil	3.1
	Dorothea Steinbruch y familia	Compañía Siderúrgica Nacional de Brasil y Grupo Vicuña	3
2010			

	Eike Batista	Grupo EBX OGX	27
	Jorge Paulo Lemann	AB Inbev	11.5
	Joseph Safra	Banco Safra/Grupo Safra	10
	Familia Steinbruch	Compañía Siderúrgica Nacional de Brasil y Grupo Vicuña	5.5
	Marcel Telles	AB Inbev	5.1
2012			
	Eike Batista	Grupo EBX OGX	30
	Joseph Safra	Banco Safra/Grupo Safra	13.8
	Antonio Ermírio de Moraes	Votorantim	12.2
	Jorge Paulo Lemann	AB Inbev	12
	Marcel Telles	AB Inbev	5.7
2014			
	Jorge Paulo Lemann	AB Inbev	19.7
	Joseph Safra	Banco Safra/Grupo Safra	16
	Marcel Herrmann Telles	AB Inbev	10.2
	João Roberto Marinho	Globo	9.1
	José Roberto Marinho	Globo	9.1
2016			
	Jorge Paulo Lemann	AB Inbev	27.8
	Joseph Safra	Banco Safra/Grupo Safra	17.2
	Marcel Herrmann Telles	AB Inbev	13
	Carlos Alberto Sicupira	AB Inbev	11.3
	Eduardo Saverin.	Co-fundador do Facebook	6.2

Fuente: Elaboración propia a partir de los sondeos de los hombres más ricos de Brasil

Como puede notarse hasta aquí, entre 2002 y 2016 tuvieron lugar distintos cambios y reconfiguraciones de los personajes que lideraban las listas de los más ricos de Brasil, resaltando ingresos de empresarios ligados a la industria cervecera como AB Inbev de Jorge Paulo Lemann, también empresas extractivistas o metalúrgicas como los grupos de Eike Batista (EBX OGX), Steinbruch (Compañía Siderúrgica Nacional) o Votorantim de José Ermírio de Moraes. Además, se nota la permanencia de los grupos económicos provenientes de esquemas financieros como el grupo Safra o Banco Real.

Lo anterior es importante a la luz de pensar que durante los gobiernos del PT existió un crecimiento notable de las empresas de cuño extractivista, metalúrgico y del agronegocio, a raíz del proyecto neodesarrollista sostenido.

En esa misma línea, el siguiente cuadro muestra, las principales empresas del agronegocio en Brasil durante 2015. Ahí aparece liderando con mucha ventaja la empresa JBS, sin embargo, años más adelante sale de las mediciones nacionales para colocarse al nivel de los máximos competidores de frigoríficos en el mundo. También aparecen empresas como BRF, surgida de la fusión entre las empresas Sadia y Perdigao; o como Fibria, que más tarde pasaría a ser parte de Votorantim, ambas con un gran peso en la actividad del agronegocio como se puede notar en la siguiente tabla.

Cuadro 16 Mayores empresas del agronegocio en Brasil según patrimonio líquido

Nombre	Sector de actividad	Origen del capital	Patrimonio líquido (Millones de Reales)
JBS	Industria de carne	Brasil	23,873.82
BRF	Aves y porcinos	Brasil	15,590.48
Fibria	Forestal, celulosa y papel	Brasil	14,564.04
GPA	Venta por mayoreo y minoreo	Brasil/Francia	10,580.00
Suzano Papel e Celulose	Forestal, celulosa y papel	Brasil	10,315.13

Fuente: Revista Globo Rural. "11º Anuario del agronegocio". Octubre de 2015, No. 11.

De la información recolectada hasta aquí, es importante resaltar las conexiones de las empresas con los gobiernos del PT, para lo cual realizaremos a continuación una breve reseña.

1. JBS S.A.

Es un grupo económico fundado en 1953 por José Batista Sobrinho y que se ha dedicado al proceso y comercialización de frigoríficos (carne bovina, suína, ovina, porcina y aviar), además de productos de higiene y biodiesel. El consorcio inició cuando Batista comenzó a abastecer de carne a las empresas constructoras que levantaban la ciudad de Brasilia.

El crecimiento de la empresa fue tal que a partir de 2007 logró comprar las operaciones de Swift en Argentina e insertarse en la Bolsa de Valores de Brasil, consolidándose como el mayor frigorífico brasileño.

A partir de entonces ha sostenido una carrera ascendente en los negocios y sostiene a su cargo las empresas Swift, Friboi, Maturatta Seara, Cabaña Las Lilas, Apeti, Bertin, Anglo, Tama, Bordon, Organic Beef, Sola, Marca Target, Hereford, Vigor, Leco, Faixa Azul, Serrabela, Mesa, Carmelita, Danubio, Franciscano, Biobriz, Lavarte, Minuano, Amelia, Pilgrim's, Gold Kist Farms, Pierce, 1855 y Big Pollo. Todas esas empresas se encuentran esparcidas en 22 países del mundo⁴⁶.

Para 2013, la empresa que quedaba en propiedad de Joesley y Wesley Batista, hijos de José Batista padre, ya valía alrededor R\$ 100 billones. Para ese entonces se consolidó como el primer frigorífico del mundo (actualmente se mantiene en los primeros números globales), después de haber adquirido las estadounidenses Swift Foods Company en USD \$ 1, 4 billones durante 2007 y Smithfield Beef USD\$ 565 millones durante 2008, además de que en el año 2009 compró el 64% de Pilgrim's Pride por USD\$ 1.8 billones y la empresa brasileña Bertin⁴⁷.

La empresa se convirtió en centro de conflicto cuando se destapó una serie de casos de corrupción que implicaron a distintos personajes políticos de todos los partidos políticos, hecho que evidenció también el nexo de la empresa con el Partido de los Trabajadores. El caso conocido como Lava Jato se encuentra abierto y se realizan hasta el momento diversas delaciones de los dueños, Joesley y Wesley Batista, señalando a políticos que fueron beneficiados por dinero emitido desde su empresa a cambio de favores y a través de financiamientos.

⁴⁶ <https://www.istoedinheiro.com.br/noticias/negocios/20110615/aposta-jbs-papel/3126.shtml>

⁴⁷ <https://www.istoedinheiro.com.br/noticias/negocios/20130614/dois-irmaos-topo-mundo/3886.shtml>

Lo más importante a destacar hasta el momento es que tal como lo demuestran estos intercambios de “favores”, existió una profunda alianza entre representantes del Estado y el conglomerado JBS, mismas que se ven reflejadas en las relaciones de corrupción entre ministros de estado de los gobiernos del PT y la empresa.

Si bien en los apartados anteriores ya tratamos esas relaciones político-económicas, es importante dejar anotado que el principal intermediario entre el gobierno y la empresa fue el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES), como ya se demostró anteriormente. Además, estos favores encontraron su recompensa, ya que por ejemplo, JBS se convirtió en la mayor empresa financiadora de la campaña de Dilma Rousseff, llegando a aportar hasta R\$ 5 millones⁴⁸ durante 2014.

Como puede notarse, tan solo en el rubro económico y de crecimiento del JBS, el papel del BNDES fue fundamental, demostrando una alianza profunda entre ambos. Fue el Estado quien catapultó a esta empresa para que se insertase en el escenario internacional y se transformase en una potencia productora y comercializadora de frigoríficos.

2. Grupo EBX OGX

Este grupo es propiedad mayoritaria del multimillonario Eike Batista, quien fuera el hombre más rico de Brasil entre 2008 y 2012 y se conforma a partir de las empresas OGX (petróleo), MPX (energía), LLX (logística), MMX (minería), OSX (industria naval offshore) y CCX (minería de carbón), lo cual quiere decir que se enfoca principalmente a actividades extractivas y mineras en Brasil, Chile y Colombia.

Eike Batista es hijo de Eliezer Batista da Silva, quien fuera ministro de Minas y Energía del Gobierno de João Goulart. Comenzó su actividad comercial como intermediario en el comercio de oro y diamantes en la Amazonia, más tarde, con su dirección en la empresa TVX Gold pasó a comprar minas en Brasil, Canadá y Chile. El grupo económico mantuvo una relación estrecha con Lula y Dilma en diversos momentos, incluso durante 2013 ambos líderes comenzaron a ejercer presión para desviar inversiones asiáticas en Espírito Santo, estado con importantes intereses

⁴⁸<http://es.brasil247.com/es/247/poder/2711/Gigantes-JBS-Ambev-y-OAS-lideran-donaciones-a-campa%C3%B1as.htm>

para el grupo de Batista, quien para ese entonces ya sostenía una fuerte deuda de US\$ 8,000 millones⁴⁹.

Batista, luego de haber sido el hombre más rico de Brasil, se vio implicado desde 2014 en acciones legales por malversaciones, lavado de dinero y “ataques contra el mercado financiero”, llegando al bloqueo de sus cuentas en Rio de Janeiro, por parte de instancias jurídicas⁵⁰. Durante 2016 el empresario fue imputado en el caso Lava Jato, por supuesta participación en el pago de propinas a Petrobrás, tras haberse reunido con Guido Mantega, ex ministro del gobierno de Dilma Rousseff, para entregar dinero para campañas electorales⁵¹, después de lo cual la empresa OSX, (del grupo EBX) recibió permisos para construir infraestructuras de plataformas de Petrobras⁵². Otro supuesto intermediario en ese tipo de operaciones habría sido también el petista José Dirceu, implicado en otros escándalos de corrupción, además de André Esteves, quien recibió asesoramiento directo de Batista..

A inicios de 2017, Batista aseguró que se incluiría en el ejercicio de delaciones de distintos personajes públicos, como el ex gobernador de Sao Paulo, Fernando Haddad, el ex ministro Guido Mantega y el exgobernador Sergio Cabral.⁵³ Según sus declaraciones, incluiría también a Lula Da Silva dentro de la delación, sin embargo hasta el momento eso no ha sucedido.

3. Grupo Anheuser-Busch (AB) Inbev

Este grupo que mantiene su sede en Bélgica controla el 25% del mercado mundial de fabricación de cerveza y en él se agrupan distintas empresas cerveceras como

⁴⁹ Ver: <http://www.elmostrador.cl/mercados/sin-editar-mercado/2013/03/28/lula-hace-de-lobbista-para-ayudar-al-magnate-brasileno-eike-batista/> [Con acceso el 20/12/17]

⁵⁰ Ver: https://brasil.elpais.com/brasil/2016/09/22/politica/1474558444_020369.html. [Con acceso el 20/12/17]

⁵¹ Ver: <http://www.bbc.com/portuguese/brasil-38755138> [Con acceso el 20/12/17]

⁵² Ver: https://brasil.elpais.com/brasil/2016/09/22/politica/1474558444_020369.html. [Con acceso el 20/12/17]

⁵³ Ver: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/07/1901440-eike-prepara-delacao-que-cita-lula-mantega-e-cabral.shtml?loggedpaywall> [Con acceso el 20/12/17]

Budweiser, Corona, Beck's, Skol, Brahma, Quilmes, Paceaña, Pilsen, Norteña, Negra Modelo y Modelo Especial.

La historia del grupo se remonta al crecimiento de la empresa Ambev del brasileño Jorge Paulo Lemann, quien se insertó en el mercado financiero a partir del Banco Garantía, mismo que luego vendió para conformar Ambev a partir de la fusión de las empresas cerveceras brasileiras Brahma y la Compañía Antártica Paulista, controlando con ello la mayor parte del mercado cervecero de Brasil.

En 2004 Ambev se unió a la cervecera belga Interbrew, conformando el conglomerado Inbev. Más tarde, tras esta nueva fusión, la empresa logró comprar Anheuser-Busch, tomando forma su actual nombre, que abreviado es AB Inbev. Con estas múltiples fusiones se conformó el mayor Grupo Económico cervecero del mundo, lo que ha llevado a su principal accionista brasileiro Jorge Paulo Lemann a ser el hombre más rico de Brasil por tres veces consecutivas los últimos tres años. Después de esas múltiples fusiones, el conglomerado sostiene sus acciones distribuidas en distintos países, aun cuando persiste su principal pie en las empresas brasileiras.

En sus nexos políticos Lemann mantuvo reuniones en el Palacio de Planalto con la presidenta Dilma Rousseff⁵⁴, además de que llegó a proponer un acuerdo entre Fernando Henrique Cardoso y Luíz Inácio Lula Da Silva “para salir de la crisis”, dejando claro cierto pragmatismo y el apoyo hacia ambos bandos sin adhesión ideológica⁵⁵. El mismo Lula reveló que realizó diversas conferencias para la empresa Ambev, recibiendo pagos por esa actividad⁵⁶.

Sin embargo, lo más importante a resaltar es que Ambev consiguió catapultarse al mercado mundial al igual que otros grandes consorcios como JBS a partir del apoyo del BNDES y sus préstamos⁵⁷, los cuales fueron fundamentales para el crecimiento de Ambev, pues tan solo en marzo de 2004, la empresa contaba con un crédito de R\$ 484 millones⁵⁸.

⁵⁴ <https://veja.abril.com.br/blog/radar/lemann-e-dilma/>

⁵⁵ <https://www.brasil247.com/pt/247/brasil/206131/Lemann-prop%C3%B5e-di%C3%A1logo-e-uni%C3%A3o-entre-Lula-e-FHC.htm>

⁵⁶ <http://m.folha.uol.com.br/poder/2011/05/914761-lula-da-palestra-secreta-a-executivos-da-ambev-na-bahia.shtml>

⁵⁷ <https://oglobo.globo.com/economia/bndes-realiza-grandes-emprestimos-para-pequenos-avancos-3471167>

⁵⁸ <http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u82543.shtml>

Además, en respuesta, el gran consorcio realizó importantes aportaciones de donaciones a las campañas electorales en 2014. Estas sumaron en total 6,7 millones de reales, de los cuales 4 millones fueron a Dilma Rousseff, 1,2 millones a Aécio Neves y 1,4 millones a Eduardo Campos⁵⁹.

4. Votorantim S.A.

Este grupo económico se compone de sectores minerales, siderúrgicos, cementeros y energéticos y logró registrar un lucro líquido de R\$ 382 millones durante 2015.

Su historia se remonta a partir de que José Ermírio de Moraes heredó la industria de tejido de su suegro y aumentó su liquidez, llegando a variar la inversión a otros sectores productivos tras la adquisición de la Compañía Nitro Química y la Compañía Brasileira de Aluminio.

A la muerte del dueño, asumieron sus hijos, principalmente Antonio Ermírio de Moraes, quien logró ingresar a la lista de los más ricos de Brasil, como puede observarse en la tabla anteriormente expuesta.

En este momento el grupo engloba empresas de cemento como Engemix y Holcim adquiridas en 2002 la primera y 2004 la segunda. En el sector siderúrgico tiene Siderúrgica Barra Mansa, misma que se expande hasta Argentina y Colombia. En aluminios tiene refinerías en Minas Gerais pero también en distintas partes del Perú.

Por otro lado, Votorantim entró al mercado de celulosa y papel desde 1988, sin embargo fue en 2009 cuando se colocó en los más altos niveles de producción nacional con la compra de la empresa Aracruz y Celulosa, conformando la mayor empresa de celulosa del mundo: Fibria. Cabe destacar que Fibria se colocó como la tercer mayor industria proveniente de la manufactura, producción de materia prima y agronegocio durante 2005, llegando a sostener un patrimonio líquido de R\$ 14,564.04 millones (Ver cuadro 2 “Mayores empresas del agronegocio en Brasil según patrimonio líquido).

⁵⁹ <http://es.brasil247.com/es/247/poder/2711/Gigantes-JBS-Ambev-y-OAS-lideran-donaciones-a-campa%C3%B1as.htm>

En cuanto a sus relaciones con el gobierno petista, es fundamental señalar que la compra de la empresa Aracruz implicó un desembolso de R\$ 5,6 billones, del cual el BNDES aportó R\$ 2,4 billones⁶⁰, después de lo cual no resulta extraño ver a Fibria como una de las mayores empresas beneficiadas por el BNDES.⁶¹

En otras palabras, el BNDES fue esencial en la fusión de dos grandes empresas de celulosa, permitiendo con ello catapultarlas al mercado mundial bajo el nombre de Fibria, además de que esto consiguió consolidar el monopolio interno brasileiro y fortalecer al grupo Votorantim.

5. BRF

Este conglomerado surgió a raíz de la fusión de dos grandes empresas frigoríficas brasileiras: Sadia y Perdigão durante 2009, bajo la batuta de José Antonio do Prado Fay. Cabe mencionar que en esa fusión participó activamente el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES), con una aportación de alrededor de USD\$ 235 millones.

Ya en 2011 BRF logró adquirir las empresas Avex y Dánica, de origen argentino.

Para 2013, la empresa cambió de presidente del Consejo de Administración, pasando la batuta a Abilio Diniz, quien ya desde 2002 ocupaba importantes lugares en la lista de los hombres más ricos de Brasil, y quien consiguió establecer fuertes alianzas con el grupo Pan de Azúcar (tiendas de mayoreo y canasta básica).

Tan solo durante 2015 el grupo procesó mil 700 millones de aves y 10 millones de porcinos y bovinos, sosteniendo sus dos principales unidades en el estado de Goiás y en Minas Gerais, sin embargo, eso no implicó una reducción de sus exportaciones, pues además de tener empresas en Argentina, también tiene en otras partes del mundo como la distribuidora Alyasra Food Company de Kuwait y otras empresas en Medio Oriente y Asia.

Para 2015, BRF ocupaba el segundo lugar en la lista de las mayores empresas de agronegocios y frigoríficos de Brasil, con un patrimonio líquido de R\$ 15 mil 590 millones, tan solo detrás de la gigante JBS (Ver cuadro 2 “Mayores empresas del agronegocio en Brasil según patrimonio líquido).

⁶⁰ <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi2101200902.htm>

⁶¹ <https://oglobo.globo.com/economia/bndes-realiza-grandes-emprestimos-para-pequenos-avancos-3471167#ixzz51vMCnQZA>

BRF también fue de las empresas que más fueron beneficiadas por el BNDES⁶² y que gracias a sus créditos lograron adquirir otras empresas en otras partes del mundo, conformándose como una multinacional aunque manteniendo su sede en Brasil.

6. Compañía Siderúrgica Nacional de Brasil y Grupo Vicuña

La CSN es una de las empresas más productivas, que explota minas de hierro en Minas Gerais, en Santa Catarina y en Río de Janeiro, fue creada como estatal durante el mandato del expresidente Getúlio Vargas, con la intención de suministrar acero durante la 2ª Guerra Mundial, sin embargo ya para 1993 este gran consorcio pasó a ser privatizado.

Actualmente, llega a producir solo de su fábrica más avanzada 6 millones de toneladas de acero bruto y se encuentra bajo la propiedad de la familia Steinbruch, principalmente de Dorothea Steinbruch, viuda del ex dueño Mendel Steinbruch y madre de Benjamín Steinbruch. Esa misma familia sostiene posesión también del grupo Vicuña y el Banco Fibre, que sumados a la CSN han permitido que los Steinbruch se agregaran a la lista de los más ricos en Brasil desde 2008, llegando a reunir más de 5.5 billones de dólares en activos.

Sin embargo, esta incursión en la lista de los más ricos del país no resulta extraña a la luz de su relación con el gobierno del PT. Esta compañía dedicada a actividades extractivas y mineras, ocupó el lugar número 7 en una lista de las empresas con mayores inversiones del Banco Nacional de Desarrollo durante 2008, recibiendo la participación directa del BNDESPAR en 3,64% de su capital (Boito Jr, 2012, pág. 82).

Por otro lado, el hijo de Dorothea, Benjamín Steinbruch ha venido jugando un papel importante para el PT, por su participación en la Federación de las Industrias del Estado de São Paulo (FIESP), pues ocupó el puesto de vicepresidente a lado del

⁶²<https://oglobo.globo.com/economia/bndes-realiza-grandes-emprestimos-para-pequenos-avan-cos-3471167#ixzz51vLdqyke>

presidente de la federación Paulo Skaf, quien fue siempre considerado cercano a Lula, debido a su apoyo expresado durante la crisis del Mensalão (Ibíd, p. 89).

Armando Boito Jr. realizó una revisión exhaustiva de las publicaciones de la *Revista de la Indústria* (circular de la Fiesp), mostrando que la nueva dirección de Skaf llamaba a asumir una posición proactiva respecto al gobierno Lula para “levantar nuevamente la bandera del desarrollo y de la industria nacional” y con ello, -desde la perspectiva del mismo Benjamín Steinbruch-, incentivar “la formación de grandes grupos nacionales internacionalizados” (Boito Jr., 2012, p. 87), cosa que corresponde muy bien con la acción económica de los gobiernos del PT.

Finalmente, es importante señalar que actualmente Benjamín Steinbruch y Paulo Skaf se encuentran querellados ante delaciones del caso Odebrecht, en el que se les acusa a ambos de triangular R\$14 millones entre la empresa Odebrecht, ellos mismos y el ex ministro de hacienda Antonio Palocci⁶³, sin embargo, la acusación apenas se realizó en octubre de 2017 y falta tiempo para saber los resultados de la investigación.

7. Relación Odebrecht-Petrobras

Odebrecht es una potente empresa brasileira fundada a mediados del siglo XX y que se mantiene activa en distintas ramas de la petroquímica, la construcción y transportes. Se volvió foco de la política nacional a partir de que fueron destapados distintos casos de corrupción en los que se evidenciaron sobornos multimillonarios a empleados, ministros y actores políticos de Brasil, Colombia, México, Perú, Panamá, Ecuador, Argentina y Uruguay a través de los cuales favorecieron a la empresa a cambio de licitaciones que permitieran a Odebrecht participar en grandes proyectos de empresas paraestatales y recibir millones de dólares en utilidades. A finales de 2017 se calculaban en USD\$ 788 millones⁶⁴ los sobornos otorgados.

⁶³ <https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/pf-abre-inquerito-para-investigar-paulo-skaf-palocci-e-presidente-da-csn.ghtml>

⁶⁴ https://elpais.com/internacional/2017/11/08/actualidad/1510141304_297529.html

En dichos casos de corrupción se encontraba implicada también la mayor empresa brasileira conocida como Petrobras, la cual fue fundada durante el gobierno de Getúlio Vargas y que se mantiene con capital mayoritariamente estatal, pero que conserva capital de iniciativa privada.

Petrobras ha sido considerada la empresa más valiosa de Brasil entre 2008 y 2011⁶⁵, solo superada por la cervecera Skol entre 2012 y 2013, lo que la coloca además entre las 400 empresas mundiales más poderosas del mundo.

A partir de 2006 Petrobras fue clave en el descubrimiento de una de las mayores reservas de petróleo de aguas profundas del mundo, la Pre-Sal, ubicada entre los Estados de Espírito Santo y Santa Catarina, lo que generó expectativas de inversión y desarrollo del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) y lo que permitió que la presidenta Dilma Rousseff anunciara que el Presal subsidiaría la educación pública.

La relación Odebrecht-Petrobras se sostuvo fundamentalmente debido a desvíos de recursos de la paraestatal petrolera a la empresa constructora a cambio de pagos de Odebrecht hacia distintos funcionarios del gobierno del PT y de Petrobras. Hasta marzo de 2017 se habían abierto 57 procesos penales contra 260 acusados entre los que se encuentran el actual presidente golpista Michel Temer, el ex presidente de la cámara de diputados y fraguador del golpe, Eduardo Cunha, además de otros funcionarios de los anteriores gobiernos como Antonio Palocci, José Dirceu.

Ese esquema de la relación Odebrecht-Petrobras demuestra no sólo la profundidad y el alcance estructural de la corrupción en sí, sino que esta relación comprueba profundos vínculos entre el Estado y la iniciativa privada, revelando un compromiso radical.

⁶⁵ <https://www.istoedinheiro.com.br/noticias/negocios/20120502/marcas-mais-valiosas-brasil-2012/1638.shtml>

El rol del BNDES y el fortalecimiento de la burguesía productiva interna

Para completar el cuadro que muestra que los gobiernos del PT funcionaron a través de fuertes alianzas con la burguesía, es necesario señalar el papel fundamental que jugó el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) durante este período. Para darse una idea de la fuerza que se le otorgó al BNDES, es importante mencionar que mantuvo un incremento de sus inversiones en alrededor del 470%, alcanzando a desembolsar aproximadamente 100 mil millones de dólares en 2010, lo cual fue el equivalente al 7% del PIB nacional (Zibechi, 2012, pág. 135).

El BNDES fue utilizado durante los gobiernos petistas como un mecanismo para inyectar insumos a través de créditos, préstamos y concesiones a la gran burguesía nacional. Sin embargo, si bien, el PT otorgó millones de reales a los programas sociales, la cantidad que se destinó a las grandes empresas no es comparable como lo muestra el siguiente cuadro:

QUEM LEVA O DINHEIRO DO BNDES 			
	2008	2009	2010 (até junho)
Total (R\$ bilhões)	90,8	136,3	59,3
Grande empresa	76%	82,5%	63,8%
Média empresa	9,3%	5,3%	11%
Pequena empresa	5,7%	4,3%	7,8%
Microempresa	4,3%	4,2%	10%
Pessoa física	4,7%	3,7%	7,4%

Fonte: BNDES

Fuente: *IstoéDinheiro*⁶⁶

Como puede notarse, durante 2008 se destinó el 76% de inversiones a las grandes empresas, mientras que a las pequeñas empresas se les asignó el 5.7%. Para 2010 se dedicó el 63.8% a las grandes empresas y el 10% a las pequeñas. Desde luego que eso fue acompañado por una disminución de inversiones del BNDES durante los períodos de impacto de la crisis económica de 2008, sin embargo, eso no implicó

⁶⁶ <https://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20100818/quem-entende-bndes/4588.shtml>

un cambio en la estrategia de apoyo a las grandes empresas. Como ejemplo de lo anterior tenemos la fusión de las empresas Sadia y Perdigao en mayo de 2009. Ambas se encargaban de procesar frigoríficos y dieron lugar a un nuevo conglomerado llamado Brasil Foods BRF. En esta fusión el BNDES aportó alrededor de USD\$ 235 millones, adquiriendo el 3% de las acciones para permitir el rescate de ambas empresas frente a la crisis de 2008 y permitiendo que la nueva empresa llamada BRF se convirtiera en controladora del 25% del mercado mundial de aves y adquiriendo ventas por 15 mil millones de dólares anuales. Otro movimiento fue el de la fusión entre las empresas de celulosa y papel Aracruz y Votorantim Celulosa y papel en septiembre de 2009. En esta ocasión el BNDES invirtió USD\$ 1,400 millones, adquiriendo el 34.9% de la nueva empresa (Zibechi, 2012, pp.137-138). Otro caso, -uno de los más importantes- es el de la inversión del BNDES en las fusiones de JBS al otorgarle préstamos que sumaron hasta R\$ 1.1 billones en acciones para que esta pudiese adquirir la empresa Swift en 2007 y los frigoríficos Tasman y National Beef en 2008. Además, el BNDES también aportó R\$3.4 billones a JBS para adquirir la empresa estadounidense Pilgrim's, realizados a través de J&F Participaciones Financieras, lo que significó que el BNDES ampliaría sus participaciones en la empresa pasando de un 17% a un 31%⁶⁷

Otro ejemplo es la empresa Itaipu, que inició en la industria de los frigoríficos pero que se consolidó como empresa potente a partir de la instalación de usinas hidroeléctricas. Tan sólo esa empresa puede producir 14 mil MW que es suficiente para abastecer a diez millones de casas. En 2012 esta se planteó conseguir generar otros 6,7 mil megawatts a partir de 42 usinas en todo Brasil.

Esa empresa hasta 2012 se sostenía de una inversión de R\$8 billones, de los cuales el 80% eran deudas a largo plazo. Uno de los principales inversores era el BNDES junto al Banco del Nordeste, quienes abonaban el 25% de esa gran empresa hidroeléctrica⁶⁸.

Como puede observarse, el BNDES fue un engranaje esencial en la relación entre el gobierno y las grandes empresas. Pero no solo eso, el BNDES fue un auténtico instrumento que potenciaba a la burguesía interna para catapultarse y competir en

⁶⁷ <https://www.istoedinheiro.com.br/noticias/negocios/20110615/aposta-jbs-papel/3126.shtml>

⁶⁸ <https://www.istoedinheiro.com.br/noticias/negocios/20100818/itaipu-dos-bertin/4571.shtml>

el mercado mundial, como fue el caso de JBS. Fue el capital del Estado a partir de los apoyos del BNDES, el que consiguió colocar a JBS como el principal frigorífico del mundo, sin embargo, aunque pareciera que eso iba acorde con el proyecto neodesarrollista del PT (es decir, el intento de generar industria interna que se situase en el plano mundial, consiguiendo el desarrollo interno nacional), lo que realmente aconteció fue que los procesos de circulación de esa empresa se situaron en países como Estados Unidos, generando que las ganancias de JBS girasen en ese plano mundial y no volvieran a Brasil a modo de capital nacional. Tan es así que entre las listas de los más ricos de Brasil no se contempla a JBS, pues sus capitales no están en el plano nacional, se dispersan en el mercado mundial. Esto puede ser considerado el reflejo de un fracaso del desarrollo de la economía interna brasileira y sí la reafirmación de la condición dependiente de su economía.

IV. Las contradicciones de la conciliación de clases y del frente neodesarrollista: las imposibilidades de la alianza entre la burguesía interna y el PT y la adopción del neoliberalismo

Retomando una metodología analítica que atiende a las relaciones sociales que conforman al Estado, en este trabajo se ha cuestionado y discutido la supuesta llegada de Brasil a un posible período “posneoliberal”. Uno de los principales argumentos que se han sostenido a lo largo de esta investigación es que la conciliación de clases de los gobiernos del Partido de los Trabajadores conformó ataduras políticas que le impidieron posicionarse desde un proyecto transformador. Como se ha mencionado hasta aquí, el PT vivió un proceso de conversión ideológica que pasó de ser un partido de oposición de izquierda y parte de los movimientos sociales a ser un partido abiertamente neoliberal. Esa conversión implicó una renuncia a la revolución y a una idea distinta de sociedad y posteriormente un abrazo a un proyecto neodesarrollista que a todas luces fracasó al terminar subordinándose a las lógicas impuestas por los grupos dominantes, quienes a su vez mantuvieron durante todo ese tiempo intocados sus nichos de poder.

Tras la crisis política generada por los gobiernos de Fernando Collor y Fernando Henrique Cardoso, las clases dominantes vieron también en crisis la posibilidad de sostener un modelo neoliberal que se adecuara a las exigencias del mercado global, pues los grupos sostenedores del proyecto neoliberal se mostraron incapaces de generar hegemonía y consenso que dieran gobernabilidad y estabilidad suficientes al Estado brasileño.

El descontento social hacia el neoliberalismo abrió la posibilidad de que un proyecto progresista alcanzara el gobierno. Al mismo tiempo, frente a la crisis hegemónica de los grupos dominantes, estos se vieron obligados a ceder la oportunidad de gobernar a un candidato ya moderado, que permitiría dotar de cierto consenso y cierta gobernabilidad al Estado brasileño. Fue así como Luíz Inácio Lula Da Silva pudo gobernar gracias a la acumulación del descontento social; a su propia moderación que ganó el beneficio de la duda de los grupos dominantes; y a la crisis de hegemonía del proyecto neoliberal.

También aconteció que esa crisis de hegemonía neoliberal acarreó tensiones entre las distintas fracciones de la burguesía, ya que después de la crisis económica de 1999, el nuevo ciclo comercial obligó a concentrar la economía en la producción material, es decir en la actividad de la burguesía agroexportadora y extractivista, en detrimento de la burguesía bancaria (Filgueiras & Goncalves, 2007, pág. 181), de ese modo, la burguesía enfocada al proceso productivo para exportación ganó peso económico, al mismo tiempo que emergía un nuevo actor político (el PT) que precisaba de alianzas con el poder económico para lograr gobernar.

Por medio de la política de conciliación de clases, el PT pudo sostener abiertamente una posición pragmática de gobierno que le permitió realizar una alianza con los actores de la burguesía y conformar un frente político al interior del bloque de poder del Estado brasileño. Sin embargo, la conciliación de clases tuvo ciertos matices y no todas las fracciones de la burguesía fueron representadas al mismo nivel por el gobierno, en ese sentido coincidimos con Armando Boito Jr. en señalar que la fracción de la burguesía más beneficiada por los gobiernos del PT, fue la burguesía interna (Boito Jr, 2017) (Boito Jr, 2012) (Berringer, 2014) conformada a partir de un importante componente productivo (Filgueiras & Goncalves, 2007).

Como señalan tanto Boito como Filgueiras y Gonçalves, sí existe un matiz entre la burguesía que aglutina a los grandes grupos económicos productivos y la burguesía plenamente trasnacionalizada a pesar de que una y otra se mantienen coaligadas en todo momento. Eso no quiere decir que la burguesía interna se abstenga de tener una fuerte raíz financiera o trasnacional, pues es en ese contexto que consigue su presencia en el mercado. Es importante entender a esa burguesía interna como una fracción de clase que en todo momento se encuentra subordinada y que ocupa un lugar productivo y extractivo en la relación dependiente centro-periferia, por lo que no se escinde ni se rebela frente a las lógicas del mercado mundial.

Se nombra burguesía interna y no burguesía nacional como la del siglo XX, puesto que carece de un proyecto político económico de desarrollo de las fuerzas productivas nacionales para la constitución de un mercado interno fuerte y un Estado nacional con autonomía plena de los centros mundiales. Tampoco se puede entender a la burguesía interna como una burguesía plenamente trasnacionalizada, ya que juegan en el mapa económico de Brasil dos elementos importantes: el primero es que por su misma condición geopolítica y por el tamaño geográfico, la burguesía brasileña tiene una capacidad productiva distinta a otras burguesías de la región, lo cual implica que esta genera una cantidad enorme de exportaciones, lo que a su vez exige un ajuste productivo y un mayor poder económico de presión, aunque este siga subordinadamente las lógicas del mercado trasnacional en todo momento. En suma, es una burguesía subordinada y seguidora de las lógicas de reproducción mundial del capital pero con suficiente capacidad para ejercer su voz propia en los intereses político-económicos brasileños.

El segundo elemento es que esa burguesía, además, posee un carácter expansivo en el cono sur, generando importantes inversiones y negocios en otros países de la región como Paraguay, Uruguay, Ecuador o Bolivia, lo que puede ser entendido como un carácter propio de un desarrollismo nacional internacionalizado subimperial (León, 2015):

“Como ya hemos insistido, en términos económicos el subimperialismo brasileño se caracterizó esencialmente por ser un tipo peculiar de prácticas geopolíticas expansionistas de competencia por mercados y mejores condiciones para su producción, las cuales se desplegarían en los años que van de 1960 a 1970 y cuya

peculiaridad consistiría en que la capacidad productiva nacional brasileña se internacionalizó en franca integración con el imperio estadounidense (...)

Un nuevo tipo de prácticas económicas expansionistas por parte de Brasil que hoy en día establece mediante acuerdos productivos del capital nacional brasileño con el capital internacional mundializado, pero en colaboración geopolítica de conveniencia mutua con Estados Unidos. Es así un peculiar tipo de desarrollismo nacional internacionalizado que además le brinda a Brasil una condición de "Estado Pivote" desde el que el capital internacional mundializado irradia su dominio económico y político a toda la región" (León, 2015, pág. 48).

Durante los gobiernos de Luíz Inácio Lula Da Silva y Dilma Rousseff se fortaleció una alianza entre el gobierno y la burguesía interna que configuró un breve frente político al interior del bloque de poder que dio vida al neodesarrollismo como intento de superación del proyecto neoliberal. Ese frente fue articulándose de diferentes maneras, aunque a la larga no logró cuajar y se desvaneció posterior a las crisis económica y política.

Sustentando su política económica en las exportaciones y en el reforzamiento del patrón de exportación de producción especializada, los gobiernos del PT mantuvieron importantes concesiones a la burguesía productiva interna. Como primer punto señalamos que durante sus mandatos, el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) fue actor clave en el otorgamiento de créditos a importantes empresas de la burguesía interna que le permitieron a esta última catapultarse al mercado regional y al mercado mundial. La intensidad del uso del BNDES en la política económica del gobierno petista fue incrementando a lo largo de sus períodos, alcanzando un máximo punto durante el primer gobierno de Dilma Rousseff. En 2009 los aportes económicos del Estado al BNDES eran de alrededor de 100 billones de reales brasileños, pero ya para el primer mandato del gobierno Dilma alcanzó a la cantidad de 400 billones de reales (Singer, 2015, pág. 47)

Como se mencionó en el apartado anterior, el BNDES participó en la fusión de las empresas Sadia y Perdigão S.A., de Aracruz y Votorantim y en la adquisición de Pilgrim's por parte de JBS, después de lo cual esa empresa se convirtió en uno de los mayores frigoríficos del mundo.

En ese rubro es importante también señalar el crecimiento del número de empresarios en los principales lugares de los personajes más ricos de Brasil. Para 2002 sólo Antônio Ermírio de Moraes, dueño de la empresa Votorantim S.A.

(metalurgia, energía y celulosa) se encontraba en el puesto de los 5 empresarios más ricos, mientras el resto de los lugares eran ocupados por banqueros o comerciantes. Para 2008 ya estaban insertos en esa lista Eike Batista, dueño de Grupo EBX OGX (extractivismo), Jorge Paulo Lemann, dueño de la cervecera AB Inbev, así como su socio Marcel Telles, y la familia Steinbruch, dueños de la Compañía Siderúrgica Nacional de Brasil y Grupo Vicuña.

Para 2012 se sostenían en la lista Batista, Lemann, Ermírio de Moraes y Telles. En todo ese período se sostuvo como parte de los más ricos el Banco Safra dominado por Joseph Safra.

Uno de los argumentos esgrimidos para desdeñar la conceptualización de la burguesía interna ha sido que esta no ha sido bien señalada, descrita y delimitada. Abonando a esa discusión los datos recabados a lo largo de los apartados anteriores muestran que hubo un importante nexo entre los gobiernos del PT y grupos económicos de cuño extractivista como EBX OGX o la Compañía Siderúrgica Nacional; constructoras de infraestructura como Votorantim y Odebrecht; e industrias de alimentos, frigoríficos y del agronegocio como JBS, BRF o AB Inbev. Todos estos grupos económicos sostuvieron nexos importantes con el PT, recibiendo créditos del BNDES, otorgando propinas y sobornos a cambio de licitaciones en grandes proyectos de construcción, extracción energética, concesiones, y una larga lista de actividades. Por la vía legal y por la vía ilegal, la burguesía interna se fortaleció y se potenció, llegando a ocupar lugares importantes ya en el mercado multinacional. Eso quiere decir que fue gracias al Estado que la burguesía interna logró insertarse como poder económico en el mercado global, fue el Estado quien desencadenó el proceso por medio del cual los grupos económicos nacionales lograron consolidarse como grandes conglomerados multinacionales, como es el caso de la mayoría de las empresas aquí estudiadas, pero sobretudo en los casos de JBS o AB Inbev, que superaron los límites del mercado regional para conformarse como los más importantes grupos de su rama a nivel internacional. En otros casos como BRF o Votorantim, el Estado permitió que se colocaran en los primeros lugares a escala regional gracias a los créditos otorgados, que fueron palanca que les permitió comprar o fusionarse con otras empresas de su rama económica.

Existe un segundo elemento que evidencia una alianza entre el PT y la burguesía productiva interna y se observa en el modo de la conformación del Consejo de Desarrollo Económico y Social (CDES). Ese órgano fue creado en enero de 2003 por el entonces presidente Luíz Inácio Lula Da Silva a través de la Medida Provisoria número 103 y tenía la función de generar un nexo de asesoramiento al gobierno en materia de política económica, es decir, era un órgano de representación económica frente al poder político. El consejo se formaba por 14 ministros de Estado, entre los que se encontraban el Jefe de la Casa Civil, la Secretaría general de la presidencia, el Ministro de hacienda, el ministro de planeación, el Ministro de desarrollo, industria y comercio exterior, el Ministro de desarrollo social, el Ministro de trabajo y el Presidente del Banco Central, entre otros. La presencia de tal cantidad de ministerios con un rol clave en la política económica nacional habla de la importancia del consejo. En cuanto a la representatividad, se tiene que además de los ministros, el 52% de los consejeros pertenecían al sector empresarial, 16% a sindicalistas, 14% a académicos e intelectuales y 18% a entidades de la sociedad civil (Pereira Guiot, 2015, pág. 94).

Dentro de la representación de los empresarios se encuentra que 90 empresarios de 147, o sea el 62% de los empresarios representaba a sectores productivos extractivos e industriales (Pereira Guiot, 2015, pág. 105). Eso no quiere decir que no existiera una relación simultánea entre el capital financiero plenamente transnacional y el PT, sin embargo, sí existía una mayor representación del sector productivo interno subordinado a la relación con el capital transnacional.

Del CDES emanó una Agenda para el Nuevo Ciclo de Desarrollo (ANCD) que fue arropada rápidamente por el Ministro de Hacienda Guido Mantega, por el Ministro de Desarrollo, Industria y Comercio João Jorge y por el director del BNDES Luciano Coutinho. Ese documento, elaborado a inicios de 2010 plantea:

“Hay una fuerte convergencia entre los consejeros y consejeras del CDES en cuanto a la necesidad de, en esta coyuntura externa inestable, evitar movimientos especulativos en el mercado financiero y de commodities, actuando en el sentido del establecimiento de un marco regulatorio adecuado; perfeccionar la política cambiaria y de impuestos para evitar la valorización excesiva del real y minimizar los prejuicios de los exportadores; difundir los mecanismos e instrumentos de apoyo a la innovación, de forma de crear un ambiente favorable al proceso de agregación de valor a los productos comercializables e incentivar empresas brasileñas exportadoras; invertir en infraestructura y logística para reducir los

costos de producción y facilitar el comercio exterior; acompañar y supervisar movimientos del capital externo especulativo e incentivar ingresos de inversión volcados para el sector productivo”⁶⁹ (Social., 2011, págs. 18-19)

Un tercer elemento que muestra una serie de concesiones por parte de los gobiernos del PT hacia la burguesía productiva interna parte de la política fiscal y monetaria no del petismo en general, pero sí del primer gobierno de Dilma Rousseff. André Singer realiza recuperación de las tensiones que fueron provocándose a partir de una batalla en materia de política económica entre el gobierno Dilma y el poder financiero de los bancos entre 2011 y 2013. Para el autor, desde la designación de Guido Mantega en el Ministerio de Hacienda por orden de la presidenta se dio inicio al período más intenso del “Ensayo neodesarrollista” en el que se suscitó un intercambio declaraciones entre la presidenta y voceros de los banqueros que decantó en el desarrollo gubernamental de medidas fiscales que implicaron la reducción de la tasa básica de impuestos que fue del 12.5% al 7.25% entre agosto de 2011 y abril de 2013, que implicó la reducción de impuestos sobre los préstamos de créditos de los bancos, además de que esas medidas fueron acompañadas de exoneraciones de impuestos a 15 sectores intensivos en 2012, lo que para 2014 ya se traducía en exoneraciones a 42 sectores, ahorrándole a los empresarios de las ramas productivas alrededor de 25 billones de reales a través del programa “Reintegra” (Régimen especial de reintegración de los valores tributarios para las empresas exportadoras). Por otro lado en enero de 2011 el Banco Central de Brasil y el Ministerio de Hacienda elevaron las cuotas a las inversiones extranjeras de portafolio, aumentaron medidas de control de capitales en las captaciones externas, generaron iniciativas de protección al producto nacional, como se expresó en septiembre de 2011 con la elevación de impuestos a los productos que tuvieran menos del 65% de contenido local y para septiembre de

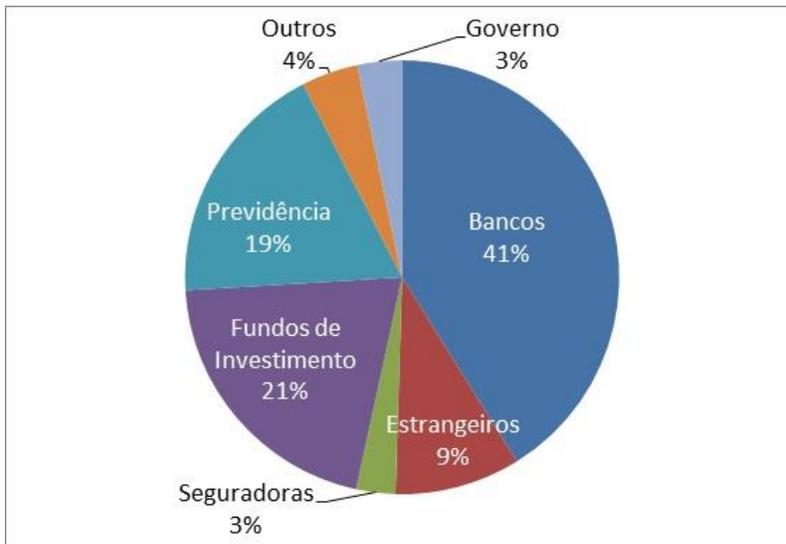
⁶⁹ Traducción propia. Texto original: “Há forte convergência entre os Conselheiros e Conselheiras do CDES quanto à necessidade de, nessa conjuntura externa instável, evitar movimentos especulativos no mercado financeiro e de commodities, atuando no sentido do estabelecimento de um marco regulatório adequado; aperfeiçoar a política cambial e de juros para evitar a valorização excessiva do Real e minimizar os prejuízos dos exportadores; difundir os mecanismos e instrumentos de apoio à inovação, de forma a criar um ambiente favorável ao processo de agregação de valor aos produtos comercializáveis e incentivar empresas brasileiras exportadoras; investir em infraestrutura e logística para reduzir os custos de produção e facilitar o comércio exterior; acompanhar e supervisionar movimentos de capital externo especulativo e incentivar ingressos de investimentos voltados para o setor produtivo”

2012 elevaron los impuestos de importación a productos de vidrio, móviles y neumáticos (Singer, 2015, págs. 47-50).

Eso habla de una serie de medidas más o menos proteccionistas a la burguesía productiva interna en materia monetaria que generó tensiones con los sectores financieros, aunque, ya para 2013, en medio de las consecuencias de la crisis económica, el gobierno Dilma no pudo continuar con su política económica y comenzó a ceder terreno frente a la reorganización del poder financiero que exigía una reconfiguración económica para proteger el ciclo del capital en Brasil, lo que se observó con la devolución del control de la política económica al gran capital financiero transnacional, retornando a sus beneficios originales en materia de impuestos bancarios libres, por ejemplo (Singer, *Cutucando onças com varas curtas. O ensaio desenvolvimentista no primeiro mandato de Dilma Rousseff (2011-2014)*, 2015, pág. 44).

Como cuarto elemento está el control de la deuda externa. Una de las acciones del gobierno de Luíz Inácio Lula Da Silva de la que hacia constante presunción era haber eliminado la deuda externa que para 2005, año en que se anunció la cancelación de la deuda, ascendía a 15.57 miles de millones de dólares, cuestión que era cierta en parte, pero que escondía otra verdad encubierta, y es que el método para eliminar la deuda externa fue traspasarla a modo de deuda interna, emitiendo bonos con empresarios y banqueros, con los que se generó el 41% de la nueva deuda, sin embargo, también se contrajo otra parte con los fondos de inversión (21%) y con los fondos de pensiones (19%), esenciales para el funcionamiento del BNDES.

Ilustración 2 Porcentajes de deuda interna contraída



Fuente: Auditoria cidadana pública "Deuda pública brasileira" 07/09/15
<https://auditoriacidada.org.br/video/divida-publica-brasileira/>

Abordar el concepto de burguesía productiva interna requiere pensarla de manera compleja en un contexto de mundialización y profundización de las relaciones dependientes, por lo que es importante entender su acción de manera delimitada por las propias reglas del capitalismo periférico, es decir, en momentos de tensión y crisis, esa fracción no dudó en respaldar sus intereses de clase, pero sobretodo, quedó evidenciada su fragilidad y su posición de permanente asociación subordinada frente a los intereses de la burguesía mundial imperialista. Esa burguesía, aunque con voz propia, queda supeditada en todo momento a su propio papel económico-político de reproducción del patrón exportador de producción especializada.

Contradicciones del frente neodesarrollista y reconfiguraciones dentro del bloque de poder

El arribo del PT al gobierno no implicó una reforma profunda del Estado, sino un cambio matizado en el bloque de poder que durante un breve período vivió el ensayo de la conformación de un frente neodesarrollista. Existe hegemonía cuando una clase determinada es capaz de hacer prevalecer sus intereses particulares por

encima de los intereses de otras clases, y lo hace cuando esos intereses particulares son contemplados como intereses generales (Gramsci, 1999) (Poulantzas, 2012), cosas que atañen a todos y que la sociedad en general es capaz de aceptarlos como propios o simplemente como adecuados. Sin embargo, los intereses de esa clase no se expresan en lo abstracto, sino a través de un bloque de poder que sea capaz de construir un proyecto que consense con las otras clases. Ese bloque de poder a su vez se constituye de diversas fracciones de clase, de entre las cuales una logra instaurar (en mayor medida, aunque nunca totalmente) su proyecto, su visión y su perspectiva a las otras fracciones. Dicho bloque, para ser dominante, de hecho puede no construirse de una sola clase, sino justamente, para poder imponerse, para poder hegemonizarse, puede que aglutine los intereses de otras fracciones y de otras clases (Gramsci, 1999), para así, ser capaz de incluir y darle sentido a un interés particular recubierto de interés general.

Pues bien, el bloque de poder brasileño durante el período neoliberal de Collor y Cardoso vivió algunos cambios durante los gobiernos de Lula y Dilma. En el primero se manifestaba una prevalencia hegemónica del capital multinacional, gracias al cobijo e impulso del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), que se preocupaban por la necesaria privatización, liberalización de las aduanas, disminución o eliminación de impuestos, crecimiento de la deuda externa, a la par de una alianza funcional con la derecha política expresada en el Partido de la Social Democracia Brasileira (PSDB) principalmente.

Durante los gobiernos de Lula y Dilma cambiaron de predominancia justamente dos actores: la fracción burguesa predominante y la clase reinante⁷⁰ en el gobierno. Por un lado, la Burguesía Interna productiva, extractivista, agroexportadora y manufacturera adquirió mayor relevancia gracias a la acción directa del Estado y de las contradicciones del mercado mundial en un período de alza de los precios de las materias primas; y por otro, el gobierno del PT con un discurso de conciliación

⁷⁰ La Clase Reinante es un grupo que se hace cargo de la dirección del Aparato de Estado, desde donde gobierna de tal manera que permita sostener consensos y hegemonía con otras clases y fracciones, ocupándose de las tareas burocráticas, administrativas, pero también políticas al proporcionar las condiciones necesarias para permitir la reproducción estable de las relaciones capitalistas y del orden político imperante (Poulantzas, 2012) (Osorio, 2014, págs. 40-41). Para tener credibilidad, no es extraño que la Clase Reinante se constituya de personas profesionales provenientes de clases medias, educadas para gobernar sin alterar el orden, es decir, para proporcionar gobernabilidad.

de clases y su política de supuesta distribución de la renta a partir de programas sociales.

En ese sentido, el gobierno del PT jugó un papel importante al otorgar gobernabilidad, estabilidad, unidad y hegemonía (Filgueiras & Goncalves, 2007, pág. 189) al orden social imperante. Con un discurso de distribución social y programas sociales como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida o el PAC, el PT logró proporcionar una salida a la crisis política de falta de legitimidad dejada por los gobiernos neoliberales. Si el proyecto neoliberal se mostró incapaz de sostenerse como proyecto de consenso, de hegemonía de las mayorías (Filgueiras & Goncalves, 2007, pág. 175), el proyecto petista fue capaz de otorgar cierta hegemonía parcial a un proceso de aceleración de acumulación del capital y transnacionalización de la burguesía interna.

Esta capacidad parcial de los gobiernos del PT se debió a su propia conversión ideológica a una posición pragmática y conciliadora con las clases dominantes, pero también a las alianzas establecidas, como muestran las representaciones de los distintos ministros tanto de Lula como de Dilma, que en total suman alrededor de 20 ministros con vínculos directamente ligados a grandes grupos económicos de la burguesía.

Entre esos destacan casos como el de Guido Mantega que resultó haber tenido nexos con EBX OGC o Antonio Palocci y Henrique de Campos Meirelles con JBS. También está el caso de Armando de Queiroz Monteiro, expresidente de la patronal Cámara Nacional de la Industria, o Kátia Abréu, representante del agronegocio y distintas empresas impulsoras del uso de transgénicos. Ni que decir de Alexandre Tombini, actual director ejecutivo del FMI o Joaquim Levy, actual director financiero del Banco Mundial y ex trabajador del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Europeo.

A la larga esas alianzas dieron vida a un frente que puso en marcha un ensayo neodesarrollista (Singer, *Cutucando onças com varas curtas. O ensaio desenvolvimentista no primeiro mandato de Dilma Rousseff (2011-2014)*, 2015), sin embargo, si bien la burguesía interna brindó su apoyo al gobierno de Lula durante la crisis del Mensalão (Boito Jr, 2012, págs. 85-97), esa misma burguesía se mantuvo ausente durante el proceso de Impeachment contra la presidenta Dilma

Rousseff, luego de un período de haber sido ventilado el nexo en la operación Lava Jato, encaminada particularmente a golpear a ese sector de la burguesía y el PT.

La crisis económica de 2008 devino crisis política en 2013 y en ese contexto, con la caída de los precios de las materias primas en el mercado mundial, la burguesía interna quedó limitada por su condición propia de subordinación y optó por cerrar filas y defender sus propios intereses como clase dominante, sin atisbo alguno de progresismo ni de proyecto político. A largo plazo, la burguesía interna no respaldó al frente neodesarrollista del bloque de poder, pues dejó de suscribir el proyecto neodesarrollista del PT y prefirió abstenerse de defender al gobierno durante el golpe para salvar su propia posición.

Queda pendiente para temas posteriores el análisis minucioso del papel de la burguesía interna durante el Impeachment, sin embargo quedó claro que ese fue el punto de quiebre que terminó de romper la unidad del frente neodesarrollista al interior del bloque de poder.

Como algunas hipótesis sujetas a discusión puede apuntarse que el crecimiento de la burguesía interna llegó a sus límites al participar de economías dependientes que se encuentran estructuralmente imposibilitadas para alcanzar los niveles de desarrollo capitalista de las economías centrales, chocando con su condición de dependencia y de proveedora de materia prima a los centros mundiales. En esa coyuntura de ruptura del frente, las tensiones actuaron promoviendo el golpe de estado que permitió reinstaurar un orden abiertamente ultraneoliberal, como lo fue el sostenido por el gobierno de Michel Temer.

Una de las expresiones de las contradicciones y límites del frente neodesarrollista, fue que las alianzas que lo sustentaron no se ciñeron a las vías “legales”, sino que se realizaron a través de las viejas vías estructurales de Brasil: las vías ilegales de la corrupción. La corrupción como tema estructural no es nuevo y de hecho es mayormente ejercida por la derecha política, acostumbrada a gobernar desde esos mecanismos (tales son los casos de Aécio Neves, Eduardo Cunha o Michel Temer), sin embargo, los casos de corrupción desnudan los vínculos, que, resaltados por la industria mediática, hicieron mella en la percepción social.

Otro elemento que se coloca sobre la ruptura del frente neodesarrollista al interior del bloque de poder tiene que ver con el desgaste de la hegemonía ejercida por los

gobiernos del PT. Las manifestaciones de 2013 dejaron entrever una inconformidad genuina de ciertos sectores sociales que exigían una transformación que fuera más allá de los apoyos de los programas sociales y que atendiera problemas más de fondo como la participación popular y la modificación del sistema político, la ampliación y mejora del sistema de salud, la atención a la calidad del transporte público o la profundización en el avance de la educación pública y gratuita. Además, las protestas de 2013 también señalaban de manera inconforme la alianza entre el gobierno y los grupos de la burguesía interna al manifestarse en contra de la edificación de grandes estadios de fútbol a través de licitaciones con empresas constructoras, mientras que el problema de desigualdad y exclusión social no eran llevados a una iniciativa de transformación social por parte del gobierno.

Las movilizaciones de 2013 significaron la evidencia de que el PT no podía sostener más el consenso y la gobernabilidad, lo cual fue aprovechado por la derecha política para ahondar la crisis de hegemonía del gobierno, a través de la apropiación y conducción de las manifestaciones, sobretudo en ciudades como Sao Paulo o Río de Janeiro. Esa crisis de hegemonía decantó en la ofensiva de esa derecha y el Golpe de Estado consolidado en 2016 contra Dilma Rousseff.

De cierto modo, a la burguesía ya no le era funcional un gobierno que no era capaz de dar hegemonía al modelo liberal y al patrón de reproducción de capital imperante, como lo había conseguido hacer hasta el momento.

La ruptura del frente neodesarrollista y sus imposibilidades como proyecto alternativo al neoliberalismo

Como se sostuvo al principio de este trabajo, el estudio de las alianzas permite observar las reconfiguraciones del Estado brasileño. Hasta aquí se ha sostenido que aunque el PT arribara al gobierno, eso no implicó una transformación profunda de las relaciones sociales que dan vida al Estado. Lo que sí alteró fue el frente dirigente al interior del bloque de poder, el cual estaba conformado por una alianza entre la burguesía interna y los gobiernos petistas. La reconfiguración de ese bloque permitió la convivencia de dos proyectos: el neoliberalismo y el neodesarrollismo.

Ambos resultaron ser dos vías para sostener el mismo patrón de reproducción de capital. Lo importante a señalar aquí es que la convivencia de los dos proyectos permitió al neoliberalismo sostenerse, aglutinado en nichos de poder no afectados en gran medida por los gobiernos petistas.

La formación de un frente neodesarrollista al interior del bloque de poder terminó siendo una ficción momentánea, pues lejos de sostener un nuevo paradigma, más bien, se permitió a la propiedad privada fortalecerse y expandirse en un mercado regional y mundial con apoyo y fondos del Estado. En otras palabras, el Estado se convirtió en un financiador directo de la gran propiedad privada, un gran aliado del libre mercado y de la burguesía dominante. Fue su política de conciliación de clases el medio por el cual logró consolidarse de esa manera, adoptando la perspectiva de la teoría liberal que dicta que el Estado es un pacto social que debe reproducir el orden y su forma de acumulación de capital.

El PT en ningún momento encabezó realmente una ofensiva contra los grupos sostenedores del proyecto neoliberal. Si bien en el plano meramente político se confrontó con el Partido de la Social Democracia Brasileira (PSDB), -el partido que había enarbolado el proyecto neoliberal hasta entonces-, su disputa se restringió a la consecución de votos. No existió en esa confrontación un proyecto que intentara promover la fuerza política de la sociedad civil, lo que devino una disputa por arriba, limitando su campo de enfrentamiento a las cámaras parlamentarias, a los ejecutivos nacional y locales, es decir, limitándose a optar por un enfrentamiento a nivel gobierno y de manera institucionalizada, sin incluir en ello a las organizaciones sociales, a los movimientos sociales, a las bases populares. Su convocatoria a esos sectores se restringió a procesos electorales, al llamado al voto, sin contemplarlos como sujetos colectivos, como actores protagonistas. Ese protagonismo más bien fue cedido al campo institucional, no al campo de la disputa social de clase. Se renunció a pensar a las clases subalternas como sujetos de cambio, sujetos de transformación.

Fue así, como en su disputa gobiernista institucionalizada, el PT optó por generar alianzas por arriba bajo la consigna de “dejar felices a todos”, es decir, con una política de conciliación. Sin la disputa social, la confrontación entre el PT y el PSDB

se tradujo en una mera pelea electoral que permitió al PSDB sostenerse como un nicho de oposición abiertamente neoliberal.

Por otro lado, en el sentido de su gobierno de conciliación, el PT sostuvo a un aliado preponderante que fue el Partido del Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), partido pragmático y oportunista, capaz de aliarse con quien le permitiera acumulación política. Ese nexo garantizó cierta gobernabilidad durante un tiempo, sin embargo, siempre fue planteada en términos pragmáticos, sin presencia de proyecto político, por eso aconteció la traición del actual dirigente máximo del PMDB, Michel Temer, -quien a su vez fue vicepresidente durante el gobierno de Dilma Rousseff-, al desconocer el acuerdo con el PT y convertir al PMDB en el principal negociador con los grandes grupos económicos y también convertirlo en el eje gobernante del proyecto neoliberal.

Fue el PMDB el partido interlocutor que durante el golpe y personificado en el mandato de Temer encabezó las reformas ultraneoliberales desde 2016 a la fecha, sosteniendo el proyecto neoliberal como proyecto dominante.

Hay además otro aspecto desde el cual se muestra que el PT evitó confrontar de manera frontal al neoliberalismo y ese es que incluso el reformismo se mantuvo ausente, pues los gobiernos petistas brillaron por la falta de reformas, ya que no existieron iniciativas realmente relevantes en materia hacendaria, comunicacional, política ni mucho menos una más compleja y profunda como la cultural-social. El PT intentó gobernar con medidas como los créditos o decretos, además de presentar reformas tibias que pudieran ser aceptadas por sus aliados en el parlamento.

Cuando iniciaron las protestas de 2013 (antes de ser cooptadas por la derecha), el gobierno de Dilma se demostró incapaz de entender la raíz de las demandas y la emergencia de nuevos actores políticos que no se sentían representados, que clamaban por hacerse presentes en el panorama político. Su gobierno no entendía cómo era posible que después de haber aplicado sus políticas asistencialistas, aumentado los índices de empleo y del Producto Interno Bruto, la gente no se sintiera satisfecha y en cambio sí optara por reclamar una ampliación de derechos sociales y formas de participación política. Desde el gobierno ese fenómeno fue descrito como “el improbable malestar en uno de los países que más combate las desigualdades y la pobreza” (Mercadante, 2013, pág. 441).

Solo fue después de las protestas que el gobierno se decidió a presentar una iniciativa de reforma política, pero ya era tarde, debido a que fue planteada como un parche ante la crisis y no como una iniciativa del proyecto neodesarrollista, por lo que fue una reforma aislada, sin el suficiente apoyo social, pero también, sin el apoyo parlamentario, pues los partidos conservadores indispuestos a perder privilegios no se iban a arriesgar en pleno momento de conflicto social.

Por otro lado, la reforma comunicacional ni siquiera llegó a ser planteada, a pesar de que el gobierno fue en diversos momentos blanco de linchamiento mediático-ideológico. De hecho, nada se hizo frente a la potentísima red comunicacional Globo, ni tampoco hubo intento de generar otras iniciativas estatales ni de comunicación social o de iniciativa mixta que rompieran con el monopolio de Globo. Con un pacto de conciliación que intentó gobernar “desde arriba”, sin alianzas serias con las clases subalternas y con ausencia de reformas transformadoras, fue que se permitió sobrevivir en sus nichos al proyecto neoliberal, sin trastocar ni generar un enfrentamiento político entre neodesarrollismo y neoliberalismo.

El neodesarrollismo, de esa forma, evitó plantearse como un proyecto alternativo que impulsara transformaciones estructurales y se posicionó realmente como un parcero, como un alcahuete del mercado, un aliado que permitiría fortalecer las posiciones de poder económico, político e ideológico de la burguesía.

El momento cúlpe de la adaptación del neoliberalismo por parte del PT se dio durante la campaña electoral de 2014 y lo que duró el segundo mandato de Dilma Rousseff.

Durante el enfrentamiento electoral de 2014 entre Dilma Rousseff y Aécio Neves (PSDB), la petista se planteó con un discurso de izquierda, confrontativo, en defensa de los programas sociales, mientras Neves se posicionaba como el depositario de la confianza de los grandes grupos económicos y como el principal sustentador del proyecto neoliberal. Finalmente, y con un estrecho margen, Dilma logró la victoria, sustentando la última parte de su campaña en la defensa de los programas sociales. Sin embargo, la vuelta al discurso de izquierda duró muy poco, pues durante el tiempo que duró su segundo gobierno, este terminó siendo una aplicación abierta del programa neoliberal con políticas drásticas de reducción de la inversión en gasto social, liberalización del mercado, etc. Ese nuevo viraje fue impulsado desde el

primer momento por sus propios funcionarios colocados ahí estratégicamente, principalmente por su Ministro de Hacienda, Joaquim Levy, antiguo directivo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.

Este período es el del neoliberalismo abierto del PT, no cabe la menor duda.

Mientras que el primer período de Dilma había sido el más fuerte ensayo por consolidar el proyecto neodesarrollista (Singer, 2015), lo cierto es que el neodesarrollismo no consiguió consolidarse como alternativa. De hecho fueron los más beneficiados por su política los que se voltearon en contra, desde los aliados políticos como el PMDB, hasta los integrantes de la burguesía interna, otrora principal beneficiada.

Como ya se había repasado hasta aquí, fue la burguesía interna incapaz de sostener y consolidar el frente neodesarrollista y no solo no se preocupó por meter las manos para defender al gobierno de Dilma Rousseff frente al golpe, sino que parte de esta pasó a aliarse con la andanada neoliberal, como fue el caso de la FIESP y su presidente Paulo Skaf, que pasó a generar posicionamientos opositores al PT (Singer, 2015, pp. 52-54), a pesar de haber sido importante respaldo durante la crisis del Mensalao (Boito Jr, 2012).

Las reformas que pugnan por precarizar el trabajo hoy día en Brasil, por medio de la ampliación de las jornadas de trabajo, fomentando el trabajo esclavo o incluso retardando la edad de jubilación, tienen en la mira como principal beneficiada a la burguesía nacional y trasnacional, sin duda alguna.

Frente a la pregunta de por qué la burguesía interna rompió su alianza con el PT, a pesar de que este la benefició permanentemente y además, terminó adoptando toda la agenda neoliberal durante lo último de su gobierno, es importante apuntar lo siguiente. Contemplar como principal aliada a la burguesía, resultó ser un enorme riesgo cuando es la burguesía la principal interesada en el funcionamiento del capitalismo en su etapa actual, es decir, en su etapa de mundialización, y desde la posición desde la que juega el capital latinoamericano, es decir, una posición de dependencia propia del patrón de reproducción de capital actual, la apuesta por una alianza con la burguesía productiva era una apuesta sin mucha seguridad de victoria. La burguesía no podía ser la aliada, pues esta tiene que optar por el rol al cual está condicionada a jugar dependiendo de su lugar de inserción en las

relaciones del capital mundial. La conciliación de clases tenía, entonces, una contradicción genética, pues acorde al modo de funcionamiento del capital mundial, la clase dominante no podía mantener una conciliación permanente.

En el caso brasileño, si bien el Estado dio un impulso que llevó a grandes grupos económicos de la burguesía interna a colocarse como competidores a escala mundial, es importante anotar que estos tienen como límites las condiciones de dependencia latinoamericana. Brasil, como país dependiente y como parte del patrón de exportación de producción especializada, puede sostener sus actividades comerciales bajo la condicionante de ser exportador de materia prima o manufactura básica, pues es ese tipo de producción el que los centros globales están dispuestos a consumir. Sin un mercado de consumo externo capaz de adquirir la producción interna de Brasil, la burguesía interna tiene poco con qué sobrevivir, pues el mercado interno brasileño, por más que haya crecido durante el período petista, sigue –y muy posiblemente seguirá siendo- insuficiente para la burguesía.

El mercado interno en América Latina sigue encontrándose en desventaja frente a la capacidad de consumo de los países más ricos, de los centros mundiales, debido a aquella característica que continúa siendo definitoria y determinante en América Latina: la superexplotación del trabajo (Marini, 1973). Debido a este fenómeno, las masas precarizadas latinoamericanas, siguen encontrándose imposibilitadas para adquirir bienes a los costos que pueden hacerlo los consumidores estadounidenses o europeos, pues no existe comparación.

Por otro lado, el alza en los precios de las materias primas exportables, se dejó sentir principalmente entre los empresarios brasileños, quienes vieron disminuir su margen de ganancia desde 2012 (Singer, 2015, p. 72), pero sobretodo, disminuyó la cantidad de exportaciones. Si atendemos al siguiente cuadro, observamos que entre 2013 y 2016 disminuyeron las exportaciones de 242 millones de dólares a 185 millones, a pesar de que aumentaba la importancia de las exportaciones en su porcentaje respecto al PIB.

Cuadro 17 Indicadores de comercio exterior (2012-2016)

Indicadores de comercio exterior	2012	2013	2014	2015	2016
Exportación de bienes (millones de USD)	242.578	242.034	225.101	191.134	185.280
Exportación de servicios (millones de USD)	37.393	36.482	39.047	32.989	33.300
Exportación de bienes y servicios (en % del PIB)	11,7	11,6	11,0	12,9	12,5
Comercio exterior (en % del PIB)	24,8	25,6	24,7	27,0	24,6

Fuente: WTO – World Trade Organisation ; World Bank , últimos datos disponibles.
https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/brasil/cifras-comercio-exterior?&actualiser_id_banque=oui&id_banque=35&memoriser_choix=memoriser

Fue durante la baja de exportaciones que la burguesía interna dejó de comprarse la idea del neodesarrollismo, y tuvo que retraerse, condicionada por el patrón de reproducción de exportación de producción especializada, es decir, tenía que recargarse en mayor medida en su condición de subordinación frente al contexto internacional y frente a la burguesía transnacional. Para ello, era importante que pudieran apoyarse más en el proyecto impulsado por la coalición PSDB-PMDB, puesto que el gobierno petista no conseguía más seguir generando políticas que alimentaran al patrón de exportación de producción especializada.

Ahora bien, desde el punto de vista político, la desaprobación popular era enorme en el momento en el que el gobierno del PT se daba un balazo en el pie al adoptar una política abiertamente neoliberal durante 2015. Era un momento en el que el PT ya no daba la garantía de dotar de legitimidad y consenso al orden social imperante, de ese modo dejaba de cumplir una función que era útil a las clases dominantes.

Si no se sostenía el nivel de hegemonía y gobernabilidad que anteriormente había otorgado el PT, sobretodo durante el gobierno de Lula Da Silva, entonces dejaba de ser imprescindible. Esa hegemonía comenzó a ser horadada desde las movilizaciones de 2013; ahondada por la campaña ofensiva permanente del PSDB,

la derecha política y Red Globo; levantada parcialmente en las elecciones de 2014, pero finalmente autoeliminada durante el gobierno petista neoliberal de 2015.

Hasta aquí tenemos entonces, que el Golpe de Estado de 2016 significó la culminación de un proceso de ruptura del frente neodesarrollista que durante un breve lapso logró sostenerse hegemónico.

Aquí cabe resaltar la gran ausencia de la sociedad civil, pues no fue vista como un aliado real en una disputa abierta. Ello sucedía porque por un lado, el PT se empeñó en minimizar la disputa con tal de privilegiar su política de conciliación de clases, su política de amistad con los grandes grupos económicos, por otro lado, la política orientada a las clases populares se centraba en el asistencialismo de sus programas sociales. Es decir, aunque se intentó y se logró dentro de lo que cabe, mejoras a las condiciones de vida cotidiana de los más pobres, esto siempre fue realizado a modo paternalista y vertical, como simple transferencia de fondos. Esa política no implicó concebir a las personas como un sujeto social, capaz de construir su propia historia. Entre la conciliación de clases y la visión instrumentalista de la sociedad, lo que terminó conformándose fue un gobierno “desde arriba”, adherido al relato que apunta a que las más importantes transformaciones del Brasil se dan a través de pactos entre grupos de poder institucional, poder económico, poder oligárquico y patrimonialista, pero no poder social (Fernandes, 1978) (Fontes, 2010).

En suma, los principales interesados en sostener el modelo neoliberal son los grandes grupos económicos que conforman las distintas fracciones de la burguesía, los cuales deben de asegurarse de cumplir con su rol condicionado por el capitalismo mundial, por lo que la conciliación de clases no implicó más que un pacto parcial y momentáneo por arriba. A la larga, la conciliación no resultó ser una vía capaz de revertir el neoliberalismo, al contrario, lo que hizo fue permitir adaptarlo, pues se renunció a la disputa real de proyectos, y al renunciar a la disputa se renunció también a la alianza con el único actor capaz de confrontar con la propiedad privada dominante, que serían las clases subalternas, como sujeto colectivo, los movimientos sociales, las organizaciones populares, la movilización de las camadas subalternas.

A pesar de que se conformó un nuevo frente dentro del bloque de poder, no se logró generar una configuración alternativa a un Estado neoliberal. Aunque la tensión se

consiguió moderar con programas sociales y existió un Estado que incursionó en nuevas áreas, sin embargo, no hubo transformación real a nivel del Estado. El frente garantizó la estancia del PT en el gobierno, mientras dio gobernabilidad y hegemonía a las clases dominantes, pero eso no implicó trastocar las relaciones que condensaron al Estado, no se consiguió una ampliación, una reforma o una reconfiguración que inundara al Estado desde lo social.

Conclusiones

El entusiasmo suscitado a partir de un momento de algidez de las izquierdas latinoamericanas en la lucha contra el neoliberalismo fue canalizado por ciertas posturas intelectuales que se centraron en empujar el relato de una llegada a un estadio posneoliberal o de implementación de un modelo alternativo al neoliberalismo, sin embargo, frente a los nuevos acontecimientos, es necesario poner mayor atención al análisis de las relaciones sociales para poder evitar falsos triunfalismos y así poder optar por una visión más crítica y detallada de los momentos por los que atraviesa la lucha de clases en América Latina.

En ese sentido, es necesario replantear el método de estudio de los procesos latinoamericanos, teniendo especial cuidado con el entendimiento estático de la política en el continente. Lejos de pensar estructuras e instituciones terminadas e inertes, es importante redoblar esfuerzos para pensar al Estado y a la política latinoamericana como estructuras y procesos abiertos de relaciones sociales que se mantienen sujetas a reconfiguraciones y transformaciones. Por ello, para poder realizar un diagnóstico certero de los alcances, avances y límites de las experiencias de los gobiernos progresistas hay que profundizar en los análisis de las relaciones sociales.

Ya no se puede seguir optando por una corriente de estudio que contemple al Estado como sinónimo de gobierno o de conjunto de instituciones, tampoco se puede pensar más a la política como una esfera divorciada de la economía o del campo de lo cultural. Por esas razones, a lo largo de la presente tesis se llevó a cabo un estudio de las relaciones sociales y sus estructuraciones a través del análisis detallado de las alianzas entre los grupos dirigentes del poder político y las fracciones más importantes del poder económico en Brasil y Chile.

Esa metodología arrojó resultados por demás importantes que intentan sentar líneas explicativas al fenómeno de adopción del proyecto neoliberal por parte de gobiernos que antaño apostaron por las vías de izquierda en el espectro político de sus respectivos países.

El caso chileno es emblemático en ese tenor, pues el Partido Socialista sostuvo una conversión radical en la que pasó de enarbolar el primer gobierno socialista en

América Latina triunfante vía elecciones a ser un partido legitimador del proyecto neoliberal, colocado al servicio de un bloque de poder con predominio de la burguesía trasnacional. Como se detalló, la alianza entre el Partido Socialista y el Partido de la Democracia Cristiana sostuvo gobiernos neoliberales luego del pacto transicional que le llevó a mantener los pilares más importantes de la dictadura al mismo tiempo en que se insertaba en el bloque de poder neoliberal, es decir, sosteniendo lo sustancial en su alianza subordinada frente a la burguesía trasnacional y apropiándose de un modo de gobierno tecnócrata, sin alianzas con la sociedad civil.

El caso brasileño, sí arroja un alcance mayor respecto al chileno, en términos de la inclusión de amplias capas marginadas de la sociedad por medio de programas sociales y de la disminución de la pobreza. Además, en Brasil, la conformación de una alianza entre el gobierno y la burguesía productiva interna expansiva permitió asegurar al PT una agenda de mayor calado en la inclusión social de lo que pudo conseguir el PS en Chile. La comparación entre ambos casos evidencia la importancia de las alianzas en la conformación del bloque de poder para poder hablar o no de la superación del neoliberalismo. Mientras que el bloque de poder en Chile se conformó por una clase burguesa trasnacional dirigente que logró establecer su brazo consolidado de tecnócratas en el Estado con un proyecto avanzado de sociedad, en el caso brasileño, la alianza con la burguesía interna fue importante para que el gobierno pudiera establecer su programa con la puesta en marcha de programas sociales de inclusión.

Mientras en Chile, la burguesía heredera del modelo de dictadura logró establecer su proyecto de clase como proyecto de sociedad, en Brasil la burguesía resultó más errática y eso permitió que sectores importantes de la burguesía interna pudieran generar una alianza con el gobierno, con el fin de impulsarse económicamente y escalar lugares en el mercado regional y mundial.

Los matices que diferencian al caso chileno del caso brasileño pasan por los horizontes del proyecto político de ambos casos y por las mismas estructuras y condiciones sociohistóricas por las que atravesaron. En Brasil, por ejemplo, la alianza entre el PT y la burguesía interna permitió hablar por un período, de un ensayo neodesarrollista que se planteaba alternativo al neoliberalismo, sin

embargo, en los hechos, el neodesarrollismo fracasó como vía alterna al proyecto neoliberal y eso sucedió debido a su necesidad de optimizar las vías de reproducción del capital de manera dependiente, terminó adoptando las mismas formas del programa neoliberal de ajuste, ya en un momento de algidez de la crisis político-económica del gobierno de Dilma Rousseff. La ruptura del frente neodesarrollista que comenzaba a ensayarse también partió de sus propias contradicciones, pues la burguesía productiva a pesar de conformarse del proceso productivo interno, continuó en todo momento siendo una clase dependiente subordinada a las burguesías trasnacionales y a las reglas del mercado mundial.

Sin embargo, a pesar de ese fracaso, Chile se encontró bastante más lejos de realizar un intento de separación de la vía neoliberal, restringiéndose a posturas de maquillaje y aceptación de las reglas neoliberales en todos los planos (político, económico, cultural, artístico, etc), apostando a programas de administración y gestión del modelo. En Chile, la dictadura barrió con cada uno de los nichos nacional-populares heredados de procesos políticos anteriores, incluidos los actores y sujetos sociales protagonistas de aquellos momentos, dejando como actor preponderante a la burguesía chilena aliada subordinadamente a la burguesía extranjera. La burguesía refundó los proyectos culturales y de cosmovisión de la sociedad chilena, estableciendo nuevos códigos y nuevas prácticas político-culturales que hasta la fecha han impedido y obstaculizado la emergencia de nuevos horizontes y cosmovisiones de sociedad.

En Brasil la dictadura no conllevó un carácter refundacional, por lo que la heterogeneidad de actores ha permeado en la incapacidad de la burguesía de establecerse como actor fundamental que instale un proyecto universal de sociedad. Lejos de ello, la burguesía se vio imposibilitada para establecer una cosmovisión propia y navegó en alianzas pragmáticas con el gobierno petista, sujeta a su condición dependiente frente a las burguesías trasnacionales; sin embargo, cuando los negocios internos dejaron de rendir fruto durante la crisis económica posterior a 2008 la burguesía productiva interna dejó la alianza con el PT de lado y optó por impulsar una vía que les permitiera optimizar su tasa de ganancia a través de leyes y políticas que promuevían el aumento de la superexplotación de los

trabajadores brasileños, es decir, cerraron filas entorno al proyecto ultraneoliberal de Michel Temer.

En Brasil no primó el neoliberalismo abierto durante la mayor parte de los gobiernos del PT, ya que una de las causas de que este último pudiera mantenerse gobernante era su capacidad de incluir a las capas sociales históricamente excluidas bajo un discurso nacional de conciliación de clases. Es por esa razón que el neoliberalismo durante los gobiernos petistas más bien fue un neoliberalismo diluido y con visos de discurso social, en suma, lo que primó en Brasil fue un social-liberalismo, que se sustentó principalmente en el seno del Estado a través de una alianza entre gobierno progresista y burguesía interna, esta última interesada en la alimentación de un mercado interno que permitiera acrecentar la tasa de acumulación. Sin embargo, una vez que la burguesía interna rebasó los umbrales del mercado brasileño y se insertó en los niveles regional y mundial, el mercado interno dejó de ser el referente clave y fundamental de sus negocios. Por eso, se puede observar que la burguesía brasileña no alcanzó a construir un proyecto universal de sociedad como sí lo hizo la burguesía chilena.

El neodesarrollismo, entonces, fracasó en su intento de autocolocarse como una vía alterna al neoliberalismo y fungió más bien como una nueva cara de un liberalismo social, que permitió la libre función del mercado, -incluyendo la libre actividad dominante de la burguesía- a la par de la propagación de programas sociales de disminución de la pobreza, programas focalizados y distribución de vivienda para los más pobres. Sin embargo, dicha focalización alcanzó un tope cuando en 2013 las manifestaciones en las calles pugnaban por llevar más allá las conquistas sociales y garantizar derechos universales de salud, educación, transporte, vivienda y trabajo.

El esquema de conciliación de clases se agotó con la sacudida de las crisis económica y política pues puso en evidencia una grave contradicción del frente social-liberal: el equilibrio entre clases es un obstáculo para la reproducción óptima del capital dependiente. Lejos de lo que aseguraba Dilma Rousseff en la conferencia magistral de clausura en el Congreso ALAS 2017, Brasil no se conformó como un país con posibilidades de desarrollo y superación de su papel primario-exportador dependiente, todo lo contrario, como se demostró a lo largo de la presente tesis, los

gobiernos petistas y su política social-liberal no hicieron más que reforzar el patrón exportador de producción especializada, con especial énfasis en la exportación de soja, hierro, combustibles fósiles y producción agropecuaria. No por nada el agronegocio, los frigoríficos y el sector productor de combustible fósil fueron los más beneficiados por los gobiernos de Lula y Dilma.

En términos del patrón de exportación de producción especializada, la diferencia entre Brasil y Chile es mínima y radica simplemente en los productos exportados, en Brasil prima la soja, el hierro, los frigoríficos y el petróleo, en Chile lo que más se vende al extranjero es vino, pescado, productos derivados de la madera y cobre. Ambos países coinciden en sostener sus actividades económicas de exportación de materia prima y de producción de baja manufactura.

La separación entre política y economía en la ciencia política predominante impide observar con mayor profundidad los fenómenos de poder que se establecen al interior de los Estados latinoamericanos, sin embargo, un análisis que opte por pensar ambas esferas en estrecha conectividad permite observar que el poder económico es una relación social en permanente vínculo con el poder político, la relación entre ambos poderes es una relación de relaciones con diferentes grados de primacía (a veces prima lo económico a veces lo político) que por momentos se estructuran de determinado modo, pero que siempre están en constante reconfiguración. Las estructuras sociales de poder mutan pues son relaciones sociales vivas, por tanto, es importante tener en cuenta eso para poder estudiar al Estado.

Como se mencionó anteriormente, para discernir el problema del neoliberalismo en Brasil y Chile fue necesario entender la diferencia entre Estado y gobierno, puesto que, mientras el segundo apunta al estudio de las instituciones visibles de estructuras del Estado, el primero tiene que ser analizado con mayor detenimiento y como síntesis de relaciones de poder y de fuerza entre distintos grupos y fracciones de clase que a su vez sostienen distintas proyecciones de sociedad.

En un análisis que no hace una diferencia sustancial entre la institucionalidad del gobierno y la relacionalidad del Estado, puede caerse en la inexactitud de pensar que cambio de gobierno implica ya per se un cambio en las correlaciones de fuerza de grupos y proyectos políticos, pues si bien, un nuevo gobierno ya implica un cierto

movimiento en las prácticas políticas, eso no significa una transformación de las estructuras y del proyecto de sociedad.

Tener en cuenta ese elemento teórico-metodológico permitió durante el presente trabajo rebasar conclusiones reduccionistas sobre un virtual arribo a un estadio posneoliberal o neodesarrollista. Se profundizó entonces, en el estudio del Estado actual en Brasil y Chile y eso condujo al análisis más detallado de los bloques de poder conformados durante los períodos de los gobiernos del PT y del PS en los años recientes.

El bloque de poder en ese sentido, es un elemento clave para el análisis de las relaciones y alianzas entre poder político y poder económico, al ser una especie de corazón de la dirección del Estado, además de que es un componente que se estructura desde las relaciones sociales, desde las correlaciones de fuerza de los distintos grupos político-económicos.

Al estudiar el bloque de poder se analizó la conformación de un frente neodesarrollista social-liberal entre la burguesía productiva interna expansiva y el PT, al describir por ejemplo los nexos entre distintos ministros de Estado y grandes grupos económicos, como fueron los casos de Joaquim Levy, ministro de hacienda de Dilma Rousseff durante 2015, quien estaba vinculado al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial; Alexandre Tombini, representante de Brasil ante el FMI; Armando Monteiro, representante de distintas cámaras patronales; Kátia Abreu, representante de la bancada del agronegocio; y Henrique Meirelles como presidente del Banco Central que a su vez había formado parte del holding del frigorífico JBS o de las Aerolíneas Azul, y un largo etcétera.

De igual manera sucedió al rastrear los nexos entre el Partido Socialista en Chile y los grandes grupos económicos, como se muestra en los casos de los ministros de Michelle Bachelet Nicolás Eyzaguirre y Alberto Arenas, trabajadores del Grupo Luksic a través del Canal 13 de televisión; también se encontraron los nexos del ministro de Ricardo Lagos Jaime Estévez con grupo Luksic al ser empleado en el Banco de Chile o del ministro Máximo Pacheco Matte, quien se encontraba al servicio tanto de grupo Angelini como de Luksic a través del Banco de Chile, AFP Provida y el gran consorcio Falabella.

A partir del análisis de los bloques de poder en Brasil y Chile se pudieron encontrar los nexos con los grupos económicos concretos y con ello realizar un balance más profundo de las características y actividades preponderantes de aquellos, como actores parte de fracciones de la clase dominante. Eso se consiguió, ya que el estudio de relaciones entre distintos actores políticos son elementos centrales en las prácticas y formas de estructurar el poder al interior del Estado.

En el fondo, una de las conclusiones importantes que hay que tomar en cuenta con este estudio es que el Estado neoliberal dependiente latinoamericano, continúa con su carácter de exclusión radical de las mayorías sociales en la construcción del poder político, pues a pesar de que tanto el Partido Socialista como el Partido de los Trabajadores provienen de una historia de lucha y reivindicaciones sociales de las capas subalternas, ambos sufrieron conversiones que culminaron en la adopción y abrazo del proyecto neoliberal. Ambos partidos apostaron por aceptar las reglas del juego y gestionar desde el gobierno el proyecto capitalista de sociedad, lo que los llevó a su vez a gobernar en alianzas con las grandes burguesías, aceptando su rol de optimizadores y facilitadores de las condiciones para la reproducción del capital fuese cual fuese la vía. En el caso chileno, el Partido Socialista aceptó en silencio el pacto de transición que permitió mantener intacto el esquema articulado durante dictadura, con constitución política incluida, a lo que se sumó un plan de gobierno de programas sociales focalizados y mínimas medidas de gestión y corrección del modelo. El Estado neoliberal chileno, se mantuvo entonces, con características de fuerte exclusión de la sociedad en la toma de decisiones, mismas que fueron puestas bajo cuestionamiento durante las manifestaciones estudiantiles de 2006 y 2011, pero que mantienen la estructura estatal oligárquica de dominio de clase con un proyecto hegemónico de sociedad.

En Brasil, la conciliación de clases puesta en marcha por el PT permitió durante un breve lapso equilibrar y esconder su orientación en favor de clases dominantes, al mismo tiempo que planteaba programas de mejoras sociales a los sectores más pobres del país. Sin embargo, el aliado fundamental en todo momento fue la gran burguesía, generando la ilusión de una transformación por arriba, vía acuerdo con las grandes clases dominantes y sin incluir a las capas dominadas en la construcción de un proyecto de sociedad democrática. El cambio por arriba resultó

ser mínimo y no le permitió al gobierno sortear la crisis económica, pues sus principales aliados no sustentaron más la propuesta de conciliación de clases. Las estructuras de un Estado que históricamente realizaba meros cambios por arriba, - de la mano de las clases dominantes-, persistieron y se colocaron como características clave también del Estado brasileño aún después de haber atravesado una década y media bajo la conducción de los gobiernos petistas.

Actualmente, los escenarios en Brasil y Chile han virado hasta convertirse en panoramas sumamente complicados para las izquierdas. En Brasil, la derecha y su insistencia por instaurar el golpe de estado contra la expresidenta Dilma Rousseff se extendió hasta lograr impedir la contienda de Luíz Inácio Lula da Silva por la presidencia apresándolo sin ningún sustento legal firme gracias a la intervención de la mano del juez Sergio Moro –anunciado como próximo ministro de justicia en el gobierno de Bolsonaro-. Como salida al problema, el PT optó por registrar al exgobernador de Sao Paulo Fernando Haddad como candidato a la presidencia y a Manuela D'Ávila como candidata a vicepresidenta, sin embargo, la victoria quedó en manos del exmilitar ultraconservador Jair Bolsonaro, abierto defensor del legado de la dictadura y que se posiciona en contra de derechos fundamentales de las mujeres, negros, grupos étnicos e integrantes de la comunidad LGBTTI.

Por su parte, la derecha encaramada en el PSDB no figuró dentro de las fuerzas más importantes para ganar la presidencia. En ese sentido, ese partido simplemente abrió paso a la ultraderecha sin ganar poder político realmente preponderante, hasta donde se puede observar por ahora.

Si bien, el futuro de ese país se mantiene incierto, tampoco el PT logró conformarse como una oposición viable que propusiera un cambio de fondo, pues poco o nada ha hecho para realizar una autocrítica profunda que ponga sobre la mesa los errores cometidos en el pasado y que proponga una dirección de cambio real, lo que deja como posibilidad el voto útil en negación a la ultraderecha. La posibilidad de construcción de un proyecto político en ese contexto se torna sumamente difícil.

En Chile, después de las pasadas elecciones, el triunfador fue nuevamente Sebastián Piñera, ultraconservador y defensor del legado del dictador Augusto Pinochet. Con una agenda de abierta censura hacia las expresiones de izquierda y en pro de los derechos sociales universales, el nuevo Frente Amplio atraviesa un

momento de gran incertidumbre acerca de su posible consolidación como verdadera oposición. Después de haber sido formado a través de alianzas de distintos grupos políticos estudiantiles, sindicales y barriales, el Frente Amplio logró colocar en un buen lugar a su candidata Beatriz Sánchez en los comicios presidenciales, además de conquistar escaños, concejalías y hasta una gubernatura y una senaduría, sin embargo, debido a fracturas internas y dificultad de construir un proyecto más o menos homogéneo de oposición, se ha restringido a ser un contrapeso fragmentado y parcializado, sin miras a una construcción de más largo aliento de hegemonía y sentidos comunes, sin embargo, su sola existencia permite entrever una posibilidad de disputa, en un escenario en el que persisten grandes deudas con la sociedad, como es la urgencia de derrumbar la Constitución de 1988 de la dictadura o echar para abajo el esquema privado de los fondos de pensiones, además de reformar profundamente los sistemas privatizados de seguridad social, salud, educación y servicios de transporte o atender a la disparidad extraordinaria en el pago de impuestos, entre tantos otros temas pendientes.

De cualquier manera, en Brasil y Chile, la posibilidad de articulación de una alternativa real al neoliberalismo pasa por construir proyectos de sociedad capaces de sintetizar alianzas con las capas sociales y reivindicar el derecho a tener derechos con carácter universal, esto es, en ambos casos abrir al Estado mismo, reconstruir las relaciones de poder al interior y ampliar proyectos de sociedad alternativos que puedan imprimir dirección a una nueva correlación de fuerzas, pues el Estado se sigue mostrando con una constitución de corte patrimonialista en Brasil y oligárquico en Chile, con una dirección política en pos de la exclusión de las grandes mayorías y la restricción de la democracia y la toma de decisiones que generan cambios mínimos y acotados hechos “por arriba”, al margen de la sociedad y las capas subalternas.

Además de la composición excluyente del Estado neoliberal, también es necesario poner sobre la mesa el cuestionamiento sobre ¿qué tipo de modelo de desarrollo es el buscado?, puesto que la ilusión de un desarrollo interno que le permitiese a los países latinoamericanos colocarse como países potencia ha vuelto a chocar contra la pared, pues el continente continúa atravesado por el carácter de

dependencia estructural, a pesar de que tanto se ha insistido en que el tema ha sido rebasado.

Para discutir el problema de dependencia y las nuevas oportunidades para la izquierda latinoamericana hay que recuperar los estudios de la especificidad de nuestra región, echando mano de la tradición de pensamiento sociológico, político e histórico de larga data, que tanto ha contribuido a proporcionar herramientas conceptuales lo suficientemente valiosas para pensar la actualidad.

Son momentos entonces, de que la ciencia política eche mano de los recursos del pensamiento latinoamericanista, pero también de que las ciencias sociales latinoamericanas profundicen con mayor finura en los problemas de las relaciones políticas y la conformación del Estado contemporáneo.

Bibliografía

(s.f.).

Álvarez Vallejos, R. (2015). *Gremios empresariales, política y neoliberalismo. Los casos de Chile y Perú (1986-2010)*. Santiago: LOM.

Alves, G. (2013). *Trabalho e neodesenvolvimentismo*. Brasil: Praxis.

Barbosa, N., & Pereira de Souza, J. (2010). A Inflexão do Governo Lula: Política Econômica, Crescimento e Distribuição de Renda. En E. Sader, *Brasil: entre o Passado e o Futuro*. Sao Paulo: Boitempo/Fundação Perseu Abramo.

Bauman, Z. (2008). *Tiempos líquidos. Vivir en una época de incertidumbre*. Buenos Aires: Tusquets Editores.

Bauman, Z. (2010). "Espacio/tiempo". En Z. Bauman, *Modernidad líquida*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Beck, U. (1998). *La invención de lo político*. México: Fondo de Cultura Económica.

Berringer, T. (2014). *Bloco no Poder e política externa nos governos FHC e Lula*. Campinas: Universidade Federal de Campinas.

Boito Jr, A. (2012). Governos Lula: a nova burguesia nacional no poder. En A. Boito Jr, & A. Galvao, *Política e classes sociais no Brasil dos anos 2000* (págs. 69-104). Sao Paulo: Alameda.

Boito Jr, A. (2017). O legado dos governos do PT. En G. Maringoni, & J. Medeiros, *Cinco mil dias: o Brasil na era do lulismo* (págs. 27-34). Sao Paulo: Boitempo.

Borón, A. (2012). *Estado, capitalismo y democracia*. Buenos Aires: Clacso.

Bresser-Pereira, L. C. (enero-abril de 2017). La nueva teoría desarrollista: una síntesis. *Economía UNAM*, 14(40), 48-66.

Carranza, T. (2007). *Entre el decir y el hacer. El discurso del PT*. Ciudad de México: CIALC/UNAM.

Castel, R. (2010). *El ascenso de las incertidumbres. Trabajo, protecciones, estatutos del individuo*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Castells, M. (s.f.).

Castells, M. (1997). *La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Vol 2*. España: Alianza editorial.

Castro Escudero, T., & Oliver Costilla, L. (2005). *Poder y política en América Latina*. México: Siglo XXI/UNAM.

- Caviedes, S. (abril de 2015). Cuando un crédito por \$6.500 millones poco importa. La verdadera influencia empresarial de grupo Luksic. *Cuadernos de coyuntura*(7), 37-50.
- Caviedes, S., & Bustamante, A. (junio de 2015). El papel de la tradición: la influencia empresarial del grupo Matte. *Cuadernos de coyuntura*(8), 40-55.
- Caviedes, S., & Bustamante, A. (agosto de 2015). La red de arrastre estatal: la influencia empresarial del grupo Angelini. *Cuadernos de coyuntura*(9), 1-13.
- De la garza, E. (2005). Del concepto ampliado de trabajo al de sujeto laboral ampliado. En E. De la garza, *Sindicatos y nuevos movimientos sociales en América Latina*. Buenos Aires: Clacso.
- Dussel, E. (2006). *20 Tesis de política*. México: Siglo XXI/ Centro de Cooperacion Regional para la Educación de adultos en América Latina y el Caribe.
- Fazio, H. (2016). *Los mecanismos fraudulentos de hacer fortuna*. Santiago: LOM.
- Fernandes, F. (1978). *La revolución burguesa en Brasil*. México: Siglo XXI.
- Filgueiras, L., & Goncalves, R. (2007). *A economia política do governo Lula*. Rio de Janeiro: Contraponto.
- Fontes, V. (2010). *O Brasil e o capital-imperialismo. Teoría e historia*. Río de Janeiro: Editorial UFRJ.
- García Linera, Á. (2011). *Las tensiones creativas de la revolución. La quinta fase del cambio*. La Paz: Vicepresidencia de Bolivia.
- Garretón, M. A. (2012). *Neoliberalismo corregido y progresismo limitado. Los gobiernos de la concertación en Chile 1990-2010*. Santiago de Chile: CLACSO/Prospal/Asdi.
- Garretón, M. A. (2012). *Neoliberalismo corregido, progresismo limitado. Los gobiernos de la Concertación en Chile, 1990-2010*. Santiago de Chile: CLACSO.
- Garretón, M. A. (2016). *La gran ruptura. Institucionalidad política y actores sociales en el Chile del siglo XXI*. Santiago: LOM.
- Garretón, M. A. (2016). *La gran ruptura. Institucionalidad política y actores sociales en el Chile del siglo XXI*. Santiago: LOM.
- Gentili, P., & Sader, E. (2012). *La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social*. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires.

- Gramsci, A. (1990). *Cuadernos de la cárcel*. Distrito Federal: Fondo de Cultura Económica.
- Gramsci, A. (1999). *Cuadernos de la cárcel*. México: Era/BUAP.
- Harvey, D. (2005). *Breve historia del neoliberalismo*. Madrid: Akal.
- Hayek, F. (2008). *Unión Editorial*. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de <https://www.elcato.org/sites/default/files/camino-de-servidumbre-libro-electronico.pdf>
- Hirsch, J. (1996). *Globalización, capital y Estado*. Ciudad de México: UAM-Xochimilco.
- Huneus, C. (2014). *La democracia semisoberana: Chile después de Pinochet*. Santiago de Chile: Taurus.
- Jessop, B. (2014). El Estado y el poder. *Revista internacional de filosofía iberoamericana y teoría social*, 19-35.
- Kosík, K. (1967). *Dialéctica de lo concreto*. Ciudad de México: Grijalbo.
- Lechner, N. (enero-marzo de 1996). Las transformaciones de la política. *Revista mexicana de sociología*(1), 3-16.
- León, E. (2015). *El expansionismo brasileño en sus límites. Geopolítica, energía, interconexión territorial y crisis material*. México: UNAM/ITACA.
- López Castellanos, N. (2001). *Izquierda y neoliberalismo. De México a Brasil*. México: Plaza y Valdés.
- López Sandoval, I. (2016). Elección pública y análisis institucional. *Economía informa*, 49-66.
- López Segrera, F. (2016). *América Latina. Crisis del posneoliberalismo y ascenso de la nueva derecha*. Buenos Aires: Ediciones CICCUS/CLACSO.
- López Segrera, F. (2016). *América Latina: Crisis del posneoliberalismo y ascenso de la nueva derecha*. Buenos Aires: CLACSO/CICCUS.
- Maringoni, G. (2017). Ascenso e queda de uma utopia tropical. En G. Maringoni, & J. Medeiros, *Cinco mil dias: o Brasil na era do lulismo* (págs. 35-50). Sao Paulo: Boitempo.
- Marini, R. M. (1991). *Dialéctica de la dependencia*. México: Era.
- Matamala, D. (2015). *Poderoso caballero. El peso del dinero en la política chilena*. Santiago: Catalonia/Periodismo-UDP.

- Mattoso, J. (2013). Diez años después... En E. Sader, *Lula y Dilma. Diez años de gobiernos posneoliberales en Brasil* (págs. 131-144). Madrid: Boitempo.
- Mercadante, A. (2013). *Brasil: de Lula a Dilma (2003-2013)*. Madrid: Clave intelectual.
- Miranda, E., & Rodríguez, Eduardo. (2002). *Examen crítico del Sistema de AFP. Mitos y realidades*. Santiago: Editorial Universitaria.
- Mönckerberg, M. O. (2015). *El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno*. Santiago: Debolsillo.
- Moulian, T. (1997). *Chile actual. Anatomía de un mito*. Santiago: LOM/Arcis.
- Oliver, L. (2005). Revisitando al Estado. Las especificidades del Estado en América Latina. En T. Castro, & L. Oliver, *Poder y política en América Latina*. Ciudad de México: Siglo XXI/UNAM.
- Oliver, L. (2011). Estado y sociedad civil en el capitalismo globalizado de América Latina. Cuestiones e interrogantes. En J. M. Calderón, *América Latina. Estado y sociedad en cuestión*. Ciudad de México: UNAM.
- Oliver, L. (2016). *La ecuación Estado/Sociedad civil en América Latina*. México: UNAM/La biblioteca.
- Osorio, J. (2004). *El Estado en el centro de la mundialización*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- Osorio, J. (2014). *El Estado en el centro de la mundialización*. México: FCE.
- Osorio, J. (2016). *Teoría marxista de la dependencia. Historia, fundamentos, debates y contribuciones*. México: Itaca/UAM-x.
- Pinho de Carvalho, A., & Costa, E. (2015). O BRASIL NO S...CULO XXI NOS CIRCUITOS DA CRISE DO CAPITAL: o modelo brasileiro de ajuste no. *Revista de Políticas Públicas*, 41-60.
- Poulantzas, N. (1979). *Estado, poder y socialismo*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Poulantzas, N. (2012). *Poder político y clases sociales en el Estado capitalista*. México: Siglo XXI.
- Rodríguez Castillo, L. (2008). Neoinstitucionalismo en ciencia política. *Economía, sociedad y territorio*, 549-560.

- Ruiz, C. (2016). Crisis política en Chile: neoliberalismo, cambios sociales y democracia. En M. A. Garretón, *La gran ruptura. Institucionalidad política y actores sociales en el Chile del siglo XXI* (págs. 83-108). Santiago: LOM.
- Ruiz, C., & Boccardo, G. (2015). *Los chilenos bajo el neoliberalismo. Clases y conflicto social*. Santiago de Chile: El Desconcierto/ Nodo XXI.
- Sader, E. (2008). *Posneoliberalismo en América Latina*. Buenos Aires: Clacso-CTA Ediciones.
- Safatle, V. (2017). *Só mais um esforço*. Três Estrelas.
- Sartori, G. (2002). *La política: Logica y metodo en las ciencias sociales*. México: FCE.
- Saxe-Fernández, J., & Delgado, G. (2004). *Imperialismo y Banco Mundial*. España: Popular.
- Saxe-Fernández, J., & Delgado-Ramos, G. (2007). *Imperialismo y Banco Mundial*. Madrid: Editorial Popular.
- Singer, A. (2012). *Os sentidos do lulismo. Reforma gradual e pacto conservador*. Sao Paulo: Companhia das letras.
- Singer, A. (Junio de 2015). Cutucando onças com varas curtas. O ensaio desenvolvimentista no primeiro mandato de Dilma Rousseff (2011-2014). *Novos Estudos*, 34(102), 29. Obtenido de <http://novosestudos.uol.com.br/produto/edicao-102/>
- Singer, A. (2015). Cutucando onças com varas curtas. O ensaio desenvolvimentista no primeiro mandato de Dilma Rousseff (2011-2014). . *Novos Estudos*.
- Sotelo, A. (2012). *Los rumbos del trabajo. Superexplotación y precariedad social en el siglo XXI*. . México: UNAM/Porrúa.
- Thwaites, M. (20 de mayo de 2016). La impugnación al neoliberalismo y su crisis. *La Diaria*.
- Valente, I. (2017). O colapso da conciliação de classes. En G. Maringoni, & J. Medeiros, *Cinco mil dias: o Brasil na era do lulismo* (págs. 59-64). Sao Paulo: Boitempo.
- Valenzuela, E. (2014). *La conversión de los socialistas chilenos. Esquema de transformación político-cultural de una élite desde la revolución al orden*. Santiago: El Desconcierto.

Zemelman, H. (2007). *De la historia a la política: la experiencia de América Latina*.

México: Siglo XXI.

Zibechi, R. (2012). *Brasil potencia. Entre la integración regional y un nuevo imperialismo*. México: Bajo tierra ediciones.